

María Eugenia Ibarra Melo • José Fernando Sánchez Salcedo • Lina Fernanda González Higuera
Freddy Alfonso Guerrero • Adriana Espinosa Bonilla

La intervención social en **Buenaventura** Aprendizajes y retos



Programa  Editorial

La intervención social en
Buenaventura
Aprendizajes y retos



Colección Ciencias Sociales
Investigación

Ibarra Melo, María Eugenia

La intervención social en Buenaventura. Aprendizajes y retos / María Eugenia Ibarra Melo, José Fernando Sánchez Salcedo, Lina Fernanda González Higuera, Freddy Alfonso Guerrero, Adriana Espinosa Bonilla.

Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2021.
188 páginas ; 24 cm-- (Colección Ciencias Sociales - Investigación)

1. Intervención social - 2. Vulnerabilidad social - 3. Redes de apoyo social - 4. Sistematización de experiencias - 5. Cambio social - 6. Gobernanza - 7. Buenaventura (Valle del Cauca).

361.2 cd 22 ed.

112

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: La intervención social en Buenaventura. Aprendizajes y retos

Autores: María Eugenia Ibarra Melo, José Fernando Sánchez Salcedo,

Lina Fernanda González Higuera, Freddy Alfonso Guerrero,

Adriana Espinosa Bonilla

ISBN-PDF: 978-628-7500-29-7

DOI: 10.25100/PEU.7500297

Colección: Ciencias Sociales-Investigación

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes

© Universidad del Valle

© Los autores

Diagramación: Dany Stivenz Pacheco Bravo

Corrección de estilo: Pacífico Abella Millán

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros.

El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.



Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons

Cali, Colombia, octubre de 2021

María Eugenia Ibarra Melo • José Fernando Sánchez Salcedo • Lina Fernanda González Higuera
Freddy Alfonso Guerrero • Adriana Espinosa Bonilla

La intervención social en
Buenaventura

Aprendizajes y retos



Colección Ciencias Sociales
Investigación

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
Objetivos y estructura del documento	11
LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS	15
CAPÍTULO 1	
CONDICIONES DEL CONTEXTO. EL TERRITORIO DEL PACÍFICO COMO LUGAR DE INTERVENCIÓN	
<i>María Eugenia Ibarra Melo</i>	19
Ubicación y características de la región Pacífico	21
Los pobladores del Pacífico	28
La desigualdad y la pobreza en el Pacífico	29
El puerto de Buenaventura. Entre el despojo y la modernización	33
Impactos del conflicto armado en los modos de intervención en Buenaventura	34
Referencias bibliográficas	41
CAPÍTULO 2	
LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN BUENAVENTURA. UNA LÍNEA DE BASE	
<i>María Eugenia Ibarra Melo</i>	45
Actores y agentes que intervienen en Buenaventura.	47
Teoría del cambio y prácticas de intervención	66
Reflexiones finales	90
Referencias bibliográficas	93

CAPÍTULO 3

EXPERIENCIAS, APRENDIZAJES, REDES Y ESTRATEGIAS CULTURALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN BUENAVENTURA

Freddy Alfonso Guerrero Rodríguez, María Eugenia Ibarra Melo,

<i>Adriana Espinosa Bonilla</i>	97
Introducción	97
Experiencias de intervención social y comunitaria	98
Trayectorias individuales y legitimidad organizacional	104
Legitimidad y relacionamiento (redes) con las comunidades	107
Configuración de redes a través de alianzas y lineamientos estratégicos de organizaciones que comparten objetivos similares	114
Rostros urbanos	116
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic)	119
Pastoral Social de Buenaventura	122
Espacio Humanitario Puente Nayero	124
Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (Fundescodes)	128
Mapa de red total.	132
Referencias bibliográficas	138

CAPÍTULO 4

POTENCIALIDADES DE LA GOBERNANZA LOCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN

Lina Fernanda González Higuera, Freddy Alfonso Guerrero Rodríguez,

María Eugenia Ibarra Melo, José Fernando Sánchez Salcedo,

<i>Adriana Espinosa Bonilla</i>	141
Introducción	141
El contexto político: actores y redes de política en Buenaventura.	143
Características de las buenas prácticas de intervención	160
Principales dificultades que enfrentan las experiencias comunitarias	171
Otras articulaciones interorganizaciones: el paro cívico como un ejemplo emblemático de potencial gobernanza	174
Referencias bibliográficas	182

AUTORES	185
--------------------------	-----

PRESENTACIÓN

Una labor indispensable para seguir invirtiendo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del Pacífico, en la defensa de los recursos naturales y en la conservación del territorio ancestral de culturas autóctonas es *inventariar* las inversiones recientes realizadas por distintos agentes que tienen o hacen presencia en la región. Del mismo modo, es indispensable *conocer y entender* ¿cómo participan las organizaciones sociales en las políticas, los planes, los programas y los proyectos que planifican otros agentes?, ¿de qué modo se involucran en su ejecución, seguimiento y evaluación?, ¿cuáles son las dinámicas que les han sido impuestas y en cuáles conservan su autonomía para actuar en su presente y su futuro?, ¿existen o están ausentes las redes sociales en las formas de gobernanza local para la gestión de lo público?, ¿qué capacidad instalada han dejado estas intervenciones?, y *comprender* cuál es la teoría del cambio que está detrás de esas intervenciones.

Por lo anterior, investigadores de la Universidad del Valle y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali formulamos el proyecto *Sistematización de experiencias de intervención social en el municipio de Buenaventura y en el Pacífico colombiano. Una línea de base para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad después de los acuerdos de La Habana*, e intentamos contestar los interrogantes que suscita esa larga relación entre los agentes interventores y los sujetos intervenidos. Agradecemos a las dos Universidades todo el apoyo brindado para

concluir satisfactoriamente el proyecto¹. Sin duda, este trabajo propició la oportunidad para fortalecer la discusión sobre la intervención social, sus problemas y desafíos en la comunidad académica local.

Por el carácter del proyecto, la primera fase se orientó a la búsqueda y tratamiento de información documental. La segunda se sustentó en el diálogo con líderes, funcionarios y profesionales vinculados al tercer sector, ONG, fundaciones, agencias de cooperación y organismos internacionales; en algunas visitas a las comunidades y a las organizaciones se validó la información recogida a través de fuentes secundarias y se estableció un diálogo más directo con los actores implicados como sujetos de producción del conocimiento. La tercera fase estuvo dedicada a la producción del informe de investigación, al diseño de una cartilla y a la presentación de resultados en varios eventos académicos.

En el Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, CIDSE, de la Universidad del Valle, reposan los mapas y bases de datos, disponibles para la consulta de las organizaciones, instituciones y personas que los requieran. Estos instrumentos son valiosos para negociar, en mejores condiciones, las próximas intervenciones que ofrezcan, que soliciten o exijan a los diferentes agentes.

Este acercamiento con los datos primarios y secundarios también permitió identificar factores de éxito y fracaso en función de los objetivos propuestos al inicio de las intervenciones y las formas como se ha conseguido el mejoramiento de la calidad de vida de la población receptora de políticas públicas, planes, estrategias, programas y proyectos. Con el inventario de las intervenciones que se presentan en el Anexo 1, Matriz de proyectos, y el análisis de los casos seleccionados, proporcionamos orientaciones y recomendaciones con mayor sentido social, para que los proyectos locales y regionales contribuyan a la construcción de una sociedad más equitativa, justa y en paz. Las organizaciones tomadas como referentes fueron: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), Asociación Cultural Rostros Urbanos, Espacio Humanitario, Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (Fundescodes),

¹ Este proyecto fue identificado con el código 6189 de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. La investigadora principal fue la profesora María Eugenia Ibarra Melo, integrante del Grupo de Investigación Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso. Los coinvestigadores fueron los profesores José Fernando Sánchez Salcedo, del grupo Sociedad, Historia y Cultura, de la Universidad del Valle; Lina González y Freddy Guerrero, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y Adriana Espinosa, de la Universidad del Pacífico. También participaron, en calidad de asistentes de investigación, el estudiante Leandro Cárdenas, de la Maestría en Sociología, y Diani Mesa y Maura Vera, del pregrado en Sociología, de la Universidad del Valle.

Pastoral Social de Buenaventura, Consejo Comunitario de La Barra, Consejo Comunitario de Bahía Málaga.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El objetivo general de esta investigación fue *sistematizar las intervenciones de diferentes actores y agentes en procesos de gestión social, paz y desarrollo, enfatizando en buenas prácticas y experiencias exitosas durante el nuevo milenio (2000-2017)*. De ese modo, propusimos construir **una línea de base** que nos permitiera identificar las principales intervenciones/inversiones que han realizado diferentes agentes en Buenaventura, identificando la teoría del cambio que está presente en los modelos de gestión. En segundo lugar, **proporcionar un inventario** de organizaciones de base y redes de organizaciones que trabajan con los agentes interventores en la región. Por último, **identificar las potencialidades de la gobernanza local y regional** en el horizonte de construir escenarios de gestión social, paz y desarrollo. En algunos casos, formulamos recomendaciones para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad postacuerdos de La Habana. El desarrollo de estos objetivos se presenta en tres capítulos, precedidos de uno sobre las condiciones del contexto, el balance de los estudios previos y los referentes conceptuales que guían la interpretación de los datos y los detalles de la ruta metodológica.

En el segundo capítulo, *Una línea de base para identificar la inversión/intervención en Buenaventura*, nos basamos en la recopilación y sistematización de datos secundarios, cualitativos y cuantitativos, de fuentes institucionales y no gubernamentales; como también, en la información primaria recabada en talleres, observaciones en terreno, entrevistas y conversaciones informales con líderes, funcionarios de la administración pública y profesionales vinculados a ONG, fundaciones, agencias y organismos internacionales.

El análisis y la interpretación de los datos muestran quiénes son la población afectada/beneficiaria; qué recursos han estado disponibles para atender sus necesidades (institucionales, financieras, de recursos humanos, de programas, etc.); qué actores han intervenido; cuándo y cómo han intervenido y cuál es la relación entre la población, sus necesidades y los actores estratégicos que influyen real o potencialmente en afrontarlas. Ese ejercicio de línea de base nos permite proporcionar al menos dos productos principales, entre otros emergentes:

1. *Listados de los actores implicados en la intervención social que se ha adelantado en Buenaventura.* Incluye la identificación de cuatro tipos de agentes con lógicas bien diferenciadas: **el Estado** en todos sus niveles (agencias, unidades, departamentos, direcciones, institutos, organismos, centros y entes de control, ministerios, universidades, instituciones de formación técnica); **el tercer sector** incluye agencias de cooperación internacional, organismos internacionales, ONG globales, nacionales y locales; **los agentes privados** (empresas y fundaciones encargadas de la responsabilidad social empresarial), entre estos incluimos la Iglesia porque no siempre actúa como ONG, sino directamente y, por supuesto, **la comunidad organizada** en diferentes formas de asociación.
2. *Una línea de tiempo* que muestra la dinámica de las intervenciones asociadas a los hechos del contexto local, nacional e internacional, y que permite comprender que los proyectos son resultado de una construcción social en la que se confrontan lógicas razonables, desde la posición y la perspectiva de los agentes involucrados, ya sea en la generación de los problemas, en el mantenimiento de estos o en su solución. Aunque definimos el año 2000 como punto de partida, en algunos casos nos referimos a un periodo más amplio, que contempla varios años hacia atrás, dada la particularidad de las intervenciones que se han dado en Buenaventura. A la dimensión temporal le sumamos la identificación de algunos acontecimientos políticos que marcaron la forma y dinámica de la intervención durante el periodo de interés, tal como se puede observar en la Ilustración n.º 1.

En el tercer capítulo, *Experiencias, aprendizajes, redes y estrategias culturales de la intervención social en Buenaventura*, realizamos un análisis de los procesos que han adelantado siete experiencias locales; observamos las trayectorias de algunos de sus líderes y el modo como las organizaciones adquieren legitimidad en los territorios o sectores donde intervienen. También aportamos una interpretación sobre el fomento de alianzas y lineamientos estratégicos que construyen con otros actores y los representamos en mapas de redes.

El cuarto capítulo, *Potencialidades de la gobernanza local y buenas prácticas de intervención*, muestra el contexto en el que actores económicos y redes políticas inciden en la reconfiguración del poder político en el puerto de Buenaventura. Afirmamos que no existe una élite política en el puerto, sino varias redes políticas con amplio poder corruptor, y que han surgido importantes liderazgos sociales y culturales que se van posicionando en los

cargos de elección popular. En la segunda parte de este capítulo, el análisis se concentra en las características de las buenas prácticas de intervención que fueron identificadas en la revisión y el análisis de las fuentes documentales y etnográficas. Al final, nos detenemos en el análisis del paro cívico como un ejemplo emblemático de articulación interorganizacional.

María Eugenia Ibarra Melo
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales
Integrante del Grupo de Investigación Acción Colectiva
y Cambio Social, Acaso
Universidad del Valle



Grandes planes y proyectos del Estado para la costa del Pacífico y Buenaventura: Municipio como distrito especial, rehabilitación de la vía férrea, plan de expansión portuaria, Puerto TCBuen, Puerto de Agua Dulce, Malecón Bahía de la Cruz, Delta del río Dagua.



Marco legal que reconoce la propiedad colectiva de afrodescendientes e indígenas y efectiva titulación de tierras (desde la CPN de 1991 hasta hoy). Incluye convenios internacionales, documentos Conpes para la población afrocolombiana y el Pacífico, Conferencia mundial contra el racismo, etc.



Incremento de la victimización por causa del conflicto armado (enfrentamiento entre las Farc, AUC, bandas emergentes-Bacrim, otros grupos armados al margen de la Ley - GAOML y las FFAA) Grandes masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado intraurbano y hacia las ciudades.



Nueva institucionalidad creada a partir de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y decretos reglamentarios para restitución de tierras despojadas.



Profunda inestabilidad política: alcaldes investigados por corrupción y posteriormente destituidos.



Desmovilizados de las AUC (2003-2005), Ley 975 de 2005 y diálogo de paz de la Habana entre el Gobierno nacional y las Farc (2012-2016).



Amplia movilización social: Acción colectiva étnica, de mujeres, de víctimas, ambiental, etc. que culmina en el paro (2017) con repercusiones regionales y nacionales.



Inserción de Colombia en instancias internacionales: Alianza del Pacífico, OCDE, Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otras.



Intervención militar en la zona urbana contra el narcotráfico y la minería ilegal la violencia que estas actividades desencadenan y que victimizan a la población de Buenaventura.

Ilustración n.º 1. Escenario político y social de la intervención en Buenaventura

Fuente: elaboró María Eugenia Ibarra con base en la revisión documental.

LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACDI: Agricultural Cooperative Development International
ACIVA-RP: Asociación de Cabildos Indígenas del Valle de la Región Pacífico
ACNUR: Agencia de la ONU para los Refugiados
Acoe: Asociación Centro de Orientación Educativa
Aconur: Asociación de Comunidades Negras del Río Raposo
ACTEC: Asociación para la Cooperación Cultural, Técnica y Educativa
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Afrodes: Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados
AMUAFROC: Asociación de Mujeres Afrocolombianas
Anafro: Autoridad Nacional Afrocolombiana
Andi: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Anmucic: Asociación de Mujeres Negras e Indígenas de Colombia
Anspe: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
ANT: Agencia Nacional de Tierras
Anuc: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
APC: Agencia Presidencial de Cooperación
Aponury: Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí
Arakatanga: Asociación de Agricultores y transformadores del río Anchicayá.
ART: Agencia para la Renovación del Territorio
Asonav: Asociación Nacional de Navieros
Asoparupa: Asociación de Parteras Unidas del Pacífico
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
AUCT: Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial
Aunap: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Bancolombia: Banco de Colombia
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BID: Banco Internacional de Desarrollo

BRC: Banco de la República
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CCBUN: Cámara de Comercio de Buenaventura
CDB: Banco de Desarrollo de China
CDOMV: Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle
Cedesur: Centro de Estudios del Sur Decolonizando el Pensamiento
Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Ceppei: Centro de Pensamiento Estratégico Internacional
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CIJP: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica
CNP: Centro Nacional de Productividad
CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Codinco: Comité de Defensa de los Intereses del río Cajambre
Colfecar: Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera
Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
CVC: Corporación autónoma regional del Valle del Cauca
DDRS: Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
DD. HH.: Derechos Humanos
Deca: Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria
DIH: Derecho Internacional Humanitario
Dimar: Dirección General Marítima
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DPS: Departamento de Prosperidad Social
Echo: Operaciones Europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
EPM: Empresas Públicas de Medellín
EPS: Entidad Promotora de Salud
EPSA: Empresa de Energía del Pacífico
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
FDI: Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico
FGIDS: Fundación para la Gestión, Innovación y Desarrollo Sostenible
Findeter: Financiera de Desarrollo Territorial
Fonade: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollos
Foncolpuertos: Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia
Fundescodes: Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social
Funindecocom: Desarrollo de las Comunidades
FUPAD: Fundación Panamericana para el Desarrollo
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HRW: Human Rights Watch
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICTSI: International Container Terminal Services
Incoder: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Minavieja: Organización del río Mayorquí
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
NRC: Consejo Noruego para Refugiados
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Ocha: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM: Organización Internacional para las Migraciones
Oncaproteca: Organización Negra Campesina Pro-defensa del río Calima
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia
OnuirA: Organización de Negros Unidos del río Anchicayá
Orivac: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
PBI: Peace Brigades International
PCN: Proceso de Comunidades Negras
Pinpesca: Asociación de Pescadores y Piangueras del río Cajambre
Plaidecop: Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica Colombiana
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Profamilia: Asociación Probienestar de la Familia Colombiana
Propal: Productoras de Papeles S.A
Sena: Servicio Nacional de Aprendizaje
SJR: Servicio Jesuíta a Refugiados
SMLV: Salario Mínimo Legal Vigente
SPB: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A
SPIA: Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce
SWISSAID: Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo
TC Buen: Terminal de Contenedores de Buenaventura
TLB: Terminal Logístico de Buenaventura
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UE: Unión Europea
UNGRD: Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres
Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
Usaid: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Voca: Volunteers Overseas Cooperative Assitence
Wola: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza

**CONDICIONES DEL CONTEXTO.
EL TERRITORIO DEL PACÍFICO COMO LUGAR
DE INTERVENCIÓN**

*María Eugenia Ibarra Melo*¹

El Pacífico colombiano pasó de ser un lugar “olvidado” por las élites del siglo XIX a convertirse en el escenario de la esperanza para los negocios internacionales que posicionarían a Colombia en el mundo. Escobar (2010) plantea que la primera denominación de biólogos y planificadores, en los años 1950, para referirse a esta región era *Chocó biogeográfico*; más adelante, los activistas del movimiento de negritudes construyeron la referencia *Pacífico geográfico o territorio-región*. En el siglo XXI, “este lugar continúa siendo no sólo una dimensión crucial de la configuración de mundos locales y regionales, sino de la articulación de hegemonías y resistencias a ellas” (Escobar, 2010, p. 47).

En este siglo, la producción académica en Ciencias Sociales sobre la región es muy amplia y abarca diferentes dimensiones, como, por ejemplo, el aislamiento al que ha sido sometida, tanto por las condiciones adversas para comunicarse con el resto del país, como por el racismo estructural, simbólico y directo contra la población negra e indígena que allí habita (Restrepo y Rojas, 2004; Oslender, 2004; Castillo, 2007; Vilorio de la Hoz, 2008). Otros trabajos se han dedicado a mostrar la vulnerabilidad de sus ecosistemas (Restrepo y Uribe, 2012) y a denunciar la irrupción violenta de los actores armados, la instalación de empresas criminales

¹ Profesora, Grupo de Investigación Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso, Universidad del Valle.

asociadas a la minería ilegal y a la producción de cultivos de uso ilícito. También han revelado cómo las empresas legales han deteriorado la convivencia al apropiarse de amplias extensiones de tierras de indígenas y campesinos negros, para la instalación de cultivos de palma, proyectos mineros, etc. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015; Defensoría del Pueblo, 2016; Galvis, Moyano y Alba, 2016; Leal, 2017).

Del mismo modo, otros agentes privados, en connivencia con autoridades civiles y militares, han propiciado el saqueo de los recursos maderables, la pesca indiscriminada y la contaminación de las fuentes de agua con mercurio para facilitar la extracción de oro. Estas prácticas de terror contra los pobladores y de sobreexplotación de recursos naturales han vaciado el territorio y han debilitado las formas ancestrales de producción. Varios de esos proyectos, como documentan Castillo (2007), Escobar (2010) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), obedecen a estrategias de desterritorialización que han tenido efectos devastadores para las comunidades, como su desplazamiento hacia las ciudades.

En este contexto, la población ha sido sometida a profundas tensiones. En algunas oportunidades, los pobladores han practicado la neutralidad activa y la resistencia pacífica, oponiéndose a los proyectos extractivos y a las imposiciones de los actores armados; pero, en la mayoría de los casos, han sido forzados a tomar parte por un bando u otro, a fin de garantizar su propia vida y la pervivencia de su comunidad. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (2013) señaló que la región era la principal expulsora de población por razones asociadas al conflicto armado y la violencia homicida, que acarrearón grandes desplazamientos de población hacia las ciudades.

La consecuencia de esta situación se comprueba en los indicadores tan negativos que alberga la región: baja esperanza de vida, precarias condiciones de salud, elevados indicadores de mortalidad materna e infantil y escaso número de hogares que pueden disponer del suministro de agua potable, acceder a los servicios públicos domiciliarios de calidad y al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Como evidencian los estudios de Vitoria de la Hoz (2008), la vida de más de un millón de colombianos que habitan el litoral pacífico se desarrolla en precarias condiciones.

Pero, a pesar de las incertidumbres diarias, esta población aprendió a organizarse, a demandar sus derechos y reclamar su ciudadanía. Sin embargo, esas acciones colectivas los han puesto en riesgo y, cada vez, más hombres y mujeres son asesinados, desaparecidos y mutilados. Esa violencia contra sus líderes y el territorio ha debilitado sus vínculos sociales, y ese rompimiento del lazo social es uno de los principales factores que dificultan la

construcción de una paz duradera —como se pretendió con el acuerdo de La Habana en 2016—, porque afecta la confianza y la cooperación, aspectos fundamentales para el buen vivir. A continuación, mostramos una breve ubicación espacial de la región Pacífico y, más adelante, de Buenaventura.

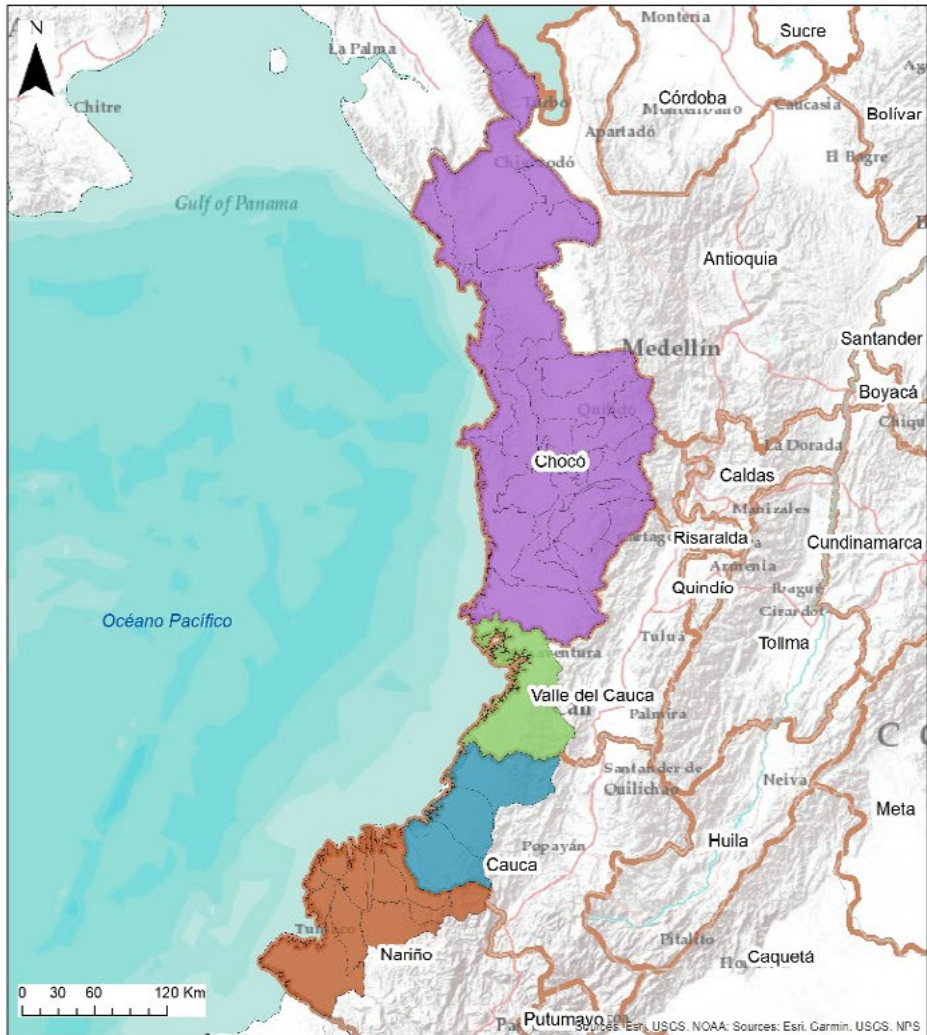
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO


Esta región se ubica al occidente del país, limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al oriente con la región andina y al occidente con el océano Pacífico. De acuerdo con Fedesarrollo (2018), la población de la región Pacífico, que incluye los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en 2016, era de 8.323.499, es decir, el 17,07% de la población nacional. Su territorio alcanza aproximadamente 10.000.000 de hectáreas, que abarcan desde el Tapón del Darién y la zona fronteriza con Panamá, hasta el límite con Ecuador (véase Mapa n.º 1.1). Es una región con vasta vegetación, puesto que la mayor parte de su suelo se encuentra cubierto con bosques pluviales, lo que hace que esta zona sea conocida como el Chocó Biogeográfico. Posee el 10% de la biodiversidad del planeta y es una de las regiones con más altos niveles de pluviosidad y humedad (Castillo, 2016).

En total, la región está conformada por 45 municipios, buena parte de su territorio comprende vegetación selvática, cuencas hidrográficas y zonas pantanosas, que la hacen rica en recursos naturales maderables y mineros (oro, plata y platino) (véase Mapa n.º 1.2).

De hecho, la minería es una de las actividades más importantes en el litoral Pacífico, solo en Nariño hay cerca de 200 títulos mineros, el 58% destinados a materiales de construcción y el resto, a metales preciosos, en los que se destaca la explotación de oro. En 2013, este departamento produjo el 6,43 % del total nacional, de acuerdo con el DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Sin embargo, la explotación ilegal y criminal causa graves daños ambientales y acarrea violencia y alta criminalidad.

Las características del territorio del Pacífico han influido en las actividades económicas que allí se desarrollan, así como en los asentamientos de la población y en la comunicación con otras regiones del país. En el primer caso, la región posee dos tipos de superficies: los acantilados rocosos y las bahías ubicadas al norte; al sur está la llanura inundable del Pacífico, caracterizada por ciénagas y esteros. Esa superficie rocosa impidió la construcción de un puerto marítimo en Chocó. Por el contrario, Buenaventura y Tumaco contaron con mejores condiciones para la apertura de puertos,





Universidad
del Valle

Sistematización de experiencias de intervención social en el Municipio de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Una línea de base para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad después de los acuerdos de La Habana

Convenciones

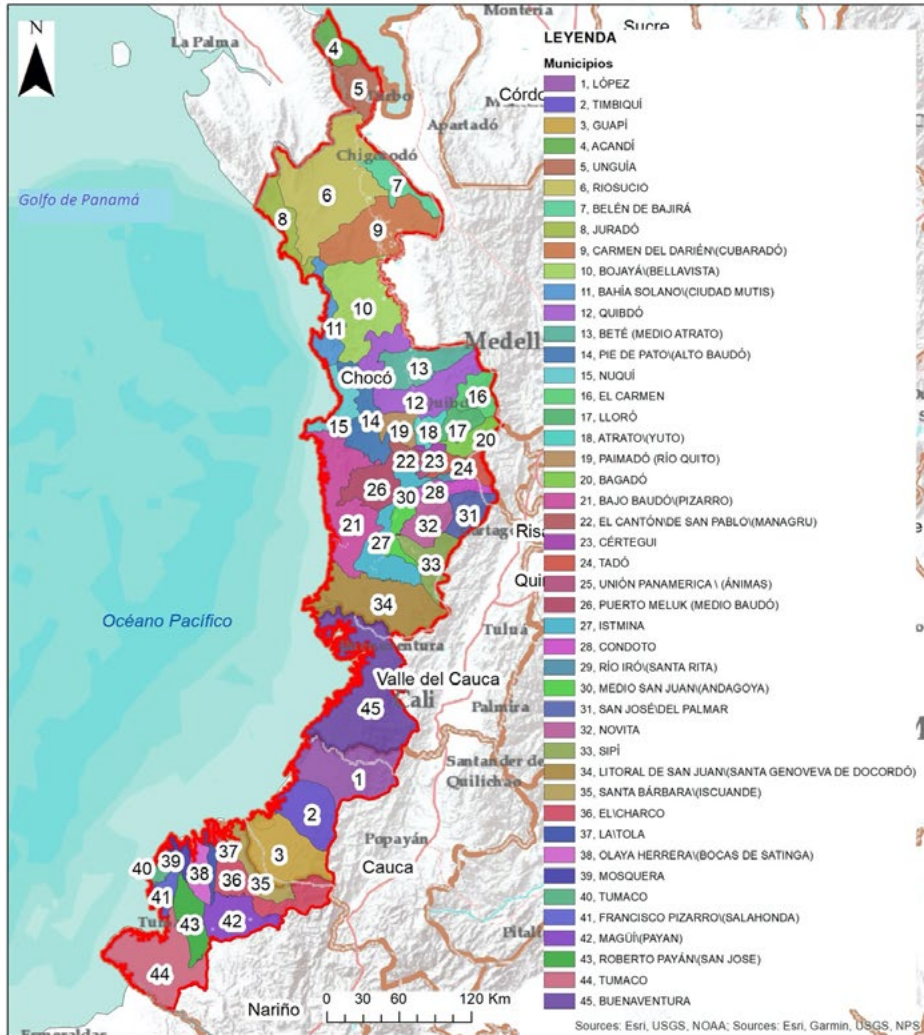
— Limite departamental


Región Pacífico

- Cauca
- Chocó
- Nariño
- Valle del Cauca

Mapa n.º 1.1. Región Pacífico

Fuente: elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo (2016).




Sistematización de experiencias de intervención social en el Municipio de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Una línea para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad después de los acuerdos de La Habana

Convenciones
 Región Pacífico
 Límite departamental

Mapa n.º 1.2. División política

Fuente: elaboración propia en base a datos del Dane.

lo que activó el comercio y el transporte de mercancías hacia el interior del país. Por supuesto, las diferencias entre estos dos puertos son muy amplias, en términos de carga recibida y despachada e infraestructura.


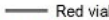



Como lo señalan analistas económicos y políticos, el Pacífico cuenta con una notable posición geoestratégica, que permite, entre otras cosas, conectar al país con mercados internacionales y economías dinámicas como China y Japón, que constituyen un gran eje de la economía mundial. Allí se destaca Buenaventura, que se ha posicionado como el principal puerto multipropósito del país. Según la Sociedad Portuaria, SPRBun, moviliza el 95% de la carga de la costa Pacífica colombiana y el 55% de las exportaciones e importaciones que se tramitan por todas las sociedades portuarias del país, sin contar las de petróleo y carbón. A pesar de ello, este dinamismo económico no se refleja en un desarrollo de su entorno urbano y mucho menos del rural.

El segundo rasgo que influye en las actividades económicas es su hidrografía (Ver Mapa n.º 1.3). Las cuencas de sus ríos y afluentes poseen una gran riqueza minera (oro, plata, platino, magnesio, níquel, estaño y cobre). En la actualidad, están siendo explotados los ríos Atrato-San Juan (Chocó), Guapi, Timbiquí y Patía (Cauca) y Mira (Nariño). También, gracias a su hidrografía, la región cuenta con extensos manglares, maderas y diversidad de especies de fauna y flora. Estas actividades extractivas se vinculan a otras de gran importancia como la pesca artesanal y los cultivos de maíz, guineo, arroz, yuca, ñame, etc.

Por otra parte, sus ríos y afluentes se han aprovechado para el funcionamiento de grandes plantas de energía, como las del río Anchicayá en Buenaventura y Dagua. La región del Pacífico cuenta con 5.064.952 ha en la Zona de Reserva Forestal de la Ley 2.ª de 1959 (véase Mapa n.º 1.4), además tiene dentro del Registro Único de Áreas Protegidas 1.496.477 hectáreas, que suman las 30 áreas agrupadas en las siguientes categorías: distritos nacionales de manejo integrado (190.282 ha), distritos regionales de manejo integrado (438.190 ha), parques nacionales naturales (516.981 ha), parques naturales regionales (40.798 ha), reservas naturales de la sociedad civil (512 ha), reservas forestales protectoras nacionales (245.350 ha), reservas forestales protectoras regionales (38.131 ha) y santuario de fauna (26.233 ha).

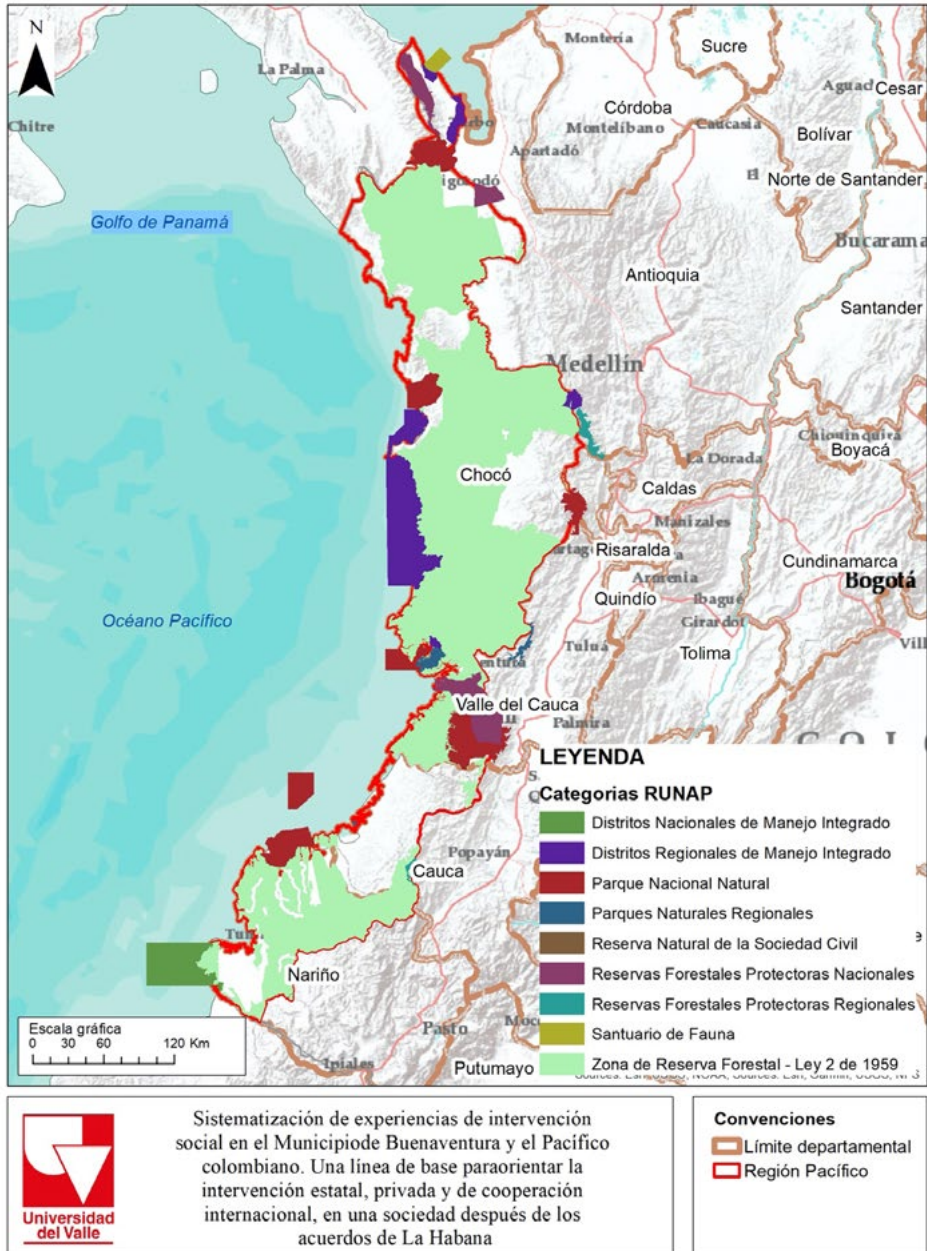
En cuanto a la agricultura y la ganadería es el río Patía (ubicado entre Cauca y Nariño) el que más se aprovecha para este tipo de actividades, y es afectado por la quema de zonas forestales y el pastoreo masivo. Además de ser la fuente principal para las actividades económicas, los ríos son de gran importancia para la conformación de los pueblos que habitan en la región, es decir: “Los cuerpos de agua en la región son fundamentales



 <p>Universidad del Valle</p>	<p>Sistematización de experiencias de intervención social en el Municipio de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Una línea de base para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad después de los acuerdos de 1.ª Habana.</p>	<p>Convenciones</p> <ul style="list-style-type: none">  Red vial  Región Pacífico  Hidrografía  Límite departamental
--	---	---

Mapa n.º 1.3. Hidrografía Región del Pacífico

Fuente: elaboración propia.



Mapa n.º 1.4. Áreas protegidas

Fuente: elaboración propia en base a información del Registro Único de Áreas Protegidas.

en la conformación de las comunidades, su vida y tradiciones” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2016, p. 16). Los habitantes transportan, unen y contribuyen a reforzar la identidad y pertenencia de las comunidades. Es común que, ante la pregunta por el lugar de pertenencia, se enuncie “junto a la cuenca” o “por el afluente de la cuenca” antes que el municipio como división político-administrativa. Al respecto, Castillo (2016) señala que “El negro del Pacífico colombiano se ha apropiado del espacio, ha construido su territorio, ha desarrollado un sentido del lugar, es decir, una profunda identificación emocional con el río” (p. 307).

Por último, el relieve andino, que limita con la región Pacífico, provoca que su sistema de montañas dificulte la comunicación por carretera con el interior del país. Esta situación la expone en detalle el informe de La problemática humanitaria de la región del Pacífico:

Las vías de transporte terrestre muestran a esta región en un aislamiento relativo si se compara con el resto del país. Si bien la región se comunica con Antioquia por las vías Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó, estas rutas no vinculan al centro del país con el océano Pacífico. Por otro lado, está la vía Cali-Buenaventura, que une a Buenaventura —principal puerto sobre el Pacífico— con el departamento del Valle del Cauca y con el centro del país; y Cali-Pasto-Tumaco, que también explota la condición portuaria de esta última (Departamento Nacional de Planeación, 2012, p. 15).

Esta cuestión pone de manifiesto una de las principales características de la conformación y dinámica socioeconómica de la región Pacífico: la división entre la franja litoral, es decir, aquella que está ubicada junto al mar, y la franja andina, las cuales revelan grandes diferencias. Los municipios mejor interconectados, dada su contigüidad con la Troncal de Occidente —Cali, Popayán y Pasto—, se encuentran en la franja andina y coinciden en contar con mejores servicios sociales, financieros y administrativos. Hacia el litoral Pacífico solo existen dos salidas carretables al mar, una desde Cali a Buenaventura y otra desde Pasto a Tumaco. Al mismo tiempo, en los municipios de la región la mayor parte de la comunicación se realiza por vía fluvial o marítima, un escenario en el que Buenaventura ejerce como centro subregional, con funciones de despensa, fuente de bienes, insumos y materiales, y de centro administrativo concentrador de servicios de provisión pública. La comunicación fluvial es fundamental, igualmente en el Chocó, donde la infraestructura vial es precaria, y se encuentra en rehabilitación o sin pavimentar (Departamento Nacional de Planeación, 2012). A continuación, mostramos los principales rasgos de sus habitantes.

LOS POBLADORES DEL PACÍFICO

Para comprender mejor la conformación de la región pacífica, Escobar (2010, pp. 48-49) identifica seis procesos históricos: 1) *el proceso de formación geológica y biológica*, estudiado por geólogos y paleontólogos, 2) el proceso constituido por las *prácticas diarias de grupos negros, indígenas y mestizos*, de dominio de historiadores y antropólogos, 3) *el proceso de acumulación capitalista*, de lo local a lo global, examinado por los economistas, 4) *el proceso de incorporación de la región al Estado*, particularmente mediante el desarrollo y las representaciones y estrategias de conservación; analizado, sobre todo, por politólogos y sociólogos, 5) *las prácticas político-culturales de los movimientos sociales*, que son interpretadas por sociólogos e historiadores, dada la importancia que adquirieron, después de 1990, los movimientos étnicos de negros e indígenas, que los convirtieron en importantes actores en la representación y construcción del Pacífico como territorio-región, 6) *los discursos y las prácticas de la tecnociencia*, particularmente en las áreas de conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad, que han construido los técnicos y políticos vinculados a las dependencias del Estado y las alianzas internacionales.

En otros informes institucionales, como el de la Defensoría del Pueblo de Colombia (2016), *Problemática humanitaria de la región pacífica Colombia*, el Pacífico se define como “aquellos territorios en donde sus pobladores mantienen unidas en su historia, cultura, uso y apropiación del territorio compartido, respecto a la cuenca del Pacífico” (p. 11).

Esa forma de ver el Pacífico trae, de nuevo, al debate los límites de la región y los municipios que la integran. Un indicador que ilustra esta situación es el nivel de desarrollo de cada uno de los departamentos. Por ejemplo, el Valle del Cauca posee un alto desarrollo económico en el país, mientras el Chocó presenta los indicadores socioeconómicos más bajos a nivel nacional (Fedesarrollo y Cerac, 2013). Así, a partir de las diferencias geográficas, sociales, productivas y de conectividad, se identifican dos grandes franjas territoriales en el Pacífico: litoral y andina. Esta última concentra las subregiones con mayores niveles de desarrollo y alberga las principales aglomeraciones urbanas como las capitales de departamento, con excepción de Quibdó. Cabe destacar que la tasa de analfabetismo y la cobertura en educación media en el litoral son 17,8 % y 18,5 %, respectivamente. Por el contrario, en la franja andina, se ubican en 6,7 % y 40,2 %, respectivamente (MEN, 2013 citado en Departamento Nacional de Planeación, 2014). De acuerdo con el Ministerio de Salud y

Protección Social (2013), el 69,66% de la población habita el área urbana y el 31.34% el área rural o resto. Así mismo, según el DNP, los municipios concentran altos niveles de ruralidad —el 92 % de municipios de la franja litoral pertenecen a la categoría rural y rural dispersa, frente a un 50 % en la franja andina—.

En la región habitan tres grupos étnicos: afrodescendientes, que suman el 90% de la población, agrupada en territorios colectivos y residente en centros poblados; mestizos (6%) e indígenas (4%). Allí se concentra la mayor proporción de afrocolombianos del país. Los indígenas pertenecen a los pueblos awá, embera, catío y waunana que viven en resguardos. En el país, los territorios colectivos de comunidades negras titulados —181— tienen una extensión que alcanza cerca de 6,0 millones de hectáreas. Y los resguardos indígenas son 773 y cubren un territorio de alrededor de 33,8 millones de hectáreas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015).

LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN EL PACÍFICO

A pesar de la riqueza natural del Pacífico, no se han podido superar los altos indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, sobre todo, en los municipios del litoral. Castillo (2007) señala que los índices de desarrollo de la zona respecto de los promedios nacionales muestran, históricamente, diferencias notables, producto de la discriminación y la exclusión de la población negra. En la actualidad, los estudios realizados acerca de la pobreza en la región Pacífico, como el boletín “Análisis de situación de Salud según regiones Colombia” del Ministerio de Salud y Protección Social (2013) y el estudio de Galvis *et ál* (2016) “La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores asociados”, muestran que el Chocó presenta la mayor pobreza del país, con un 64.0%, que casi quintuplica al Distrito Capital (Ver Figura n.º 1.1).

En el boletín de Ministerio de Salud y Protección Social (2013) también se analiza el índice de Gini para mostrar las desigualdades por ingresos. El estudio señala que la región presenta pocas reducciones y tuvo una tendencia constante durante 2002-2011 para Nariño y Valle del Cauca. Para Chocó, el departamento que presentó más desigualdad por ingresos entre 2002 y 2008, disminuyó el índice en 2011 y fue alcanzado por Cauca, que presentó un índice de 0,5669 y 0,5536 respectivamente, como lo muestra la Figura n.º 1.2 (p. 27).

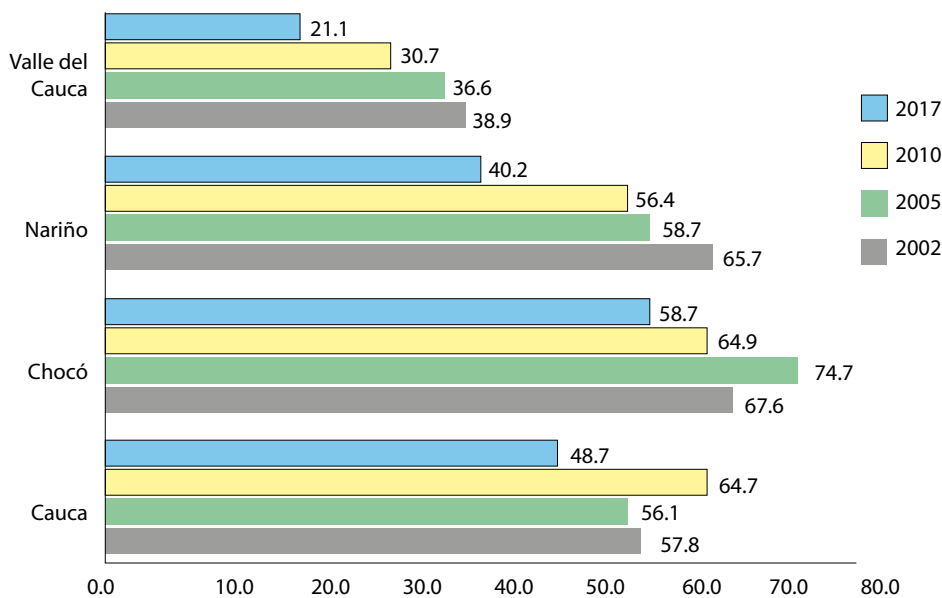


Figura n.º 1.1. Incidencia de la pobreza en Valle, Nariño, Chocó y Cauca (2002, 2005, 2010 y 2017)

Fuente: Dane, datos de pobreza monetaria del año desde el año 2002-2017.

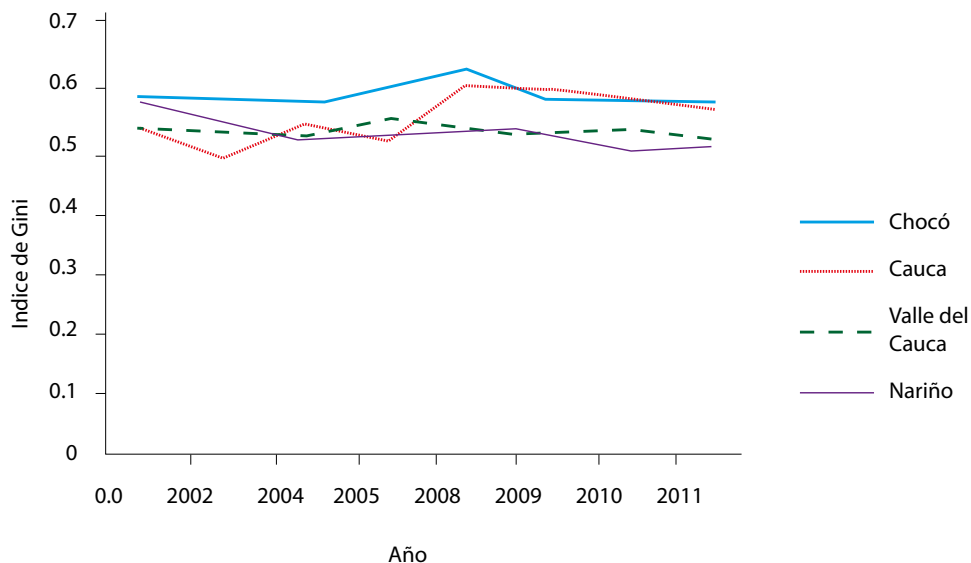


Figura n.º 1.2. Índice de Gini, región Central, Colombia, 2002-2011

Fuente: Dane, datos monetarios por departamentos. Elaborado por Ministerio de Salud y Protección Social, 2013.

En el estudio de Galvis *et ál.* (2016) se expone que el resultado de medir los índices NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), Pobreza Multidimensional² y Línea de Pobreza permite señalar que la región Pacífico se destaca por tener una alta incidencia de la pobreza y condiciones de vida que están por debajo del resto del país, y los casos más críticos están en el Chocó y los municipios costeros del Cauca.

En esta línea analítica, Fedesarrollo (2018) plantea que “la relación de su ingreso per cápita con respecto al total nacional fue de 0,79 en 2016, y la incidencia de la pobreza monetaria alcanzó 34,46% de la población, la segunda más alta entre las regiones del país, después de la región Caribe. La región del Pacífico registró una tasa anual promedio de crecimiento de su PIB de 3,98% entre 2010 y 2016, inferior al total nacional que fue de 4,13%. Este menor dinamismo se reflejó en una participación en el PIB nacional del 13,35% en el período 2010-2016 (p. 27)”. Para este centro de investigación, la Amazonia, el Caribe y el Pacífico evidencian un ingreso per cápita muy inferior al nacional. Ellas han logrado reducir sus índices de pobreza monetaria entre 2005 y 2016; sin embargo, esta supera el promedio nacional con índices de 40,5%, 34,4% y 35,8%, respectivamente, en 2016. El Pacífico supera ampliamente el índice de pobreza extrema nacional, con una tasa de 12,7%, frente al 8,5%.

De acuerdo con los análisis sociológicos de los autores citados, varios procesos han influido en esta situación. El primero, la proclama del desarrollo económico acompañado de las dinámicas del conflicto armado que se extendió hasta esta región, por muchos años alejada de la confrontación. Escobar (2004) señala que, por alcanzar la modernidad, diferentes actores económicos han implementado proyectos espaciales, que son prácticamente conquistas de territorios y pueblos, que no solo han explotado los recursos naturales, sino que han resquebrajado las tradiciones y la cultura de los pueblos negros e indígenas. Ese afán de “desarrollar” el Pacífico hizo que esta vasta área pasara de ser un territorio olvidado y relativamente aislado en los ochenta a convertirse en un objeto de “expansión económica con proyectos de desarrollo a gran escala y nuevos medios de acumulación de capital” (Escobar, 2004, p. 49).

La Defensoría del Pueblo (2016), en su documento *Problemática humanitaria de la región pacífica colombiana*, profundiza en este proceso al plantear

² El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador que refleja el grado de privación de las personas o los hogares en cinco dimensiones, a saber: 1) trabajo, 2) salud, 3) condiciones educativas del hogar, 4) condiciones educativas de la niñez y la juventud, y 5) servicios públicos domiciliarios y calidad de la vivienda.

una periodización de lo que habría ocurrido en el Pacífico. El primer momento sería la oleada modernizadora, cuando se impulsan nuevos proyectos extractivos e infraestructuras. En el primer caso, la extracción se concentra en la explotación masiva de recursos minerales y madereros, en la que participan empresas extranjeras, mineras y agroindustriales, tales como Timbiquí Gold Company, la Telembí Gold Mines, la Potlach Forest Inc. y otras empresas nacionales, que implementaron procesos de tecnificación y modernización. La infraestructura se impulsó para el desarrollo portuario ubicado en Buenaventura y Tumaco acompañado de vías férreas y de carreteras.

La segunda oleada tiene que ver con cómo el Estado entre los años 1950 y 1980 intenta modernizar el Pacífico impulsando proyectos agroindustriales y extractivos; este es el caso específico del proyecto Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica Colombiana (Plaidecop) que consistía en encontrar formas más eficaces de explotar los recursos forestales, pesqueros y fluviomíneros por parte de los propios habitantes de la región. Este plan ha sido criticado porque se impuso la visión occidental de producción, en la cual los expertos y técnicos menospreciaban el conocimiento local, la cultura y las tradiciones de la población afrodescendiente e indígena (Baquero, 2011, citado en la Defensoría del Pueblo 2016, p. 27). Según Castillo (2016), el resultado de este plan, o en general de esa visión política por parte del Estado, tuvo como consecuencia explotar las tierras por las representaciones dominantes del espacio, dejando a un lado a la población negra, sometiéndola a un “proyecto de nación mestiza” (p. 12).

El tercer momento empieza en 1980 y se extiende hasta la actualidad. Durante estos años, la población ha sufrido la profundización del conflicto armado y la concomitante crisis humanitaria. El informe de la Defensoría plantea como paradoja que el Estado colombiano reconozca en la Constitución Política de 1991 los derechos de las comunidades negras sobre territorios y sus formas organizativas, y paralelo a ello se produzcan peligrosos vínculos entre funcionarios locales y miembros de la Fuerza Pública con sectores de la ilegalidad, con grupos de narcotraficantes y paramilitares. Esos actores están relacionados con proyectos neoextractivistas y con la revitalización de megaproyectos asociados a la vocación del puerto, que van en contravía de los intereses de las comunidades y quebrantan los derechos adquiridos. Ante esta violencia sistemática, los pobladores hacen resistencia, pero en algunos casos ellos y sus líderes son víctimas de más violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. De acuerdo con la clasificación de ruralidad propuesta por el DNP y la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS), el litoral Pacífico muestra también un

importante rezago respecto a la franja andina al presentar indicadores sociales inferiores a los nacionales, problemas de déficit y calidad en la vivienda y condiciones sanitarias críticas.

EL PUERTO DE BUENAVENTURA. ENTRE EL DESPOJO Y LA MODERNIZACIÓN

Buenaventura presenta similares condiciones sociales a las que han sido señaladas para la región. Los indicadores socioeconómicos son bastante dramáticos; por ello, entender la intervención social en el distrito pasa por describir las condiciones de vida de sus pobladores. Este es uno de los municipios más pobres del Valle del Cauca y de Colombia. De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el 63.5 % de los hogares del casco urbano vive en la pobreza y en la zona rural este porcentaje se eleva al 91,6 % (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 58). La Figura n.º 1.3 presenta las diferentes categorías del IPM para Buenaventura.



Figura n.º 1.3. Índice de Pobreza Multidimensional de Buenaventura (zona urbana)

Fuente: elaboración propia basada en el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, p. 59).

Con relación a los ingresos familiares, el 24.4% de las familias obtiene menos de un SMLV al mes. Esto se explica por las altas tasas de desempleo (63.7 %) y por el escaso acceso a otros ingresos (Ministerio de Trabajo, 2011). Sumado a estas condiciones de vida tan precarias, se debe contemplar el impacto del conflicto armado en la población desde finales del siglo XX y comienzos del nuevo milenio. Buenaventura es un punto central que une al norte y sur del litoral y es la fase final de un corredor que conecta rutas de producción de coca y otras sustancias psicoactivas desde los departamentos de Cauca y Tolima, que salen posteriormente por el Pacífico para su comercialización hacia Centroamérica y Estados Unidos como destino (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MODOS DE INTERVENCIÓN EN BUENAVENTURA

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incursionó en Buenaventura en el año 2000, pero pronto fue desplazada por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la disputa por el control estratégico de los barrios de bajamar. Después de la desmovilización del Bloque Calima, en 2004, las FARC ganaron protagonismo, pero fueron de nuevo desalojadas por las Águilas Negras, La Empresa y los Urabeños. En la actualidad, se habla de la llegada de La Gente del Orden y del Clan del Golfo, cuya influencia se extiende a otros municipios del Pacífico. Todos estos actores recurren a diferentes repertorios de violencia y han generado una ola de terror en la población, que la obliga a desplazarse. Algunos analistas asocian la expansión y toma de poder de estas bandas criminales con la llegada de los grandes megaproyectos a Buenaventura, los cuales habrían utilizado la táctica del “vaciamiento del territorio” para despejar grandes zonas y llevar a cabo las construcciones que requieren los inversionistas.

Los núcleos que así se crean, lejos de las autoridades, son percibidos constantemente por el centro como lugares “sin Dios y sin ley”. Y, de hecho, ante la ausencia de algún tipo de mediación institucional, el tratamiento de los litigios solo se puede llevar a cabo allí de una manera expedita (Pécaut, 2003, p. 21).

Las intervenciones de estos actores ilegales, en especial de las AUC que lograron ganarles la partida a las guerrillas, tuvieron dos momentos: a) el periodo paramilitar (2000 a 2004) y el periodo postnegociación (2005 a 2013).

Las modalidades de violencia en cada periodo son analizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) con el fin de establecer el entrecruzamiento de repertorios de estos actores ilegales. En la Tabla n.º 1.1 se resumen los objetivos perseguidos según el repertorio de la violencia perpetrado. El conjunto de estas modalidades de violencia algunas veces se entrecruza y se potencia con otras, de manera que es posible hablar de una violencia eficiente y multipropósito.

Tabla n.º 1.1. Objetivos de los repertorios de violencia

Repertorios	Económicos	Militares	Políticos
Invisibilización del conflicto	Aumentar el grado de confianza y percepción de seguridad para inversionistas, turistas y comunidades locales.	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar atraer la atención e intervención del Estado, de los medios de comunicación y la opinión pública hacia el municipio. • Mantener el orden social de terror impuesto por la violencia. • Reducir el incremento del número oficial de víctimas. • Impunidad (desaparición de la evidencia). 	Promover la idea de la reducción de la violencia y de efectividad en la lucha contra el crimen por parte de las autoridades competentes.
Generación de terror y desterritorialización mental	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer límites y fronteras geográficas dentro de las cuales se pueden desarrollar ciertos negocios ilegales. • Controlar aquellos territorios que son estratégicos para el desarrollo de negocios ilegales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Someter a la población para que obedezca y no se rebele. • Castigos ejemplarizantes a las mujeres. • Imposición de un nuevo orden social. • Establecimiento de jerarquías de poder. • Paralizar las personas y comunidades (debilitar bases sociales y desestructurar la movilización). 	Apoyo al proyecto político promovido por el GAI (grupo armado ilegal) específico.
Desterritorialización material	Promover el desalojo de los territorios que son estratégicos para la realización de megaproyectos portuarios y turísticos.		Impulsar los proyectos del “desarrollo” que cambiarán la cara de Buenaventura e impulsarán la riqueza local y nacional.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, p. 325), *Entrecruzamiento de repertorios*.

La intervención de los actores armados en la dinámica del conflicto armado y su consecuente reconfiguración de órdenes locales mediante la violencia que desplegaron en el Pacífico, en general, y en Buenaventura, en particular, han hecho que la población negra e indígena se organice y reclame al Estado y a estos actores el respeto de sus vidas y la garantía de los derechos humanos, incluido el derecho a permanecer en su territorio. De acuerdo con Castillo (2016), en Buenaventura existen más de 280 organizaciones étnicas, conformadas por población afrodescendiente. Entre estas se destacan las de víctimas, dado que la victimización de los pobladores de este municipio ha sido una constante desde hace varias décadas. Pero las organizaciones que están más cohesionadas son los consejos comunitarios.

Al tramitar su relación con el Estado y con otros actores en el territorio, las comunidades se estructuran alrededor de campos normativos particulares que incluyen no solo el recurso a la ley, a las disposiciones administrativas o a la administración de justicia, sino también los espacios normativos alternos. Es decir, las relaciones entre estos órdenes locales y sus articulaciones con espacios como la ancestralidad y las relaciones étnicas. En el ejercicio que proponemos aquí, nuestro interés está en conocer de manera más precisa su vocación de autonomía y autorregulación en escenarios donde esté en juego la justicia material y el modo en que utilizan la movilización sociolegal para acceder a la justicia.

En este sentido, más allá de los espacios de regulación institucional a través de disposiciones normativas con aplicación vertical como leyes, decretos, regulaciones administrativas o políticas, los órdenes normativos locales se constituyen en legalidades alternativas (Santos, 1991) en cuya concepción entran en juego tradiciones, formas de organización, proyectos, necesidades y tensiones históricas que atraviesan a las comunidades.

Por lo anterior, más que destacar a los actores armados como un agente que interviene para resolver los problemas de las comunidades, sectores y poblaciones, lo que identificamos en este proyecto es que sus acciones armadas, la confrontación con los grupos paramilitares, las bandas armadas y la Fuerza Pública han dificultado la intervención estatal y las posibilidades de seguimiento y veeduría de los ciudadanos a esa intervención. Al tiempo, detectamos que las actuaciones de estos grupos han producido nuevos problemas que requieren atención urgente e imponen otras agendas al Estado y dan cabida, sobre todo, a terceros actores de la intervención, como la cooperación internacional que se encarga de la atención humanitaria.

En lo referente al contexto en que se han llevado a cabo estas intervenciones, es evidente que se desarrollan en un escenario de violencia asociada al conflicto armado, pero también de otros tipos (la étnica, la que produce la delincuencia común, la que provoca la disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras). Merece especial atención el incremento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que se han constituido en objeto de intervención de múltiples agentes estatales, de la cooperación internacional, del tercer sector y de las iniciativas comunitarias. Por ejemplo, las que desarrollan Anmucic, la Red de Mariposas de Alas Nuevas y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Pero el más notorio de los efectos del conflicto es el desplazamiento forzado que tuvo sus picos más altos en la década pasada y que sigue siendo un flagelo difícil de erradicar. Como lo describe Espinoza (2011):

[...] Si se tiene en cuenta que, según datos de Acción Social, se han desplazado aproximadamente 70.000 personas en el periodo 1999-2009, y que la población del municipio de Buenaventura era de 324.207 habitantes, es posible calcular que alrededor del 21% de la población ha estado, en algún momento, en condición de desplazada [...] (p. 88).

Las cifras proporcionadas por el Registro Único de Víctimas, RUV, describen la situación del desplazamiento más agudo en el período 2011-2014 con 20.000 personas por año, y un total de 76.758 personas que salieron de su territorio; el número más alto de desplazados en la historia del conflicto en Buenaventura.

El aumento y la disminución del número de desplazados están relacionados con coyunturas del conflicto armado. Por ejemplo, en el 2005 se presenta un descenso significativo como consecuencia del desarme paramilitar ocurrido a raíz de la Ley de Justicia y Paz. El incremento posterior obedece al reacomodo y emergencia de nuevos actores armados que ocupan el lugar de las viejas estructuras paramilitares (2006-2008). Con todo, el fenómeno del desplazamiento es una constante en los últimos veinte años y constituye una profunda herida con consecuencias poco estimadas en la vida de las comunidades (ver Figura n.º 1.4).

Tal como argumenta González (2014), dada la presencia diferenciada que ha hecho el Estado en el Pacífico, todas estas modalidades se exacerbaban con la violencia estructural que viven los pobladores. A esa situación se sumaron los graves casos de corrupción que vincularon a varios alcaldes y funcionarios del Gobierno municipal, departamental y nacional, concejales y representantes a la Cámara.



Figura n.º 1.4. Número de desplazados en Buenaventura (2002-2018)

Fuente: Red Nacional de Información (RNI) - Unidad para las Víctimas.

También los análisis de Fedesarrollo y Cerac (2013) muestran una situación de zozobra permanente por la violencia y la creciente pobreza que atraviesa Buenaventura que, a juicio de sus investigadores, no permite consolidar políticas de desarrollo integral para este municipio. A esto se añade la persistencia de intereses particulares de diferentes actores sobre el territorio y los recursos de una ciudad-puerto con un ecosistema favorable. Los autores del estudio plantean varias barreras que impiden el desarrollo en el municipio:

- **Barreras productivas:** la dualidad puerto-ciudad y puerto-territorio. La infraestructura urbana se ha desarrollado en función del puerto (vías de acceso, servicios públicos y servicios financieros). Desde la liquidación de Puertos de Colombia, la tercerización y la privatización del puerto han generado otras dinámicas de relación con la comunidad porque los empleos a término indefinido disminuyeron notablemente y crecieron los contratos a tiempo parcial y a término fijo.
- **Barreras ambientales.** El desarrollo de la actividad portuaria tiene un alto impacto ambiental sobre las cuencas, los esteros y los manglares.
- **Barreras poblacionales:** en los últimos 50 años la población de Buenaventura ha crecido significativamente. El casco urbano recibe gente que huye de la violencia que produce el conflicto armado en la zona rural. Este poblamiento ha desencadenado un proceso de ocupación de áreas no acondicionadas y un aumento de la densidad demográfica, a la vez que se abandonan extensas zonas rurales antes pobladas. Otro fenómeno complejo es el desplazamiento urbano interno y el que se produce hacia Cali y Bogotá, principalmente.

- **Barreras educativas:** el municipio no ha logrado mejorar en materia de educación; los índices de analfabetismo siguen siendo altos; el déficit de cobertura pública y la baja calidad a lo largo del ciclo educativo no posibilitan que los jóvenes adquieran mejores competencias académicas y puedan ingresar y permanecer en la educación media o en la Universidad en igualdad de condiciones con otros jóvenes de la región.
- **Barreras de infraestructura:** una de las problemáticas más graves se relaciona con el acceso al agua y, en general, con los servicios públicos. El acueducto es deficiente y apenas logra una cobertura parcial del municipio, además de la irregular frecuencia del servicio, con preocupantes repercusiones en la salud de la población.
- **Barreras institucionales:** la debilidad institucional es una característica de la administración municipal, sobre todo en la planeación y programación. Básicamente, el problema radica en que no hay una articulación y evaluación de los proyectos. El caso Conpes 3410³ es un ejemplo de ello. No existe por parte de los funcionarios una atención desde los niveles centrales hacia el nivel municipal, lo cual dificulta la asistencia técnica y la implantación de sistemas de información.

A esta explicación se puede añadir que el conflicto permanece por la coexistencia de la propuesta macroeconómica del Estado central y la economía global ilícita del narcotráfico. Es decir, que la contradicción entre el proceso de modernización portuaria y la disputa de los territorios para el cultivo y circulación de la coca ha puesto en evidencia la debilidad estatal y la falta de voluntad política para resolver los problemas sociales que aquejan al puerto. Es en este contexto en el que aparecen actores como la cooperación internacional, las organizaciones de base y las ONG locales y externas, que intervienen en las comunidades, sustituyendo parcialmente el papel del Estado.

La apuesta nacional de convertir a Buenaventura en el puerto más moderno de América del Sur ha implicado una sobreestimación de los esfuerzos técnicos y económicos para lograr la modernización de la infraestructura

³ El Conpes 3410, *Política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura*, aprobado en febrero de 2006, y concertado con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del municipio de Buenaventura, buscaba aprovechar y potenciar la ventaja geoestratégica de Buenaventura, su experiencia como puerto en el Pacífico colombiano y lograr un desarrollo equitativo y sustentable.

portuaria. Dicho esfuerzo estatal no ha estado acompañado de políticas sociales que contribuyan a zanjar las brechas de desigualdad social. Por el contrario, la pugna territorial de los actores armados ilegales y estatales ha convertido a la población civil en la principal víctima del conflicto.

Esta grave situación de los pobladores de Buenaventura es frecuentemente tratada en los medios por líderes de opinión, académicos, funcionarios, entre otros, quienes la oponen a la riqueza que genera la actividad portuaria. Inge Valencia (2016), por ejemplo, plantea que hay dos razones principales que explican las condiciones de pobreza y violencia que han vivido sus habitantes. En primer lugar, la ruptura de los circuitos económicos locales. Las élites nacionales privilegiaron el proyecto portuario y las actividades comerciales antes que la atención a las actividades productivas tradicionales, como la pesca y la agricultura. La segunda está relacionada con la gestión del puerto y la escasa reinversión de las utilidades en la ciudad, lo que ha generado amplias brechas sociales. Para Germán Manga (2017), “El declive en materia de desarrollo no es solo responsabilidad del Estado, otros causantes del deterioro público de la ciudad son los sindicalistas del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia (Foncolpuertos), las Farc, los paramilitares, los políticos corruptos y hasta los líderes de comunidades negras que se lucran de la consulta previa”.

A lo anterior se suma que, como ocurre en otras zonas de frontera, el Estado privilegia unos sectores sobre otros (González, 2014) y la persistencia del racismo en Colombia. El cual es muy evidente en el tratamiento que se ha dado históricamente a la población del Pacífico (Escobar, 2004; Castillo, 2007; Castillo, 2016; Restrepo & Uribe, 2012). En los últimos años, la presencia permanente del Ejército y la Armada ha sido fundamental para garantizar el funcionamiento de la Sociedad Portuaria y las actividades relacionadas con la operación del puerto marítimo. Por el contrario, son precarias las inversiones en salud y educación, en infraestructura social, cubrimiento del déficit habitacional, y en los servicios de acueducto y alcantarillado, etc. Asimismo, la vigilancia que se hace sobre estos sectores para garantizar la calidad de los servicios estatales no asegura las mejoras.

Lo preocupante del caso, de acuerdo con Ariel Ávila (2016), otro líder de la opinión pública es que, una vez firmados los acuerdos de paz, las organizaciones e instituciones empezaron a enfilarse sus estrategias para ganar los millonarios contratos que entregarán el Estado y la cooperación internacional. Para él, esas inversiones enfrentarán dos riesgos: el primero, porque “hay una tentación muy grande de que este dinero se quede en las zonas más pobladas del país, donde hay votos y donde los senadores y representantes

tienen su maquinaria política”, y el segundo riesgo es la pérdida de dinero por la vía de la corrupción.

Para este analista, el conflicto en Colombia se ha desarrollado, principalmente, en la periferia, por ende, los recursos para el postacuerdo deben invertirse en las zonas rurales. Por ejemplo, la implementación de los acuerdos ya ha generado políticas a nivel nacional y otras a nivel territorial. Entre las primeras están las reformas políticas para vincular a los miembros de las Farc al Congreso, así como las nuevas formas de organización estatal y una apertura democrática para incluir a las minorías y poner en el centro a las víctimas, además de nuevas prioridades para ellas en la política pública. Las segundas se traducen en inversiones en las regiones, con el objetivo de superar lo que se ha denominado causas estructurales del conflicto, y que deben estar alineadas a buenas prácticas organizacionales (Ávila, 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ávila, A. (2016). Los recursos de la paz. *Revista Las 2 Orillas*, s/p.
- Castillo, L. (2007). *Etnicidad y nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Cali: Universidad del Valle.
- Castillo, L. (2016). *Organizaciones sociales afrocolombianas. Una aproximación sociológica*. Cali: Universidad del Valle.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). *Buenaventura: un puerto sin comunidad*. Bogotá: CNMH.
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. (2013). *La crisis humanitaria en Colombia persiste: el Pacífico en disputa*. Bogotá: CODHES.
- Defensoría del Pueblo. (2016). *Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). (2015). *Censo Nacional Agropecuario 2014. Actividad agropecuaria y población en territorios de grupos étnicos - Boletín 5*. Bogotá: Dane. https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-5-Etnicos/5-Presentacion.pdf?fbclid=IwAR0eu2DyYwBmAtFSKkT9dS-TDvtP_NwSFWwC-k25vxdwC-KdmmRO0bDjjCFk
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2012). *Perfiles regionales: datos y elementos básicos para el desarrollo regional*. Bogotá: DNP.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). *Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental*. Bogotá:

- DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2004). *Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano. Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*.
- Espinosa, A. (2011). Activismo global: nuevas rutas de acción colectiva del movimiento negro en Colombia. *Universitas Humanística*, 72(72), 211-245. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2157/1400>
- Fedesarrollo. (2018). *Proyecciones de actividad económica regional 2017-2021*. Bogotá: Fedesarrollo.
- Fedesarrollo y Cerac. (2013). *Hacia un desarrollo integral de la ciudad de Buenaventura y su área de influencia*. Bogotá: Fedesarrollo - Cerac.
- Galvis, L., Moyano, L. y Alba, C. (2016). *La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores asociados*. Cartagena: Banco de la República.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Cinep/PPP, Odecofi.
- Leal, C. (2017). Manglares y economía extractiva. En Instituto Colombiano de Antropología e Historia, *Geografía Humana de Colombia. Los afrocolombianos*. Tomo 6 (págs. 397-429). Bogotá: Icanh.
- Manga, G. (9 de junio de 2017). Los buenos, los malos y los feos de Buenaventura. *El Tiempo*, pág. s/p. <http://blogs.eltiempo.com/motor-de-busqueda/2017/06/07/los-buenos-los-malos-y-los-feos-de-buenaventura/>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). *Análisis de situación de salud según regiones Colombia*. Bogotá: Minsalud.
- Ministerio del Trabajo. (2011). *Buenaventura, ciudad puerto de clase mundial. Plan local de empleo 2011-2015*. Bogotá: Mintrabajo. <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Buenaventura+2012.pdf/7c1a4b61-4952-aeaf-f014-9f03bbd3c754?download=true>
- Oslender, U. (2004). Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas. En E. Restrepo, y A. Rojas (Edits.), *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia* (págs. 35-52). Popayán: Universidad del Cauca.
- Pécaut, D. (2003). *Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión*. Medellín: Hombre Nuevo Editores.
- Restrepo, E., y Rojas, A. (Edits.). (2004). *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. Popayán: Universidad del Cauca.

- Restrepo, E., y Uribe, M. (Edits.). (2012). *Antropologías transeúntes*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Santos, B. (1991). *Estado, derecho y luchas sociales*. Bogotá: Ilsa.
- Valencia, I. (13 de octubre de 2016). Desarrollo y despojo en Buenaventura. *La Silla Vacía*, pág. s/p. <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/desarrollo-y-despojo-en-buenaventura-58358>
- Viloria de la Hoz, J. (2008). *Economías del Pacífico colombiano*. (J. Viloria de la Hoz, ed.) Cartagena: Banco de la República.

LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN BUENAVENTURA. UNA LÍNEA DE BASE

*María Eugenia Ibarra Melo*¹

Este capítulo describe las principales formas de intervención “para el desarrollo” que han realizado diferentes actores en Buenaventura (Estado, privados, tercer sector y otros, incluida la Iglesia, los grupos armados y la propia comunidad). En ese sentido, fue importante indagar por la «teoría del cambio» que está detrás de las intervenciones, y responder al interrogante planteado por Rogers (2014): ¿Cómo se entiende que las actividades propuestas por una institución o un agente produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos previstos en las intervenciones?

Por lo anterior, el objetivo principal es *comprender* los tipos predominantes de intervención, de acuerdo con los actores que han intervenido en Buenaventura durante el nuevo milenio. Se da cuenta de la capacidad instalada que han dejado esas inversiones, de cómo han participado las organizaciones sociales en estos planes, programas y proyectos financiados por el sector público, los agentes privados y el tercer sector; del modo en que se involucran las organizaciones sociales en la ejecución, seguimiento y evaluación de aquellos. También se esbozan algunas interpretaciones sobre el funcionamiento de gobernanza local para la gestión de lo público. Se proporcionan las principales características de los agentes que intervienen; se describen algunas dinámicas de intervención que han impuesto

¹ Profesora, investigadora del Grupo Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso, Universidad del Valle.

los financiadores-ejecutores a la población para desarrollar los proyectos y se analizan los principales aprendizajes que han hecho tanto las instituciones como las organizaciones sobre la intervención recibida. Se espera que este ejercicio contribuya a seguir invirtiendo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del puerto, en la defensa de los recursos naturales y en la conservación del territorio ancestral de culturas autóctonas, como la afrocolombiana y las indígenas.

A continuación, se presentan las principales intervenciones realizadas por diferentes actores en la región Pacífico y Buenaventura, desde 2000 hasta 2017, reportadas en noticias de prensa de *El Tiempo*, *El País*, *Semana*, *La Silla Vacía*; o en páginas web de diferentes organizaciones sociales, ONG, instituciones del nivel local, regional y nacional, agencias de cooperación y organismos internacionales, seleccionadas en una exhaustiva revisión documental. En el Anexo 1 mostramos una tabla con 119 registros que identifican:

- a) Agentes que intervienen (instituciones estatales, tercer sector —organismos internacionales, agencias, ONG locales y extranjeras—, privados, Iglesia católica e iniciativas comunitarias).
- b) Sector de inversión/intervención.
- c) Población o problema que se interviene.
- d) Objetivos.
- e) Ámbito que cubre la intervención: local, departamental y regional.
- f) Monto invertido.
- g) Observaciones (notas sobre contexto, etc.).

También los registros identifican réplicas de proyectos ejecutados en otras ciudades colombianas, de América Latina y Europa. Sin embargo, la constante son los proyectos que responden a necesidades específicas de la población de Buenaventura, lo que muestra sectorización o focalización de la política pública, así como de los proyectos que se desarrollan con recursos privados. Aunque definimos el año 2000 como punto de partida del análisis, en algunos casos se hace referencia a un periodo más amplio dada la particularidad de las intervenciones realizadas en el puerto, en la zona urbana o en el amplio territorio que ocupa el municipio de Buenaventura. A la dimensión temporal se añadió la identificación de varios acontecimientos políticos que marcaron la forma y la dinámica de la intervención durante estos años. También es importante la información recabada en las entrevistas a integrantes de organizaciones comunitarias, funcionarios de la Alcaldía y profesionales vinculados a ONG, agencias y organismos internacionales, así como sus aportes en tres talleres

realizados² para contrastar datos, capacitar a los participantes en sistematización de experiencias y analizar la situación del municipio, después del Paro de 2017.

ACTORES Y AGENTES QUE INTERVIENEN EN BUENAVENTURA

La consulta de las fuentes descritas permite constatar que se mantienen los actores históricos de la intervención: el Estado, los organismos internacionales y la Iglesia católica, pero ahora cooperan con nuevos actores como las agencias de cooperación, las universidades, ONG locales y extranjeras, las empresas y las fundaciones del sector privado, que acompañan las iniciativas comunitarias, tal como se muestra en la Figura 1.

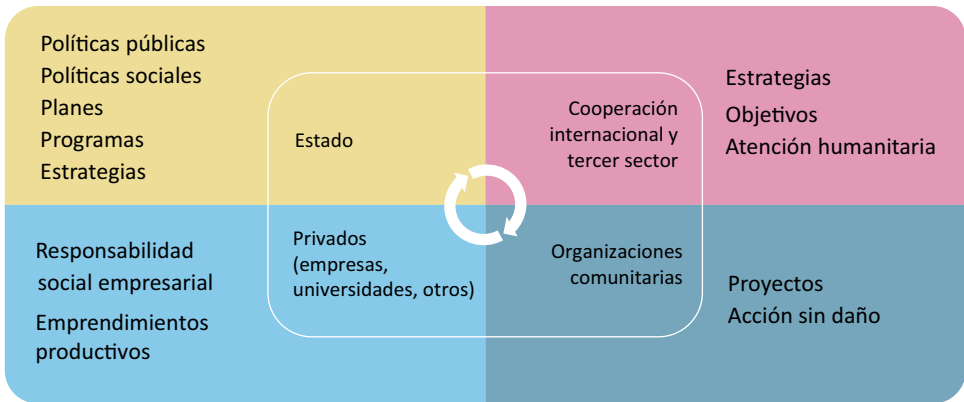


Figura n.º 2.1. Actores y modos de intervención predominantes en Buenaventura

Fuente: elaboración propia.

El período señalado coincide con la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo para América Latina y el Caribe de la OCDE, como efecto de la calificación de estos países como economías de renta media. Esta evaluación se fija, sobre todo, en el ingreso per cápita e impide ver otras brechas estructurales que eran aliviadas con cooperación internacional en la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012). Aun así, para Colombia la tendencia muestra una periodización diferente: unos picos

² Estos talleres se realizaron en la Sede Pacífico de la Universidad del Valle, en Buenaventura. El primer taller fue el 1.º de abril de 2018; el segundo entre el 15 y 16 de junio de 2018 y el tercero el 30 de noviembre de 2018.

de cooperación norteamericana entre 1989 y 1993 y el repliegue de otras agencias internacionales, precisamente, por el indicador de la renta media para el país y por los cambios geopolíticos después de la caída del Muro de Berlín. Luego, otro pico entre 1998 y 2007 con una agenda sustentada en la seguridad y la lucha contra las drogas (Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, 2010). Desde finales de la década anterior y en la presente se lograron alinear la reconciliación y la gobernabilidad en los ejes estratégicos de la agenda de la cooperación para Colombia dispuestos en la hoja de ruta 2015-2018: Construcción de paz, Desarrollo rural sostenible y Conservación y sostenibilidad ambiental (Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, 2010; Cancillería de la República de Colombia, 2015). Con la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, varios países y bloques, como la Unión Europea, prometieron ayudas a Colombia para la implementación de varios puntos del acuerdo.

En ese contexto, como bien lo registra la historia de la cooperación en América Latina, las intervenciones constantes desde los años 1950 no han dejado necesariamente un balance positivo en la reducción de brechas sociales sostenidas en la desigualdad e inequidad socioeconómica. En espacios como Buenaventura, por ejemplo, la dispersión y la ineficiencia de los recursos por vía de la cooperación internacional fragmentada en el municipio y sin efectos visibles en el cambio social llevaron en 2012-2013 a la creación de un escenario centralizador como la Oficina y Comité de Cooperación Internacional de Buenaventura, cuyas motivaciones son claras, aunque los impactos están por evaluar.

Paralelo a lo anterior, es notable el protagonismo que han ganado los consejos comunitarios de comunidades negras, los cabildos indígenas, las redes de organizaciones ligadas a plataformas defensoras derechos humanos, los comités y mesas —como la del paro cívico de 2017—, entre otros. Los grupos étnicos siguen siendo muy importantes, pero cada vez más las mujeres y los jóvenes se vinculan a nuevas oportunidades que ofrecen quienes están ejecutando proyectos y programas, que los incluyen como sujetos principales. Por supuesto, también estos actores promueven iniciativas para reivindicar sus identidades, ya sean la étnica, la de género, la generacional y la territorial, entre otras. Como se mostrará más adelante, varias de estas formas de organización social son maleables, en tanto se pueden ensamblar, dismantelar, rearmar en plazos mínimos o aun sobre la marcha para vincularse a los proyectos que requieran su participación.

De acuerdo con los 119 registros encontrados sobre planes, programas y proyectos realizados en Buenaventura, entre 2000 y 2017, es sobresaliente la participación del Estado en las diferentes intervenciones llevadas a cabo.

La agrupación por actor, en la Figura 2, muestra la participación del *Estado* (incluye entidades de carácter público del nivel central, departamental y local, entre ellas: ministerios, institutos, organismos descentralizados, direcciones de programas, entidades, agencias, unidades, departamentos administrativos, empresas públicas, centros y entes de control). El *tercer sector* incluye organismos internacionales, fundaciones sin ánimo de lucro, agencias de cooperación, embajadas, ONG internacionales y nacionales, que trabajan en distintos sectores, e incluye las organizaciones laicas y religiosas. El *sector privado* involucra empresas y las fundaciones que han creado, sobre todo, para atender la responsabilidad social empresarial. Como se puede observar en la Figura 2, el Estado es responsable del 44.3% de las intervenciones, seguido del tercer sector con 13% y la alianza Estado-Tercer sector con el 11.3%. La participación de los agentes privados también es importante, sobre todo si se suman las alianzas que realizan con el Estado.

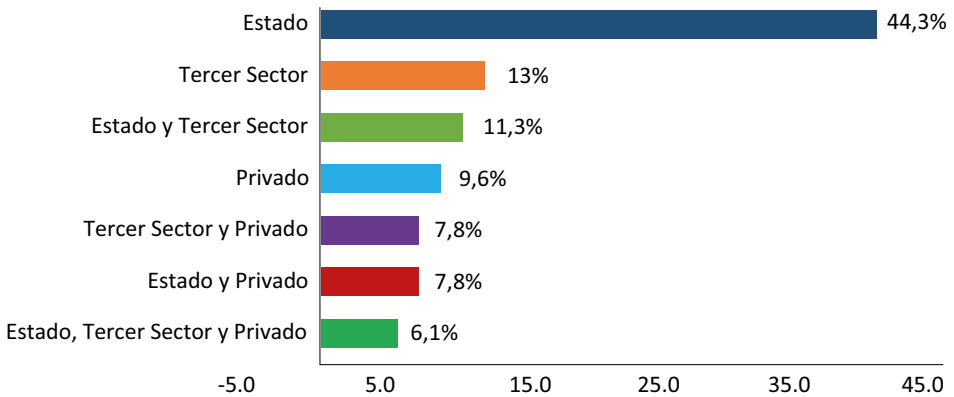


Figura n.º 2.2. Participación por actor (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia con base en información de prensa. Proyectos ejecutados en Buenaventura (2000-2017).

Por lo anterior, con base en los datos recopilados para este proyecto, primero se expone la participación de los actores históricos; después se muestra la presencia de actores ilegales (guerrillas, paramilitares, bandas criminales y carteles del narcotráfico) y la forma como crean nuevos problemas y promueven, indirectamente, nuevos actores o sujetos de la intervención.

El Estado

La intervención del Estado en Buenaventura no se reduce a las acciones que desarrolla la Alcaldía para prestar servicios públicos y garantizar los

derechos fundamentales. A los recursos del distrito especial de Buenaventura se suman los que provienen de la actividad portuaria y de diferentes planes y programas de orden nacional y regional que involucran al puerto colombiano más importante sobre el océano Pacífico. En varios de ellos, como mostramos en la Tabla n.º 2.1, el Estado se ha propuesto transformar la desigualdad social y aumentar la calidad de la vida de sus habitantes sin que estas pretensiones se concreten en cambios favorables para la superación de la pobreza, la conservación de la diversidad o el reconocimiento de las particularidades culturales de la población negra e indígena.

Esa línea de intervención se amplía en la medida que el Pacífico cobra importancia para la economía del país. A continuación, se muestra un recuento de la participación del Estado en la transformación los problemas del municipio en los últimos años. Esto se nota, sobre todo, en el desarrollo de infraestructuras (construcción de viviendas, instalaciones turísticas, energía, acueducto y alcantarillado, escuelas y colegios, vías, entre otros). Su ejecución recae en diferentes niveles administrativos e instituciones del orden nacional. Aparecen con menor presencia la Gobernación del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y las empresas de servicios públicos del nivel departamental y regional. Los proyectos adelantados a nivel local corresponden a los que desarrolla la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Para materializar el cambio, es claro que algunas propuestas requieren de esfuerzos y recursos de diferentes niveles del gobierno (local, departamental, nacional), del sector privado y de la financiación de la cooperación internacional o del acceso a los créditos de la banca multilateral.

En ese sentido, en Buenaventura, como en otros municipios periféricos del país, existe una presencia diferenciada del Estado (González, 2014). Esta es evidente en el desarrollo de la actividad portuaria y en la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía en acciones de seguridad y defensa del territorio. Entre Ejército y Armada se coordinan operativos por tierra y mar para contrarrestar el tráfico de drogas y combatir la presencia guerrillera, paramilitar y de otros grupos al margen de la ley. Estas acciones se intensificaron a partir de 2014, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención integral para frenar la ola de violencia, las altas tasas de homicidio y los delitos contra las personas. Sobre todo, después de las denuncias de los pobladores por la aparición de “casas de pique” en los barrios de bajamar. También es importante el control que ejercen las autoridades marítimas en el transporte de pasajeros (turistas y nativos). A pesar de lo anterior, se mantienen los altos indicadores de pobreza y escaso bienestar de la población.

Tabla n.º 2.1. Planes, políticas y proyectos para el Pacífico 1958-2018

Años	Planes, políticas y proyectos	Objetivos, contexto y consecuencias
1958-1968	Plan Decenal del Chocó	Diagnóstico regional del Pacífico. Planteó estrategias para el bienestar de los chocoanos y aumento del ingreso per cápita. Se formuló en el marco de la creación del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
1959	Ley 2ª. Zonas forestales protectoras y bosques de interés general — Alberto Lleras Camargo	Medidas de protección de territorios frente a la extracción de materias primas. Apertura de la explotación forestal y minera; migración de la población asentada en las tierras bajas del Pacífico.
1961	Ley 135 de Reforma Agraria — Alberto Lleras Camargo	Titulación de baldíos e incremento de la productividad mediante la creación de cooperativas. A partir de esta ley se creó el Incora.
1974-1978	Proyecto de Desarrollo Integral Agrícola Rural (DIAR) — Alfonso López Michelsen	Desarrollo integral en el sector educativo, institucional; mejoramiento de redes del mercado, tecnificación de la producción agrícola y pecuaria. Hizo parte del Plan de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y se realizó en el Chocó. El DIAR tuvo el apoyo del gobierno holandés.
1984-1992	Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica Colombiana (Plaidecop)	Explotación de recursos forestales, pesqueros y fluviomíneros; mejorar el bienestar de la población; institucionalizar la visión de desarrollo del Pacífico como un corredor de tráfico intenso de bienes y servicios, creación de corporaciones regionales. Se implementa el <i>Plan de Desarrollo Así Estamos Cumpliendo</i> (1987-1990) para articular el Pacífico a mercados internacionales.
1992	Plan Pacífico	Planteó una visión conservacionista de desarrollo humano y sostenible, promovió la infraestructura portuaria y la inversión extranjera en materia extractiva y agroindustrial. Se fortalecieron vínculos con Japón. Cuenta con recursos del PNUD, del BID y el Banco Mundial.
1990-1994	La Revolución Pacífica — César Gaviria Trujillo	Se inserta en la región bajo el modelo de apertura económica con la pretensión de progreso y mejoramiento de condiciones de vida de la población.
1994-1998	El Salto Social — gobierno de Virgilio Barco Vargas	Basado en el desarrollo integral y el desarrollo humano sostenible. Propuso mejoramiento de infraestructura de transporte, construcción de la vía alterna Cali- Buga-Buenaventura.
1998-2001	Cambio para Construir la Paz — Andrés Pastrana Arango	Para el Pacífico implicó la reconstrucción de la red férrea del Pacífico por su ubicación geoestratégica.

Continúa

Años	Planes, políticas y proyectos	Objetivos, contexto y consecuencias
1999	El Plan Colombia — Andrés Pastrana Arango	Se articuló con los planes Patriota y Consolidación. En el Pacífico tuvo como consecuencia el incremento de la violencia asociada al conflicto armado.
1999	Agenda del Pacífico — Proyecto Choco Biopacífico	Planteó una visión del desarrollo que integraba a los habitantes como depositarios de conocimientos ancestrales de medicina, del entorno biótico y la protección ambiental. Sin embargo, los excluía de los proyectos de protección y desarrollo sostenible. Enfatiza en infraestructura para la conectividad y la economía extractivista.
2000	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana, IIRSA	Surge en la Declaración de Brasilia del año 2000. Para la región Pacífica se propone la construcción y adecuación de puertos, la vía Bogotá-Buenaventura (doble calzada Buga-Buenaventura).
2002-2010	Hacia un Estado Comunitario — Álvaro Uribe Vélez Plan Integral para el Pacífico — PRI-Arquímedes—.	Se refuerza con los Conpes 3310 “Política de Acción Afirmativa para la Población Negra y Afrocolombiana”; 3342 “Plan de Expansión Portuaria 2005-2006: Estrategias para la Competitividad del Sector Portuario”; 3410 “Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de Buenaventura”. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en el caso de Buenaventura, convertirla en una ciudad amable; fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Se impulsan proyectos viales, fluviales, mantenimiento y dragado del puerto para su modernización y ampliación.
2010-2014	Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad — Juan Manuel Santos.	Este PND da continuidad a los proyectos extractivos y de infraestructura. En este Plan se reconoce la existencia del conflicto armado y las víctimas adquieren gran centralidad en las intervenciones sociales. Buenaventura, al albergar gran número de víctimas, se convierte en un municipio receptor de la ayuda humanitaria, tanto institucional, como de la cooperación nacional e internacional.
2014-2018	Plan Nacional Todos Somos Pazcífico. — PND Todos por un Nuevo País — Juan Manuel Santos.	El primero plantea inversiones en servicios públicos, conectividad y transporte. Propone la disminución de la mortalidad infantil, el aumento en la cobertura de vacunación y cobertura en educación media y mejorar el acceso al agua potable en el área rural. En el marco del PND se creó la Gerencia Social para el Pacífico y el Fondo para el Pacífico como un espacio de articulación entre los Gobiernos nacional, departamental y local. Sin embargo, no resulta clara la articulación entre las propuestas de las organizaciones del Pacífico y las institucionales.

Fuente: elaboración propia con base en el documento *Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana* (Defensoría del Pueblo, 2016).

En resumen, las acciones del Estado se destacan en la construcción de infraestructura para el desarrollo portuario y transporte intermodal mediante la participación de entes nacionales, departamentales y locales. Algunos de estos, financiados con recursos de la banca privada, por ejemplo, del Fondo Plan Todos por el Pacífico y el Plan Todos Somos Pazcífico; contemplados en documentos Conpes (como el 3847 del 2015). En la mayoría de los casos, esos planes están dirigidos a transformar la situación de pobreza que vive Buenaventura, pero dado el énfasis que ponen en la competitividad del puerto, terminan favoreciendo la acumulación de los agentes privados. El análisis que hacemos en este trabajo demuestra que la superación de la pobreza requiere propuestas menos convencionales y, sobre todo, aprender de la experiencia de los diferentes actores (en el Capítulo III planteamos las principales dificultades que estos han enfrentado).

Es importante resaltar que el Estado financia sus intervenciones con recursos propios y con créditos de organismos multilaterales como el BID. En Buenaventura, hay varios casos de este tipo. Un ejemplo es el Plan Todos Somos Pazcífico, que desarrolló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRID) con otras entidades nacionales. Este tenía cobertura regional e integraba acciones de saneamiento básico, electrificación, acueducto y alcantarillado. En otros, los recursos provienen de la cooperación internacional y se hacen a través de convenios entre entidades estatales colombianas y gobiernos de diferentes países. Un ejemplo es el convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Valle del Cauca y la Embajada de la República Popular China para el megaproyecto del parque industrial pesquero que pretendía reunir todas las empresas pesqueras en el sector de El Piñal. A continuación, en la Tabla n.º 2.2, se muestran los actores institucionales más reconocidos por los participantes en los talleres y entrevistas y los que se encontraron en la revisión de fuentes documentales.

Otro elemento para tener en cuenta es que la intervención estatal se articula con el sector productivo, sobre todo, en proyectos macroestructurales que planean la vinculación de Buenaventura a la plataforma de la Cuenca del Pacífico, un foco para el desarrollo económico del país. Por supuesto, también el Estado establece alianzas con los privados en proyectos de fortalecimiento de las capacidades comunitarias y de organización social, culturales, educativas, en medio ambiente y turismo. La mayoría de estas alianzas se establece entre organismos de cooperación y agencias internacionales con instituciones estatales locales (Alcaldía Distrital y la Gobernación del Valle del Cauca), con empresas departamentales Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) y con entes nacionales (Departamento de Prosperidad Social (DPS), Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF),

Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia), Ministerio de Educación y Ministerios de Cultura y del Trabajo. También en este tipo de convenios participan organizaciones sociales de base como los consejos comunitarios (por ejemplo, el del río Naya, el de La Barra, el de La Plata, etc.) y colectivos sociales (por ejemplo, Puerto Creativo y Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes).

Tabla n.º 2.2. Presencia del Estado en Buenaventura

Agencias, unidades, departamentos, direcciones, institutos, organismos, centros y entes de control		
<ul style="list-style-type: none"> • Agencia Presidencial de Cooperación (APC); Agencia Nacional de Tierras (ANT); Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE); Agencia para la Renovación del Territorio (ART); Agencia de Desarrollo Rural (ADR) • Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (AUCT); Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD); Unidad de Atención al Desplazado • Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) Fuerzas Armada 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Prosperidad Social (DPS); Departamento Nacional de Planeación (DNP) • Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollos (Fonade) • Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) • Banco de la República (BRC) • Dirección General Marítima (Dimar) • Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) • Parques Nacionales Naturales (Parque Uramba Bahía Málaga) • Centro Nacional de Productividad (CNP); Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) • Consejería Presidencial para Asuntos del Pacífico 	<ul style="list-style-type: none"> • Red de Solidaridad Social • Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) • Gobernación del Valle • Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) • Alcaldía Distrital de Buenaventura • Defensoría del Pueblo • Personería • Contraloría • Fiscalía • Aguas y Aguas de Pereira • Ecopetrol • Empresa de Energía del Pacífico
Ministerios	Universidades	Instituciones de educación técnica
<ul style="list-style-type: none"> • Educación; Cultura; Trabajo; Vivienda, Ciudad y Territorio; Comercio y Turismo; Salud y Protección Social; Agricultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad del Valle • Universidad del Pacífico • Universidad Nacional de Colombia • Universidad Pedagógica Nacional • Universidad Nacional, sede Palmira 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) • Escuela Taller

Fuente: 1.^{er} y 2.^o Taller (Buenaventura, abril 7 y junio 15-16 de 2018), once entrevistas con profesionales del tercer sector, funcionarios y líderes sociales y revisión de fuentes documentales: prensa, revistas, blogs, páginas web de organizaciones e informes institucionales (2000-2017).

Es importante anotar que varias de las acciones gubernamentales muestran cierto asistencialismo propio del modelo de intervención del Estado neoliberal, que focaliza sectores poblacionales para suministrar subsidios o transferencias condicionadas. Sobre todo, a los pobres o a los que sufren riesgos específicos y a los cuales las instituciones clasifican como beneficiarios a través de una metodología del DNP denominada Sistema de Beneficiarios, más conocida como Sisben, que opera con puntajes asociados a las condiciones socioeconómicas de los hogares. Estas acciones también comprenden programas gubernamentales de inclusión social, realizados por el DPS, que focalizan poblaciones vulnerables, clasificadas en el nivel 1 del Sisben, a las cuales se les otorga un recurso financiero de manera periódica. Entre estos programas sobresalen Jóvenes en Acción y Más Familias en Acción. El primero se dirige a jóvenes bachilleres en condición de pobreza y vulnerabilidad; el segundo, a reducir la inasistencia y la deserción de los alumnos de educación primaria y secundaria. Estos programas complementan los ingresos de las familias pobres, sobre todo de las que cuentan entre sus miembros con niños menores de siete años. Los recursos entregados deben incrementar el gasto en alimentación, mejorar las prácticas de cuidado en salud, nutrición, estimulación temprana y prevención de la violencia intrafamiliar. Otros programas de este tipo son las estrategias De 0 a Siempre, dirigida a niños hasta de cinco años, y Colombia Mayor, orientada a la población de bajos ingresos, para mujeres de más de 54 años y hombres de más de 57 años. En este orden, también son importantes los subsidios de vivienda operados por Fonvivienda que, entre 2002 y 2005, tuvieron una inversión de \$5.713 millones de pesos. En el sector rural el operador fue el Banco Agrario que otorgó 278 subsidios para vivienda rural por \$1.530 millones.

Estas intervenciones estatales están orientadas a la reducción de la pobreza extrema y el hambre (tal como se propuso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio). Pero, como algunos analistas han detectado, no transforman las condiciones de vulnerabilidad de la población pobre y, por ello, muchas familias se vuelven dependientes. Los medios de comunicación han denunciado que estos subsidios son manipulados por los políticos locales para conseguir votos en periodos electorales. En muchos casos, los candidatos generan rumores durante las campañas presidenciales sobre la terminación de los programas con la finalidad de crear pánico entre los afiliados y debilitar a sus contendores políticos. No obstante, las críticas que recibe la entrega de estos subsidios por parte del Estado en muchos casos, estos recursos contribuyen a la sobrevivencia de las familias que no perciben otros ingresos y, por ello, estos subsidios se mantienen y se amplían. Por último,

es importante señalar que buena parte de las inversiones estatales en materia de infraestructura portuaria obedecen a la apuesta de los diferentes gobiernos nacionales por vincularse a los grandes “clubes económicos”, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico —APEC—, a la Alianza del Pacífico, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE—, entre otras.

El tercer sector

En lo que respecta a la cooperación internacional, se trata del apoyo de gobiernos y organizaciones extranjeras de carácter no oficial³, cuyas políticas se inscriben en las agendas globales que asumen este tipo de agencias.

Las cuestiones clave de la actualidad como el medioambiente y el cambio climático, energía y seguridad alimenticia, la lucha contra la pobreza a nivel mundial, el vínculo entre el crecimiento, la equidad y las migraciones, representan desafíos globales para el conjunto de la comunidad internacional y van más allá de la concepción clásica de las relaciones entre Norte y Sur del planeta (Tassara, 2012, p. 73).

Esta agenda parece ser uno de los medios para la construcción, por encima de la dinámica de los Estados, de un futuro común para la humanidad; agenda que está cambiando la forma de la intervención y que muestra el modo como dichas agendas empiezan a intervenir a nivel local con orientaciones globales. Este proceso se ha implementado desde la década de los noventa y ha implicado el aumento de los actores involucrados en la cooperación para el desarrollo,

Como efecto de la menor capacidad de los Estados nacionales para financiar autónomamente las políticas públicas, incluidas las referidas al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, y del consecuente desplazamiento del poder hacia los mercados y los actores no estatales (Tassara, 2012, p. 76).

El aumento de las agencias de cooperación se inscribe en los cambios en la estrategia de desarrollo y la reorientación de la política económica que ha caracterizado a los países latinoamericanos desde finales del siglo XX, lo cual de manera general se ha definido como resultado del avance de

³ Dentro de los tipos de cooperación internacional se encuentran la cooperación oficial o ayuda oficial al desarrollo coordinada por la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC - Colombia) y la cooperación no oficial, también llamada cooperación descentralizada, la cual se realiza directamente entre cooperantes que pueden ser países, entes territoriales, ONG o fundaciones extranjeras, con entidades del mismo rango en Colombia (Acción Social, 2008).

políticas neoliberales en la región. La emergencia de este modelo cambió las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, que habían caracterizado tradicionalmente a las sociedades latinoamericanas, para dar pie a nuevas formas de legitimación política e integración social.




Expresado de manera acotada, la antigua matriz “estadocéntrica” que servía de modelo de intermediación y agregación de intereses y demandas, favoreciendo la acción colectiva y organizada, y la predominancia de espacios institucionales y actores político-estatales, a la vez coexiste y se diluye en una nueva matriz “mercado-céntrica”. Esta nueva matriz propugna la extensión de la lógica de mercado a las relaciones sociales, favoreciendo la orientación hacia la competencia, el rendimiento y la acción individual, así como la liberalización de relaciones previamente reguladas de forma estatal (laborales, comerciales); además, promueve la definición subsidiaria del rol del Estado y la descentralización de sus funciones, otorgando tendencialmente mayor preeminencia al sector privado (Sottoli, 2002, p. 45).

Este apoyo al sector privado ha permitido, en materia de intervención, el reconocimiento a la capacidad de interlocución y de trabajo con los otros, desarrollado por las ONG, las cuales en la mayoría de los casos se han convertido en operadoras de las políticas del Estado (Montaño, 2005) y, en otros, en organizaciones que gracias a la financiación internacional mantienen una cierta autonomía con respecto a las instituciones estatales. El suministro de recursos a organizaciones sociales y comunitarias ha contribuido al fortalecimiento de la sociedad civil y ha permitido una mayor veeduría de las acciones del Estado y el desarrollo de iniciativas que buscan suplir la escasa presencia institucional. Esto es un claro ejemplo de cómo los procesos de cooperación inciden en las políticas locales y afectan las agendas públicas nacionales. “Considerando sólo los donantes oficiales, en la actualidad [...] el número promedio de donantes oficiales en cada país receptor ha pasado de 12 en 1960 a 33 en 2004, y hay más de 30 países con más de 40 donantes activos” (Tassara, 2012, p. 77).

El incremento de estos actores incide en la gobernanza local, pues como lo muestran algunas de las organizaciones consultadas en este estudio, su actividad no solo se concentra en capacitar y tener influencia en algunos barrios de la ciudad y sobre grupos, sino que también generan opinión a nivel local y nacional mediante la utilización de sus propios medios y recursos de comunicación. En el paro cívico de Buenaventura, de mayo de 2017, varias de las organizaciones estudiadas hicieron parte de las mesas y participaron activamente en las actividades organizadas por sus promotores. No es claro si la presencia de ellas implica procesos de coordinación y trabajo conjunto, más bien se percibe proliferación de acciones aisladas e inconexas y

un consecuente despilfarro de recursos. Sin embargo, hay consenso entre los actores institucionales en que la cooperación internacional contribuye al éxito de algunos programas, no es solo fuente de financiación, sino que imprime transparencia y eficacia (Otálora y Rouvinski, 2013). De esta manera, se afianza la idea de la eficacia de lo privado frente a lo público en acciones para el desarrollo, que hace parte, como se mencionó *supra*, de los nuevos paradigmas que hoy caracterizan la intervención y la cooperación en sociedades cada vez más globalizadas e interdependientes. En Buenaventura, es muy importante la presencia de los organismos de cooperación internacional, principalmente de Naciones Unidas, porque en varios casos se han encargado de la atención humanitaria de emergencia para víctimas del conflicto armado (véase Tabla n.º 2.3).

Tabla n.º 2.3. Presencia del tercer sector en Buenaventura

Organismos internacionales			
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Programa Mundial de Alimentos (PMA); Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC); Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Unión Europea (UE); Banco Internacional de Desarrollo (BID); Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).			
Embajadas			
• Embajada de Canadá	• Embajada de Suiza	• Embajada de la República Popular China	
• Embajada de Japón	• Embajada de Noruega		
Agencias de cooperación			
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).		• Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo (SWISSAID)	
		• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Noruego para Refugiados (NRC).	
ONG internacionales			
Ford Foundation; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola); Agricultural Cooperative Development International (ACDI); Volunteers Overseas Cooperative Assistance (Voca); Fundación Green Hope; Human Rights Watch (HRW).		Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); Trafigura Foundation; Fundación Limmat	
		Mama Cash	

Continúa

ONG internacionales

Peace Brigades International (PBI); Christian Aid; Save the Children; Children Change Colombia		Plan Internacional; Boamistura; Caritas Colombia; Solidaridad Internacional; Mundubat	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad)		Misereor	
Fundación Cultural Asia Iberoamérica		Cuso International	
Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria (Deca)		Fundación Activos Culturales Afro Acua	
Asociación para la Cooperación Cultural, Técnica y Educativa (ACTEC)		Operaciones Europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO)	
Fight For Peace; Centro de Estudios del Sur Decolonizando el Pensamiento (Cedesur)		Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)	

ONG nacionales

Pastoral Social de Buenaventura; Fondo Acción Bogotá; Conservación Internacional Colombia; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento; Corporación Día de la Niñez; Corporación Podion; Manos Visibles; Fundación Norte Sur; Fundación Más Arte y Más Acción; Fundación Interdisciplinaria para el Desarrollo de las Comunidades (Funindecum); Dividendo por Colombia Conpaz; Pastoral Afrocolombiana; Fundescodes; Rostros y Huellas; Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro); Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados; Vallenpaz.

Fuente: 1.er y 2.º Taller (Buenaventura, abril 7 y junio 15-16 de 2018), once entrevistas con profesionales del tercer sector, funcionarios y líderes sociales y revisión de fuentes documentales: prensa, revistas, blogs, páginas web de organizaciones e informes institucionales (2000-2017).

Los agentes privados

Las acciones del sector privado se dirigen a mejorar la infraestructura portuaria y han sido muy importantes en el fortalecimiento de los servicios que ofrece el Puerto. En los últimos años, se destaca la construcción del TCBuen, el puerto marítimo Delta del Río Dagua y el proyecto industrial Puerto Agua Dulce. La participación de este sector es considerable (9.5%), en parte porque las inversiones en infraestructura son más costosas, pero también porque las acciones emprendidas se enmarcan en la responsabilidad social empresarial (RSE) que debe devolver a la sociedad una proporción de las ganancias que obtienen las empresas en el sector donde desarrollan su actividad económica. En otros casos, la participación en lo social por parte de estos agentes se presenta como filantropía.

La Tabla n.º 2.4 presenta los principales agentes privados que han intervenido en Buenaventura en el período analizado, de acuerdo con la revisión realizada para esta investigación.

Tabla n.º 2.4. Agentes privados con presencia en Buenaventura

Empresas		
<ul style="list-style-type: none"> • Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. (SPRBun) • Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) • Terminal Logístico de Buenaventura (TLB) • Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce (SPIA) • International Container Terminal Services (ICTSI) • Cámara de Comercio 	<ul style="list-style-type: none"> • Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) • Asociación Nacional de Navieros (Asonav) • Gases de Occidente • Propal • Asociación de Operadores Portuarios • Hidropacífico 	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de Desarrollo de China (CDB) • Cámara de Comercio de Buenaventura (CCBUN) • Constructora CRP Viva Colombia • Empresas Públicas de Medellín (EPM) • Bancolombia • Banco BBVA
Fundaciones de responsabilidad social empresarial		
<ul style="list-style-type: none"> • Fundación Sociedad Portuaria • Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (FDI) • Fundación para la Gestión, Innovación y Desarrollo Sostenible (FGIDS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundación Surtigas • Fundación Malecón • Fundación Carvajal • Fundación Cartón Colombia • Fundación Corficolombiana 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundalectura • Fundación Orbis • Fundación Agua Dulce • Fundación Corona • Fundación Éxito
Universidades privadas		
<ul style="list-style-type: none"> • Pontificia Universidad Javeriana Cali • Universidad Autónoma de Occidente • Universidad San Buenaventura - Cali 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad Icesi • Universidad Santiago de Cali • Universidad Eafit 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Manizales • Universidad de los Andes • Universidad Jhon Hopkins
Fundaciones familiares y otras organizaciones privadas		
<ul style="list-style-type: none"> • Fundación Saldarriaga Concha • Fundación Nelly Ramírez • Fundación Deportiva Boner y Osman Moreno 	<ul style="list-style-type: none"> • Caja de Compensación Comfandi • Caja de Compensación Comfenalco 	<ul style="list-style-type: none"> • Comfamar • Fundación Fe y Alegría Profamilia

Fuente: 1.º y 2.º Taller (Buenaventura, abril 7 y junio 15-16 de 2018), once entrevistas con profesionales del tercer sector, funcionarios y líderes sociales y revisión de fuentes documentales: prensa, revistas, blogs, páginas web de organizaciones e informes institucionales (2000-2017).

Las fundaciones asociadas a estos agentes privados llevan a cabo proyectos en educación, empleabilidad y cultura, principalmente. Sin embargo, cuando establecen alianzas con el Estado, sus acciones apuntan a proyectos de infraestructura para saneamiento básico, energía, acueducto y alcantarillado, desarrollo urbano, industrial y portuario. Por ejemplo, la alianza entre la Sociedad Portuaria y el DNP realizó proyectos dirigidos a obras de ampliación y mejoramiento de la infraestructura portuaria. También se destaca la alianza estatal con la Fundación Malecón Bahía de La Cruz⁴ para la ejecución del proyecto Malecón Bahía de La Cruz, que tenía como propósito la renovación urbanística de Buenaventura. Estos agentes privados también han participado en el crecimiento inmobiliario, jalonado por la construcción de vivienda y oficinas en la zona insular, que demandan ejecutivos, empleados públicos, profesionales y “hombres” de negocios. En estos proyectos los privados se unen al Estado para recuperar y reubicar espacios públicos.

Estos agentes también se alían con el tercer sector para adelantar proyectos productivos, de educación, culturales, de empleabilidad, de fortalecimiento de las capacidades comunitarias y de organización social. En los proyectos ligados al sector educativo, se destaca el papel que han desempeñado las universidades privadas, que establecen alianzas, principalmente, con la Fundación Sociedad Portuaria para desarrollar proyectos de diferente índole (investigación/ intervención). Cabe aclarar que la mayoría de ellas no ofrecen programas académicos en el municipio, ni tienen sedes allí. La oferta de educación de tercer ciclo, como lo veremos más adelante, ha sido atendida por dos instituciones estatales, la Universidad del Valle y la Universidad del Pacífico. A las colaboraciones entre agentes privados se integran las fundaciones creadas por empresas. Las fundaciones familiares actúan de manera puntual en intervenciones dirigidas a grupos (niños y jóvenes), a fortalecer organizaciones, poblaciones o barrios.

La comunidad, un actor con una doble condición: intervenida/interventora

La comunidad ha aprendido a organizarse y, en ese proceso, ha constituido organizaciones, colectivos y grupos que se alían con los diferentes actores que hemos enunciado atrás. Lo hace conformando redes, mesas o incluso vinculándose a movimientos sociales que reivindican identidades colectivas.

⁴ Esta fundación está integrada por 23 empresas privadas (algunas hacen parte de la Sociedad Portuaria de Buenaventura). En la primera etapa se invirtieron 27.000 millones de pesos.

Por ejemplo, con el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y los movimientos por la paz, de mujeres, ambientalistas, de víctimas del conflicto armado, entre otros.

Tal como señala Castillo (2016), esto ocurre porque las organizaciones sociales y comunitarias han surgido en condiciones de desarrollo histórico particulares que han propiciado su emergencia y multiplicación. En la región del Pacífico, se destacan las vinculadas a la producción agropecuaria, las étnico-territoriales (los consejos comunitarios y los cabildos), las de mujeres, las culturales, las deportivas, las religiosas, las políticas, las de víctimas del conflicto armado, las de jóvenes y también las “de papel” (conformadas para acceder a recursos, pero sin tradición ni arraigo en lo local), entre otras.

En ese sentido, varias de las experiencias que han surgido no se ajustarían a la noción weberiana de organización, desde la cual “estas son un dispositivo de coordinación en el tiempo y en el espacio de las actividades humanas y de administración de los bienes que regularmente se producen. Tienen una estructura jerárquica y, desde una racionalidad de la acción, distinguen entre medios y fines” (Weber, 1977, citado en Castillo, 2016, p. 32). Ellas se ajustarían más a la definición que hacen Akindele, Afolabi, Pitan y Gidado (2016), que conciben la organización como un sistema continuado de coordinación de las actividades humanas que transforma un conjunto de recursos materiales, naturales y de capital, que busca la solución de problemas y las necesidades de interacción con otros sistemas de actividad humana y de recursos disponibles en su entorno particular (p. 1).

Por la temporalidad en la que surgen, ellas se diferencian de su entorno, por lo tanto, se pueden distinguir de la sociedad en la que están inmersas; desarrollan relaciones sensibles con el medio, de tal forma que incorporan cambios para seguir funcionando como tales. De acuerdo con Nicklas Luhmann (2010), “la organización también es racional en el sentido que busca alcanzar determinados resultados del mejor modo posible” (citado en Castillo, 2016, p. 37). Este autor considera la organización como un sistema autopoietico de comunicaciones a través del cual se reproduce a sí misma y, como todo sistema social, también reproduce a la sociedad. Pero además de las comunicaciones, para él también es relevante la decisión, porque estas se toman en el presente para anticiparse al futuro. Además, destaca su ubicación en el espacio donde sus integrantes trabajan, se reúnen, conversan y deliberan para llegar a acuerdos y tomar decisiones.

Por lo anterior, cuando estudiamos estas organizaciones nos fijamos en tres condiciones estructurales: “la burocratización como diferenciación y

manifestación general del sistema económico de la sociedad; la legalidad de las condiciones para la toma de decisiones; y la relación de la sociedad moderna con la vida del individuo” (Lukmann citado en Castillo, 2016, pp. 38-39). De ese modo, diferenciamos las más estructuradas: cabildos y consejos comunitarios, asociaciones, comités y federaciones, que unen a varias de estas, de aquellas que surgen por necesidades específicas (víctimas del conflicto, afectados por una catástrofe natural); las que agrupan a colectivos (pescadores, peluqueros); las que reivindican una identidad (de género, étnica no asociadas al territorio, generación) o las culturales (artísticas, etc.).

Aunque los pobladores evitan ser instrumentalizados por los actores armados, la dinámica del conflicto armado ha impedido que desarrollen mejor su neutralidad mediante formas simbólicas de expresión. No obstante, los estudiosos de la acción colectiva destacan distintos repertorios culturales que han servido para movilizarse, protestar y resistir en el territorio ancestral y/o construido (por ejemplo, los terrenos ganados al mar, donde se instaló el Espacio Humanitario). Por otro lado, estos actores sociales y comunitarios han desarrollado una relación muy estrecha con la cooperación internacional y las ONG nacionales y extranjeras y, con su apoyo, han emprendido la restitución de derechos, apelando a los instrumentos normativos internacionales. En las Tablas n.º 2.5 y n.º 2.6 mostramos las principales organizaciones étnicas, sociales y comunitarias reportadas por los asistentes a los talleres, los entrevistados y las fuentes documentales.

Tabla n.º 2.5. Organizaciones étnicas con presencia en Buenaventura

Consejos comunitarios	Formas de asociación
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad Negra de la vereda de Gamboa • Comunidad Negra de San Joaquín • Comunidad Negra de la vereda de San Joaquín Agua Dulce • Comunidad Negra del Río Curbaradó • Los Lagos Río Dagua • Comunidad Negra de Taparal y Humane • Comunidad Negra de Calle Larga Río Dagua • Comunidad Negra del Alto Río Dagua Pacífico, • Cimarrones, Cisneros. • Chucheros Ensenada del Tigre 	<p>Organizaciones de río: Oncaproteca (Organización Negra Campesina Prodefensa del río Calima), Onuira (Organización de Negros Unidos del río Anchicayá), Aconur (Asociación de Comunidades Negras del río Raposo), Codinco (Comité de Defensa de los Intereses del río Cajambre), Aponury (Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí), Minavieja (Organización del río Mayorquín) y la Organización por la Defensa de los Intereses de las Comunidades Negras del río Naya. Ecomanglar (La Plata, Bahía Málaga), Feccova.</p>

Continúa

Consejos comunitarios con títulos colectivos

• Taparal - Anchicayá	• Alto Potedó	• Cabeceras - río San Juan
• Bajo Potedó - Anchicayá	• Río Naya	• Cuéllar - río San Juan
• Guadualito - Dagua	• La Esperanza - Dagua	Malaguita - Bajo San Juan
• Campo Hermoso- Dagua	• Bahía Málaga - La Plata	• Bracitos y Amazonas –
• Mayorquín y Papayal	• Bazán - La Bocana	Anchicayá
• Río Yurumanguí	• Calle Larga - río Dagua	• Agua Clara - Anchicayá
• Llano Bajo - Anchicayá	• Zacarías - río Dagua	• Sabaletas - Anchicayá
• La Brea - Calima	• Citronela- río Dagua	• San Marcos - Anchicayá
• Limones - Anchicayá	• Cuenca Media y Alta del	• Guaimía - Anchicayá
• Río Cajambre	río Dagua	• Mayor Río Anchicayá
• Río Raposo	• Córdoba y San Cipriano	• Bellavista -Anchicayá
• Río Calima	- río Dagua	• La Barra

Proceso de comunidades negras (PCN)

Palenque El Congal (PEC): agrupa consejos comunitarios, seis organizaciones étnico-territoriales, colectivos urbanos y cuatro equipos técnicos (DD. HH., Territorio y Medio Ambiente, Educación y Género).

Resguardos indígenas / cabildos
Formas de asociación

<ul style="list-style-type: none"> • Emberas: Burjon – La Unión San Bernardo. • Waunaan: Río Naya – Joaquincito, Cabeceras; Río Dagua; Chachajo; Guayacán – Santa Rosa; Nuevo Pitalito. • Nasa: La Delfina. • Otros: Puerto Guadualito (Resguardo Pizario); Chonara-Huena; La Meseta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac). • Asociación de Cabildos Indígenas del Valle de la Región Pacífico (Aciva-RP): reúne cinco pueblos indígenas del Valle del Cauca: wounaan noanamá, embera chamí, eperera siapidara, inga y nasa. • Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
---	--

Fuente: 1.^{er} y 2.^o Taller (Buenaventura, abril 7 y junio 15-16 de 2018), once entrevistas con profesionales del tercer sector, funcionarios y líderes sociales y revisión de fuentes documentales: prensa, revistas, blogs, páginas web de organizaciones e informes institucionales (2000-2017); complementada con datos de Guzmán (2018) e informe Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Según datos de la Cámara de Comercio de Buenaventura, en el 2013 hay 34 títulos colectivos entregados a igual número de consejos comunitarios en el distrito de Buenaventura. Sin embargo, existen 12 comunidades más con consejo comunitario, pero cuyo título colectivo está en trámite para un total de 46 consejos comunitarios (Flórez y Millán, 2007).

Dada la composición poblacional y las dinámicas de la población negra y de los grupos indígenas que habitan en Buenaventura y de la relación que han establecido con el territorio, también destacamos las organizaciones en las cuales es crucial el componente identitario que la organización mantiene con los elementos étnicos. Esta discusión la desarrollamos en el siguiente capítulo.

Tabla n.º 2.6. Organizaciones sociales y comunitarias con presencia en Buenaventura

Organizaciones de mujeres	Formas de asociación
<ul style="list-style-type: none"> • Fundemujer • Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) • Madres de Punta del Este • Red Mupaz • Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro 	<ul style="list-style-type: none"> • Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle (CDOMV) • Asociación de Mujeres Afrocolombianas (Amuafroc) • Asociación de Mujeres Negras e Indígenas (Anmucic) • Ruta Pacífica de las Mujeres
Organizaciones productivas	Formas de asociación
<ul style="list-style-type: none"> • Asociación de Pescadores y Piangueras del río Cajambre (Pinpesca) • Asociación de Agricultores y transformadores del río Anchicayá - Arakatanga • Cooperativa Multiactiva de Pescadores Artesanales de Buenaventura 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Jóvenes y Mujeres Productor@s del Pacífico Sur Colombiano • Asociación Centro de Orientación Educativa - Acoe
Organizaciones culturales, artísticas, de jóvenes y otras	
<ul style="list-style-type: none"> • Fundación Centro Ágape • Fundación Caracoles del Pacífico • Fundación Si Buenaventura • Fundación Luz de Esperanza Buenaventura • Fundación Ocean/Net Pacífico • Fundación Arcoiris siglo XXI • Fundación Más Arte Más Acción • Fundación Integración Amigos para un Mejor Futuro • Fundación Agroecológica y Social del Pacífico • Fundación Palafitos, Arte y Luchas • Asociación de Estudiantes Afrodescendientes del Valle del Cauca "Malcolm X" • Corporación Marea Verde • Tura Hip Hop • Asociación de Peluqueros y Peinadores • Asociación Cultural Rostros Urbanos • Juventud 500 • Zona Humanitaria del Puente Nayero • Marcando Territorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundación Red Social Pacífico Activo • Fundación Afropacífico • Fundación San Cipriano • Fundación Sueños Reales • Fundación Ecos del Pacífico • Fundación Pacífico Futuro (Fundafuturo) • Fundación Juvenil San Buenaventura • Fundación Minuto de Dios • Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana • Fundación Construyendo Caminos • Fundaproductividad • Corporación Subregional de Equidad Social • Pro y Paz • Nayita Color • Transformando Mentes • Asociación de Comunidades Negras de los Terrenos Ganados al Mar

Continúa

Comité Paro Cívico 2017 (*)

Conformado por más de 110 organizaciones sociales y populares, docentes, trabajadores informales, comunidades negras, indígenas, juntas de acción comunal, Pastoral Social, sector comercio, sector transportador terrestre y fluvial, estudiantil, etc.	Proceso de Comunidades Negras en Colombia - PCN Fundescodes Nomadesc Pastoral Afrocolombiana Comité por el Agua de Buenaventura Comité por la Defensa y Salvación de Buenaventura Colectivo Juvenil Transformando Mentes	Junta de Acción Comunal - Barrio Isla de la Paz Junta de Acción Comunal - Barrio La Cima Organización Étnico Territorial de Negros Unidos del río Anchicayá (Onuira) Organización Étnico Territorial Mina Vieja del río Raposo Organización Étnico Territorial Oncaproteca de la Cuenca Baja del río Calima. Organización Aponury del río Yurumanguí Asociación de Comunidades Negras de los Terrenos Ganados al Mar
--	--	--

Fuentes: 1.^{er} y 2.^o Taller (Buenaventura, abril 7 y junio 15-17 de 2018), once entrevistas con profesionales del tercer sector, funcionarios y líderes sociales y revisión de fuentes documentales: prensa, revistas, blogs, páginas web de organizaciones e informes institucionales (2000-2017).

(*) En el siguiente capítulo nos referimos en extenso a la organización y el funcionamiento del paro cívico.

TEORÍA DEL CAMBIO Y PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN

Tal como sugiere Sztompka (1995), en lugar de una preocupación casi exclusiva por el crecimiento económico, cuando los sociólogos estudian el cambio social dirigen la atención hacia los valores humanos, las actitudes, los significados simbólicos y los códigos culturales que se transforman, en suma, la dirigen hacia los intangibles y los imponderables. Para este autor, el cambio social es producto de un proceso histórico contingente, de deconstrucción, extensión y legitimación de las instituciones y valores de la modernidad, la democracia, el mercado, la educación, la administración racional, la autodisciplina y ética del trabajo. El cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de ellas mismas. Por eso, su estudio comprende la determinación de las causas o factores que lo producen. En este caso es importante dar cuenta de cómo Buenaventura se transforma en uno de los principales puertos de Colombia sin llegar a ser una ciudad importante; de cómo se planifica el

mundo urbano, desconociendo los vínculos de su población con el mundo rural, de cómo se van ensamblando prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales para enfrentar diferentes modalidades de violencia y graves violaciones de los derechos humanos.

Siguiendo estas orientaciones, este ejercicio se concentra en reconocer las principales intervenciones que han realizado diferentes actores en Buenaventura, desde 2000 hasta 2018, y, en efecto, encontramos que detrás de ellas hay un interés por *modificar determinadas realidades*, partiendo de *un conjunto de supuestos y proyecciones* para el municipio/la ciudad/el distrito/el puerto/la comunidad/el territorio, que a veces, tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Un *análisis de contexto* (elaborado mediante un diagnóstico socioeconómico).
- b) Una *valoración de las capacidades* de facilitación del proceso.
- c) Una *explicitación crítica de los supuestos*.
- d) Un *enfoque de pensamiento-acción* que identifica hitos y condiciones necesarias para lograr los cambios.
- e) Un *ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor* que incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos complejos de cambio social.
- f) Opcionalmente, *el diseño de un mapa semiestructurado de cambio, que enlaza sus acciones estratégicas a ciertos resultados de proceso que impacten en el entorno*.

Estos elementos de la teoría del cambio, implícita en las intervenciones sociales, contemplan *una herramienta de proceso* que permite monitorear tanto las acciones emprendidas como las ideas que estos los actores han puesto en juego (Retozala, 2017). En ese sentido, podemos afirmar que la teoría del cambio predominante en Buenaventura ha sido *el desarrollo del Pacífico*. Esta idea parte del supuesto de impulsar el “progreso” a través de la inversión en el puerto y en las infraestructuras para su funcionamiento. Por supuesto, los principales actores son el Estado y los agentes privados. El primero se ajusta a los requerimientos de los organismos internacionales, bancos, gobiernos y los acuerdos que pactan, y los segundos siguen invirtiendo y capitalizando ganancias extraordinarias que escasamente reinvierten o redistribuyen en el municipio.

La apuesta por “desarrollar” el puerto de Buenaventura

En el documento *Problemática humanitaria de la región pacífica de Colombia*, la Defensoría del Pueblo (2016) presenta una periodización

de lo que ha ocurrido en el Pacífico desde 1940 hasta el nuevo milenio. En un primer momento se da una oleada modernizadora que impulsa nuevos proyectos extractivos e infraestructuras: la explotación masiva de recursos minerales y madereros en la que se involucran empresas extranjeras, mineras y agroindustriales, tales como Timbiquí Gold Company, la Telembí Gold Mines, la Potlach Forest Inc. y otras empresas nacionales que implementaron procesos de tecnificación y modernización en el sector (véase Figura 3).



Figura n.º 2.3. Perspectiva de la intervención en Buenaventura, 1940-2018

Fuente: elaboración propia con base en Defensoría del Pueblo (2016) y otras fuentes de prensa consultadas para esta investigación.

En ese afán de “desarrollar” el Pacífico con prácticas políticas autoritarias e imaginarios hegemónicos del desarrollo, esta vasta área pasó de ser un territorio olvidado y relativamente aislado a convertirse en un objeto de “expansión económica con proyectos de desarrollo a gran escala y nuevos medios de acumulación de capital, como las plantaciones de palma aceitera y los criaderos industriales de camarones” (Escobar, 2004, p. 49). Por supuesto, las organizaciones sociales han defendido su territorio y denuncian, constantemente, los impactos del modelo extractivo exportador, pero están a merced de la violencia de actores capitalistas, narcotraficantes y políticos convencionales, locales y foráneos, que se aprovechan de pobladores empobrecidos para manipularlos con sus propuestas.

En el siglo XXI, como plantea Swampa (2019), el extractivismo adquirió nuevas dimensiones, no solo objetivas —por la cantidad y la escala de los proyectos, los tipos de actividad, los actores involucrados (nacionales y transnacionales)—, sino subjetivas. Emergen grandes resistencias sociales que cuestionan el avance vertiginoso de la frontera de los *commodities* y elaboran otros lenguajes y narrativas frente al despojo en defensa de otros valores —la tierra, el territorio, los bienes comunes, la naturaleza (p. 12) —. En esta nueva fase, el neoextractivismo se muestra a través de sus figuras extremas: territorialidades criminales, violencia estatal y paraestatal y violencia patriarcal, como es visible en Buenaventura. Allí, esas inversiones estatales y privadas de las grandes corporaciones revitalizan los megaproyectos asociados a su vocación de puerto, los cuales chocan con los intereses de las comunidades y quebrantan los derechos adquiridos, producto de la titulación de tierras que impulsaron la Ley 70 de 1993 y la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

En la figura anterior se puede observar que la intervención planteada por estos actores en Buenaventura ha producido el espacio, desde su lectura del desarrollo, la cual se expresa en los nuevos mapas oficiales, catastros, tareas programáticas, nomenclaturas y tipos de propiedad formal de la tierra, de la costa, de los parques nacionales naturales, del territorio de resguardos y de los consejos de comunidades negras, etc. Una producción espacial que, como diría Lefebvre (2013), niega o minimiza las nuevas desigualdades y asimetrías económicas, sociales, ambientales, territoriales a pesar de la existencia de comunidades estables y estrechamente cohesionadas.

Esa construcción del territorio y sus márgenes convive con la apropiación que han hecho sus habitantes de él, partiendo de las simbolizaciones que provienen de su acervo de conocimientos. Así, el territorio y el ámbito de intervención a veces coinciden para unos, pero no para otros, lo cual genera contradicciones entre los agentes que intervienen y los sujetos de intervención. Sobre todo, porque los primeros siguen sosteniendo que los pobladores portan una subjetividad subdesarrollada, dotada de rasgos como la impotencia, la pasividad, la pobreza, la ignorancia y carecen de protagonismo (Escobar, 2007). Una percepción repetida en los medios de comunicación y académicos que no reconocen que esta población posee una cultura política, un legado cultural, unas prácticas diferenciadas. Simplemente, los tildan de “corruptos, perezosos, atenidos”, etc.

- a) En contraste con esa percepción negativa sobre la población, los empresarios y el Gobierno Nacional proyectan el puerto de Buenaventura

como uno de los más eficientes de la cuenca del Pacífico y se vinculan a acuerdos comerciales con los países del bloque Asia Pacífico. Para este fin se realizó la construcción del Puerto Agua Dulce y las vías que facilitan su acceso, el macroproyecto del Puerto Marítimo Delta del río Dagua y la construcción del TCBuen para la operación de instalaciones para albergar más contenedores. Todo esto bajo la premisa de que el Pacífico es el mar del siglo XXI. De acuerdo con sus gestores, estos proyectos garantizarían la conexión de los centros productivos del país con el puerto de Buenaventura; la libre y segura movilización de carga de mercancías nacionales e internacionales, dentro y desde el territorio colombiano hacia el exterior y viceversa, con mínimos tiempos de viaje y disminución de costos de operación, agilizando el tránsito de carga y las actividades comerciales estratégicas para el desarrollo económico del país. En resumen, estas obras buscaban el mejoramiento de los procesos productivos y de distribución de mercancías nacionales e internacionales.

- b) Al lado de esos macroproyectos económicos, se han adelantado varias obras de interés urbano. Sobresalen la construcción y remodelación de obras públicas (parques, canchas, vías, escuelas, colegios, bibliotecas, centros culturales y comunitarios, senderos peatonales, salas de informática, laboratorios, el terminal de transportes, hospitales y centros de salud y las centrales de abastos de los barrios, etc.) y la construcción de viviendas de interés social. Estas últimas muy polémicas porque se han diseñado para reubicar a las familias que viven en baja mar, generalmente, desplazadas por el conflicto armado y las múltiples violencias que han vivido sus pobladores y los que llegan desde distintas partes del Pacífico colombiano.

Algunos de estos proyectos se ejecutaron en el marco de lo dispuesto en el Plan de Inversiones Todos por el Pacífico (2011-2017) que incluía la ampliación de acueductos, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado, fortalecimiento de los prestadores de servicio en la implementación de las acciones necesarias para asegurar el acceso al agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, electrificación y esquemas de operación para la sostenibilidad de los servicios. Para ese propósito, se construyeron infraestructuras que optimizaban los recursos, por ejemplo, el tanque de almacenamiento de agua en Venecia y la planta de tratamiento del río Escalerete. En suma, las inversiones en este sector apuestan por la disminución de las brechas de acceso; la participación de las organizaciones comunitarias y el incremento de la gobernanza local.

- c) El plan Todos Somos Pacífico⁵ (2015-2018) pretendía la consolidación de la paz en la región, a través del cierre de las brechas sociales y la disminución significativa del desequilibrio interregional; la integración de las dinámicas económicas y el incremento sustancial de la competitividad territorial de manera incluyente. De acuerdo con lo formulado en este plan, se reconocen las inmensas necesidades de intervención territorial que requiere el Pacífico y, por ello, opera por fases y estrategias, consiguiendo financiación de crédito público externo para ejecutarse entre 2016 y 2021. Para el pago del servicio de la deuda, el Plan prevé cuatro años más. De esta manera, el Plan reconoce las debilidades y las potencialidades que pueden ser explotadas si se tienen cubiertas ciertas necesidades básicas que aseguren el cierre de brechas de la región.
- d) El último de los planes formulado para el puerto fue La Buenaventura que nos merecemos. Plan Maestro 2050 (Financiera para el Desarrollo Territorial, 2015). En él, las actuaciones propuestas son la transformación del sector del puente El Piñal, el malecón Bahía de la Cruz, el ordenamiento de áreas de desarrollo preferente; la creación de los nodos comunitarios locales; recuperar las márgenes del estero San Antonio, con la construcción del parque lineal de la ronda del estero; construcción de un intercambiador modal de transporte, construcción de la central de abastos; dragado del canal de acceso y zonas de maniobra y atraque en terminales existentes; regeneración del tejido urbano para mejorar la calidad de vida.

En estas planificaciones, a pesar de la consulta a los pobladores, sus organizaciones quedan relegadas de los planes que involucran su futuro y el de la biodiversidad del municipio y la región. Como se verá más adelante, estas omisiones han provocado una acción colectiva masiva y continua, dentro y fuera del país, que denuncia los negocios particulares detrás de estas intervenciones, el irrespeto a las tradiciones culturales de afrodescendientes e indígenas y el desconocimiento del derecho a la consulta previa cuando se realizan proyectos en su territorio. Ante esta violencia sistemática, los pobladores desencadenan repertorios de resistencia, pero en algunos casos

⁵ El objetivo de este ambicioso plan es contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del litoral pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la franja andina del Pacífico colombiano y al resto del país. Para superar las deficiencias en servicios básicos, el plan contempla inversiones en acueducto y saneamiento básico por USD \$251 millones; para electrificación USD \$91 millones y para conectividad del transporte, la Acuapista del Pacífico, USD \$40 millones.

ellos y sus líderes son víctimas de más violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

El reto de proteger la biodiversidad del Pacífico

A esa concepción del desarrollo económico, descrita en el punto anterior, las organizaciones afrodescendientes e indígenas se han opuesto para *proteger la biodiversidad* del Pacífico y reivindicar su derecho al territorio, convertirse en guardianas de las riquezas naturales y de los saberes ancestrales. Estas demandas son aprovechadas por las agencias internacionales para posicionarse en la defensa de los DD. HH. y en la denuncia por los efectos del cambio climático que se discuten globalmente. El Estado ha sido contundente en crear distintas instituciones y programas, de todos los niveles, responsables de la protección ambiental para responder a las presiones de estos actores étnicos, del movimiento ambientalista y de los organismos internacionales. Este aspecto es crucial en una nueva perspectiva de la intervención, pero deja a los pobladores en una encrucijada. Por una parte, los reconoce como propietarios de vastos territorios y, por otra, les exige oponerse a los actores armados (sin ninguna protección) y los obliga a aceptar las condiciones que imponen las empresas que extraen minerales y otros recursos naturales.

En esa situación de desigualdad en la que viven y por la escasa atención que proporciona el Estado para garantizar sus derechos, su alternativa es involucrarse en la minería ilegal y en la siembra de coca en el Parque Nacional Natural Los Farallones y, por esa vía, contaminar fuentes de agua, deforestar y modificar ecosistemas⁶. Como se pudo observar, algunas de estas intervenciones para la “protección ambiental” y el control territorial, en las que el Estado impone su poder obstinado e inexpugnable con acciones militares, se combinan con programas sociales. El Estado reclama la

⁶ En 2009, debido a las repercusiones ambientales (sedimentación de los ríos, contaminación del aire y tierra) y de seguridad que se produjeron por el desarrollo de la actividad minera, los Ministerios de Minas, Interior y Ambiente e Invias intervinieron en Buenaventura para capturar a los responsables y destruir retroexcavadoras, dragas y otra maquinaria. Como señalaron los informes de Fedesarrollo y Cerac (2013) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), la extracción ilegal de oro, manganeso y material de arrastre para la construcción se produce, principalmente, en los ríos Dagua, Calima, Agua Clara, Raposo y en los sectores de Bendiciones y Zaragoza. En estas acciones participa toda la Fuerza Pública (Policía Nacional, Armada, Ejército Nacional y Fuerza Aérea) y el CTI de la Fiscalía. Desde el nivel departamental, las acciones se coordinaron entre la CVC y la Gobernación del Valle, que declararon la emergencia ambiental en Zaragoza y cerraron más de 25 huecos que afectaban la estabilidad de la vía férrea (El País, 2012).

lealtad indivisa de sus ciudadanos, pasando por sobre cualquier interés⁷, pero no desarrolla grandes acciones para promover la protección de los ecosistemas, salvo la declaratoria de ampliación de parques nacionales naturales, la titulación colectiva de tierras de resguardos y de consejos comunitarios, que han sido demandas históricas de los afrocolombianos e indígenas y que están consignadas como derechos en la Constitución Política de Colombia.

Como en otros sectores, en el ambiental también hay modas y oleadas de temas y problemas o dimensiones que son privilegiadas por las instituciones y los agentes que intervienen, tal como se destaca en los siguientes ejemplos:

- a) En 2006, las Universidades Nacional de Colombia (sede Manizales) y del Pacífico, con la CVC, implementaron el sistema de planificación urbana participativa para el desarrollo sostenible en centros poblados.
- b) En 2014, la Alcaldía de Buenaventura emprendió el Estudio para la Conservación de los Recursos Naturales y Turísticos del Consejo Comunitario de Zacarías río Dagua.
- c) En 2016, Epsa, Celsia y Usaid ejecutaron un proyecto de energías renovables dirigido a la electrificación sostenible de la comunidad isleña de Punta de Soldado, con el objetivo de proporcionar ocho horas diarias de energía eléctrica.
- d) En 2016, se inició la campaña ecológica *Reciclando ando* que tenía como propósito la sensibilización y concientización en el manejo de residuos sólidos. Creó depósitos para envases de tipo PET, distribuidos en diferentes lugares de la ciudad. Este proyecto fue promovido por la fundación Agroesop y EPA.

Como se puede apreciar, estas intervenciones responden a situaciones para las que no están preparadas ni las instituciones, ni las infraestructuras del municipio. Por ejemplo, la acumulación de residuos sólidos en la ciudad y en los poblados por aumento de la afluencia de turistas. Estas problemáticas desbordan a las autoridades locales y ponen en riesgo a sus habitantes⁸.

⁷ Las incursiones de la Fuerza Pública en la zona, así como las capturas y el inicio de programas sociales fueron ampliamente reportados por los diarios *El Tiempo*, *El Espectador* y *El País*, durante 2015 y 2016. Por ejemplo, en los proyectos productivos para 50 familias que trabajaban en las minas, asentadas sobre la vía a Buenaventura, los recursos provenían de la Alcaldía y la Gobernación del Valle.

⁸ A finales de 2011 y comienzo de 2012, el basurero de Córdoba colapsó y la ciudad fue declarada en emergencia sanitaria (El País, 2011; 2013a; 2013b). Este botadero ha funcionado desde 1997, cuando se aprobó como lugar transitorio para la disposición de los residuos sólidos, 22 años

A partir de 2015, hubo un continuo debate público por las obras que impulsaba el Estado para construir el malecón Bahía de la Cruz y las bodegas de la sociedad portuaria, que implicaban reubicar a las familias asentadas en los barrios de bajamar. Para las autoridades locales y nacionales, los residentes de esa zona estaban ante un riesgo inminente y mostraban su preocupación por las consecuencias imprevisibles de un tsunami u otro fenómeno natural sobre la vida de las personas y sus propiedades. Por lo anterior, se dispusieron varias medidas perentorias y radicales para “defender” a los pobladores de ese riesgo. Estos contestaron con acciones colectivas continuas para rechazar esa escenificación de la amenaza. Su principal marco de significado fue la denuncia por el despojo al que serían sometidos. Para la mayoría de ellos, sería un nuevo desplazamiento porque ya habían sido expulsados de sus territorios en la llanura del Pacífico.

Esas percepciones del peligro que entraña la globalidad de la crisis ecológica están relacionadas con juicios de valor de funcionarios y empresarios para controlar normas sociales (Beck, 1998). En este caso, estaban relacionadas con la supuesta irregularidad de la apropiación que hacían los pobladores de la playa y que se reforzaba con el riesgo que entrañaba su presencia allí. En esa conflictividad socioambiental, el discurso de la población respondió a las autoridades con un lenguaje que valora su presencia allí. Ellos se refieren a los “territorios ganados al mar”⁹. Es decir, que al compás de las luchas se fue gestando un giro ecoterritorial. En ese sentido, las preocupaciones ambientales permiten establecer nuevas relaciones de poder y competitividad, unos conflictos y entrecruzamientos entre, por una parte, unidades y actores del mismo Estado nacional y, por otra parte, actores, identidades espacios, situaciones y procesos sociales transnacionales (Beck, 1998, p. 43).

después sigue en uso sin que se defina dónde se construirá el nuevo relleno sanitario. En 2013, se contempló trasladarlo a un lote del Bajo Calima, pero antes era necesario realizar la consulta previa a los pobladores y cumplir con las condiciones que exige la CVC. Por lo tanto, la administración decidió prologar la vida del botadero de Córdoba, sin solución a los problemas sanitarios.

Al inicio del nuevo milenio se iniciaron acciones colectivas de los pobladores de Anchicayá por la contaminación que produjo el vertimiento de residuos de la Central Hidroeléctrica al río Anchicayá. El litigio legal lleva casi dos décadas, en las que sus pobladores esperan reparación. Para ampliar en este caso, véase Caicedo, R. (2017). *El veneno del Gran verrugoso: estudio sobre las acciones colectivas en la cuenca del río Anchicayá: a propósito de la contaminación ambiental en el año 2001*. Cali: Tesis de Maestría en Sociología, Universidad del Valle.

⁹ Para conocer mejor este proceso véase Durán, J. (2017). *Resignificación de la acción de los pobladores de la isla Cascajal frente al proyecto Malecón Bahía de la Cruz de Buenaventura 2007-2015*. Cali: Tesis de Maestría en Sociología, Universidad del Valle.

El desafío del Estado para garantizar los derechos en medio del conflicto armado y la violencia social

Tal como lo plantea Bauman (2008), el Estado enfrenta en esta región “la pérdida cada vez más evidente —y quizás irrecuperable— de la posición privilegiada (e irrefutablemente superior) que ocupaba efectivamente, o cuya posición se arrogaba” (p.17). En el primer capítulo se describió la situación de los derechos humanos de los pobladores del Pacífico y de Buenaventura, por ello, aquí se hace referencia directamente a las acciones que ha emprendido el Estado para contrarrestar esa vulnerabilidad.

Durante el nuevo milenio, el Estado crea una respuesta institucional para garantizar los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de diferentes actores que han denunciado la victimización en el marco del conflicto armado y la violencia que se ha desencadenado contra las organizaciones y los líderes que la denuncian. En este aspecto, son fundamentales la legislación formulada por el Congreso de la República, las políticas públicas orientadas por el Departamento Nacional de Planeación y la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional. Sobresalen la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) que garantiza la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos violentos, entre otras disposiciones que pusieron a las víctimas en el centro de la atención estatal. Más adelante, se hace referencia al enfoque de paz territorial que surge del diálogo entre el Gobierno y las Farc en 2016.

Concomitante con la intervención del Estado, surge una institucionalidad alternativa promovida por la cooperación internacional, las agencias y las ONG nacionales e internacionales, dedicada sobre todo a la acción humanitaria de emergencia, así como a los procesos de fortalecimiento de identidades étnicas, de género, generacionales y territoriales. Un buen número de proyectos desarrollados en este periodo fortalecen capacidades comunitarias y organizativas, incrementan la participación ciudadana, el liderazgo, las acciones para la construcción de paz, la seguridad ciudadana y la equidad de género, etc. Los ejemplos más sobresalientes son:

- a) La formulación del Plan Integral de DD. HH. y DIH para las Comunidades de la Zona Rural y Urbana del Distrito de Buenaventura y el programa Acceso de la Población Étnica a Oportunidades Laborales, que tiene como objetivo incidir en la política pública de empleabilidad a nivel local para que se prevean los mecanismos efectivos que lleven a la inclusión económica de la población étnica.
- b) El proyecto realizado por Manos Visibles, que involucra a los líderes jóvenes de las organizaciones sociales para que contribuyan a la construcción de paz en las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad

y riesgo del país. Se enfoca en el desarrollo de competencias de liderazgo para solucionar problemas específicos de la región Pacífico, mediante la construcción de una agenda pública con la articulación de las instancias locales, departamentales y nacionales.

- c) Respecto al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y de sus líderes, el proyecto Hacia Allá Vamos se centra en brindar herramientas de liderazgo, organizacional y de incidencia pública. Este proyecto propone como herramienta el acompañamiento a las organizaciones de base comunitaria, a las que pertenecen los líderes, con el fin de impulsar la autogestión, la participación ciudadana y el desarrollo de sus comunidades.
- d) Gran parte de los proyectos de esta clase proponen la prevención de la violencia, la defensa de los DD. HH. y el DIH, la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de actitudes sociopolíticas, por ejemplo: el Proyecto Juventura, Protagonistas y Constructores de Desarrollo y Paz.
- e) Ciudadanos constructores de paz y de procesos de gobierno democrático que generen alternativas reales de política pública. Proyecto de la Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano, apoyadas por la FOS-Suecia y Noruega. Esta intervención tiene la particularidad de dirigirse a toda la población del municipio. Casi todas sus acciones se enmarcan en la Constitución Política de Colombia y parten de un análisis de contexto que tiene en cuenta la existencia del conflicto armado.
- f) Otro proyecto que propone implementar estrategias participativas para el desarrollo comunitario, la generación de confianza y la permanencia en los territorios priorizados es Zoom Territorial, desarrollado por la Sociedad Portuaria, el Consorcio para el Desarrollo Comunitario, el Plan Mundial de Alimentos (PMA) y la Fundación Ética Verde.

El Estado mantiene la inversión en programas de promoción y prevención de la salud (crecimiento y desarrollo, control prenatal, planificación familiar, entre otros); aporta recursos para el sostenimiento de IPS y los centros de salud rural; paga a las EPS por la atención de los afiliados al régimen subsidiado de salud e invierte en el saneamiento básico. Esta intervención continua y constante permite reconocer la ampliación de la cobertura, que se nota en el número de afiliados al Sisben atendidos mediante el régimen subsidiado, lo que no necesariamente se traduce en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, el cual es cuestionado de manera recurrente. En el caso de Buenaventura, la crisis nacional del sector salud provocó la

liquidación del Hospital Departamental, a finales del año 2013 y, por ello, algunos servicios que prestaba fueron atendidos por el Hospital Luis Ablanque de la Plata, que recibió una donación de equipos biomédicos por parte de los alcaldes menores de las localidades Isla-Cascajal y Continente-Pailón para atender los servicios de mediana y alta complejidad.

- g) Entre los proyectos rescatables dirigidos a este sector se encuentra el proyecto barco San Raffaele, prestador de servicios de salud a 16 municipios de la costa Pacífica colombiana. El barco fue organizado y operado por la Asociación Italiana para la Solidaridad entre los Pueblos (AISPO), que partió de una iniciativa del caleño Diego Posso y del apoyo del futbolista Iván Ramiro Córdoba. Su primera misión fue el 16 de junio del 2009 cuando atendió pacientes de Guapi, Timbiquí, López de Micay, en la costa caucana. Durante el tiempo de operación, AISPO, a través de la Fundación Monte Tabor, aportó 4.600 millones de pesos para la sostenibilidad del proyecto de atención a la salud para la población más vulnerable. En las visitas, el equipo médico formulaba tratamientos, realizaba cirugías de niveles I y II y practicaba ecografías a mujeres gestantes.

Al principio se había propuesto que este proyecto se incluyera en la Red Integrada de Salud y que fuera un nuevo modelo de salud del Pacífico. De ese modo, el sistema público y los operadores privados asumirían un plan que permitiera la sostenibilidad de las operaciones médicas del barco. Lamentablemente, esto no se concretó y la vinculación del barco San Raffaele se limitó a la prestación de servicios a algunas EPS, que no pagaron o tardaron en hacerlo. Por ende, las operaciones médicas del 2011 al 2013 fueron muy esporádicas. En el 2013, dejó de operar y permaneció anclado en el sector de La Palera, a pocos metros del puente El Piñal, en Buenaventura.

En 2015, el San Raffaele zarpa de nuevo, tras una inversión de 500 millones del Gobierno Nacional como parte del plan de intervención social de Buenaventura. Con estos recursos se atendió a mujeres gestantes y niños de 0 a 5 años de poblaciones rurales de Buenaventura, ribereñas de los ríos Cajambre, Yurumanguí y Raposo. En 2016, la embajada de Japón en Colombia financió la dotación de equipos médicos.

Este ejemplo constituye una de las alternativas para intervenir en un municipio tan extenso como Buenaventura, con población dispersa, difícil de atender en edificaciones o infraestructuras similares a las que funcionan en centros urbanos. No obstante, las autoridades locales y los funcionarios técnicos se ciñen a las convenciones para la atención en salud y no

exploran otras opciones. Como señala Jara (2009), los funcionarios públicos vivencian de forma diferente las condiciones del contexto. Mientras tanto, se incrementan los problemas de desnutrición, las enfermedades crónicas, las de transmisión por vectores, etc. y, por supuesto, los costos de operación de estos servicios se elevan y generalmente deben ser asumidos por las familias, que se ven abocadas a utilizar paliativos a las enfermedades o a iniciar largos caminos legales para garantizar sus derechos.

En educación, el Estado ha sido el principal agente de intervención. Tanto en el nivel de primaria, media y media vocacional ha invertido gran cantidad de recursos, pero estos no superan los problemas de cobertura y calidad requeridos para que los jóvenes del puerto puedan competir con los estudiantes del interior del país. En la oferta de tercer ciclo (educación superior), se destaca la presencia de la Universidad del Valle, que ofrece programas de pregrado y postgrado en diferentes áreas del conocimiento. Desde el año 2000, la Universidad del Pacífico ofrece siete carreras técnicas y profesionales. Estos dos centros reciben a la población más pobre del municipio, del área rural y urbana. Ambas tienen programas de bienestar universitario que facilitan la permanencia de los estudiantes. En la Universidad del Valle, unos estudiantes obtienen descuentos para el pago de matrícula, bajo la figura de estímulos académicos, otros obtienen subsidios de alimentación y vivienda. Estos universitarios también pueden acceder a las becas que ofrece la Sociedad Portuaria de Buenaventura y, en el caso de la Universidad del Pacífico, la Gobernación del Valle ofrece becas alimentarias que consisten en un almuerzo diario durante el semestre académico.

La academia y la empresa privada también se han aliado para diseñar currículos de formación que permitan mejorar las competencias laborales, técnicas y tecnológicas en gestión portuaria y logística, que respondan con mayor pertinencia a las necesidades de la región y del país en la competitividad y la expansión portuaria. De esto son ejemplo la Tecnología en Gestión Portuaria, la Tecnología en Logística Portuaria y la Tecnología en Mantenimiento Portuario que ofrece la Universidad del Valle y la Tecnología en Gestión Hotelera y Turística de la Universidad del Pacífico.

Igual que en los proyectos del sector salud, aquí no se ahonda en los proyectos financiados por el Estado en educación básica, media y superior pública, porque estas son obligaciones permanentes de la administración municipal, de la Gobernación del Valle del Cauca y de la Nación. Por lo tanto, se hace énfasis en inversiones/intervenciones diferentes a las habituales. Buena parte de los proyectos en este sector se orienta a la capacitación en oficios técnicos; a incentivar la formación docente para mejorar la calidad

de la educación media; a diseñar estrategias de internacionalización de la educación, a partir del desarrollo de lineamientos de política, planes institucionales y modelos de gestión y seguimiento, que buscan fortalecer las capacidades institucionales.

Unos pocos implementan programas en educación flexible para jóvenes que presenten dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. Otros ofrecen capacitación a agentes educativos que replican conocimientos con población infantil; en educación en línea para afianzar la formación básica y fortalecer la formación técnica orientada a la inserción laboral. Estas nuevas modalidades intentan ser coherentes con el enfoque de derechos, que se plasma en intervenciones inclusivas de la población con diversidades funcionales y excepcionales. Otra modalidad focaliza líderes jóvenes y les ofrece programas de formación/educación que los dotan a ellos y a sus organizaciones de capacidades para conseguir objetivos. Entre los cuales se cuenta la formación de jóvenes y adultos en competencias básicas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales y competencias ciudadanas, integrando de manera flexible las áreas de conocimiento. Estos proyectos educativos se relacionan con los que impulsa el sector productivo para fortalecer el emprendimiento, la empleabilidad, la producción agropecuaria y pesquera, que buscan desarrollar habilidades para que las personas puedan autosostenerse, y potenciar destrezas de los individuos para garantizar una mejor inserción en el mercado laboral. Desde la perspectiva de Corvalán (1996), estas intervenciones pretenden que el individuo sea agente de su vida.

- h) Son recurrentes los proyectos que hacen énfasis en mejorar las capacidades laborales o de generación de ingresos de los pobladores, teniendo en cuenta sus prácticas culturales. Entre estos sobresalen aquellos que impulsan la pesca tradicional y artesanal, con énfasis en el fortalecimiento de las cadenas productivas y apuntan a una actividad sostenible y estructurada con altos niveles de desarrollo basado en cuatro componentes: el social, ambiental, productivo y comercial. También se dirigen a optimizar la infraestructura, lo que incluye renovar embarcaciones y adecuar terminales pesqueros, como el de la zona de La Playita. En otros programas, se liga la capacitación técnica a la administrativa, como en el programa de Jóvenes Emprendedores. El proyecto de la Escuela Taller se orienta a mejorar las prácticas productivas, recuperando procesos culturales y oficios tradicionales, mejorando las condiciones de inserción laboral de los jóvenes y fortaleciendo su identidad cultural y la preservación de sus raíces, a la vez que generar ingresos para sus familias.

Como se constata en algunas de estas intervenciones, el Estado va cediendo sus funciones básicas a ONG y fundaciones, a las que entrega importantes recursos públicos; y se orienta a cooperar con agencias y organismos internacionales para atender la cuestión social.

La disputa por retomar el control estatal para construir las bases de la paz territorial

Los proyectos de seguridad no suelen presentarse como intervenciones sociales; sin embargo, en esta línea de base se incluyen por la importancia que ganaron las demandas ciudadanas al Gobierno Nacional para que aumentara el pie de fuerza y contrarrestara la acción de los actores armados irregulares (guerrillas, paramilitares y bandas criminales) que alteraban el orden público e imponían órdenes locales basados en la coerción. Estas acciones produjeron altas tasas de desplazamiento forzado desde el área rural dispersa hacia el centro urbano, desplazamiento interno (entre barrios) y externo (fuera de la ciudad, principalmente hacia Cali) que incrementaron la vulnerabilidad de los pobladores. Ya en el primer capítulo de este libro se presentaron datos sobre este asunto, por lo que aquí no se ahonda en ellos.

A la par que ocurría el desplazamiento forzado en el área rural, los jóvenes eran reclutados para el tráfico de drogas; algunos campesinos se vinculaban a la siembra de coca y otros más se integraron en los grandes contingentes de mineros que explotaban ilegalmente minas de oro. Es importante aclarar que, aunque buena parte de los pobladores se mantuvieron al margen de las actividades delictivas e ilegales, no se atrevieron a denunciar a sus responsables. En gran medida porque algunos integrantes de estos grupos armados son parte de sus redes familiares y porque ellos mismos fueron obligados a prestar colaboración a estos grupos, a facilitar el paso por sus territorios y a permitir que los constituyeran como corredores estratégicos para entrar y salir de la zona sin ser detectados por las autoridades (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, entrevistas y noticias de prensa).

Hasta 2010, la violencia armada era más cruenta en la zona rural, pero más adelante las estructuras paramilitares fueron trasladándose al sector de bajar y instalaron las denominadas “casas de pique”. Una proporción importante de los pobladores de esos barrios abandonaron sus viviendas intimidados por la presencia de bandas criminales que luchaban por el control territorial de las rutas del narcotráfico. Esta situación hizo que en 2011 se incrementaran los homicidios en los barrios Antonio Nariño, San Buenaventura, La Inmaculada, Juan XXII, Alfonso López, El Dorado e Independencia. Los hechos fueron ampliamente reportados en las noticias de prensa

(El País, 2011; El País, 2014), radio y televisión. Se destacan cinco tipos de intervenciones estatales:

- a) Teniendo en cuenta este contexto, la población empieza a demandar la intervención de la Fuerza Pública —Ejército, Armada y Policía—. El Ministerio de Defensa envió 2.400 policías y militares para que se encargaran de la vigilancia de Buenaventura, 700 llegaron como parte del refuerzo ordenado por el presidente Juan Manuel Santos, que incluía al menos diez vehículos de combate y unidades de las Fuerzas Especiales Urbanas del Comando General de las Fuerzas Militares (El País, 2014). Sin embargo, estas operaciones no lograron reducir las violaciones a los derechos humanos de los civiles.
- b) A esas acciones se sumó el fortalecimiento del Plan de Vigilancia por Cuadrantes, en la zona urbana, que aumentaba la operatividad de la Policía y su presencia en los barrios. Los recursos provenían, principalmente, de la Alcaldía municipal y una contribución importante de la Gobernación del Valle y del Ministerio del Interior. Otra acción en esta vía fue el Plan de Seguridad y Convivencia diseñado e implementado tanto para la zona rural como para la urbana, e incluía capacitaciones, talleres y actividades culturales “para garantizar el respeto y la sana convivencia”.
- c) Estos proyectos fueron más contundentes en coyunturas específicas. Por ejemplo, en 2014, las denuncias de las organizaciones sociales, del movimiento de negritudes y de la Conferencia Episcopal, a nivel nacional e internacional, reorientaron la acción estatal con miras a controlar el orden público, porque revelaban las inconsistencias en las cifras de muertes, desapariciones, desplazamiento forzado y amenazas a líderes sociales y violaciones a mujeres, que reportaban las autoridades. Esto condujo a la creación del Observatorio Social del Delito por parte de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

En este punto también es indispensable referirse a la intervención que realizan las comunidades sobre sí mismas para retomar el control de sus vidas, arrebatado por la violencia que imponen los actores armados. Estos proyectos contribuyen a la memoria del conflicto armado y a la búsqueda de la verdad.

- d) La experiencia de El corregimiento de Sabaletas se expuso en una serie de fotografías y dos libros que cuentan sus vivencias durante la incursión paramilitar que dejó alrededor de 58 muertos. Uno de los libros narra tres masacres y decenas de muertes selectivas. No se queda en la victimización sufrida, sino que muestra a sus habitantes manifestando con orgullo su identidad.

e) Otra experiencia destacada es el ejercicio de resistencia civil de los habitantes del barrio San Francisco. Una apuesta por la cultura de la no violencia para enfrentar sin armas a los actores armados que victimizaron a la población civil. Con esta iniciativa, puesta en marcha en 2014, la población cierra un sector y ubica una gran puerta de tablas como mecanismo de protección ante las violaciones a los derechos humanos, las amenazas y los hostigamientos. A este lugar lo denominaron Espacio Humanitario¹⁰; en ese momento convivían 302 familias, que correspondían a 1.028 personas. En la inauguración de esta iniciativa participaron Conpaz (Red de Comunidades Construyendo Paz en Colombia), la parroquia del Perpetuo Socorro y la Diócesis de Buenaventura, Witness For Peace, Peace Brigades International, Wola, Asokatio, un Mundubat, Christian Aid, Lepala, Hernani, Poder Ciudadano, Red de Alternativas, entre otros. La Comisión de Justicia y Paz ha mantenido un seguimiento constante del desarrollo de esta arriesgada apuesta. No obstante, el reconocimiento que tuvo esta iniciativa a nivel nacional e internacional, los recursos para financiar sus proyectos han tardado en llegar (véase entrevista con Castillo, en el siguiente capítulo).

Por supuesto, los recursos de la cooperación internacional han sido importantes para apoyar a las comunidades, pero aquellos atienden, sobretudo, la emergencia humanitaria. Su mayor contribución es visibilizar el problema en el exterior y ejercer presión para que el Estado garantice los derechos humanos y la protección de los habitantes del municipio. En buena medida, como se planteó en el análisis de la comunidad como actor, ella refuerza el uso estratégico de la etnicidad y reclama acciones afirmativas. En otras ocasiones, fortalece el discurso de la exclusión para mostrar la pobreza estructural producto de la acumulación capitalista de las multinacionales y del actor más visible en el puerto: la Sociedad Portuaria. También acepta su condición de víctima del conflicto armado y, por lo tanto, reclama el “paquete de medidas” que el Estado dirige a esta población. Tal como señalan Pool y Daas (2008), las comunidades han reconfigurado sus espacios para reflejar sus propios imperativos y sus formas de acción política utilizan la retórica global de los derechos humanos, pero contrario

¹⁰ Según Brigadas Internacionales de Paz “las Zonas Humanitarias” o “Espacios Humanitarios” (ZZ. HH.) son un modelo de autoprotección basado en la normatividad del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, en específico, en lo que se refiere al derecho a la vida, al principio de distinción entre civiles y combatientes y a la protección de la población civil en un marco de conflicto.

a lo que estas autoras plantean, las organizaciones colombianas cada vez reclaman más en las Cortes y tribunales internacionales.

El enfoque de *paz territorial* está muy ligado al nuevo escenario que se configura en Colombia durante y después de las negociaciones de paz en La Habana entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Su Plan de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país postula que la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada requiere una transformación institucional para superar las debilidades del Estado en zonas rurales y periféricas que vivieron de manera más cruenta el conflicto armado; así como las fallas en el conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública. Sobre todo, en los territorios donde el Estado tiene escasa capacidad de producir bienes y servicios o de satisfacer los derechos constitucionales de los colombianos. Con este diagnóstico, el Gobierno plantea fortalecer las capacidades del Estado desde un enfoque territorial que aproveche el momento de la construcción de la paz. Para ello, encargó a la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y al Fondo de Desarrollo para la Educación Superior (Fodesep) el diseño y ejecución del proyecto *Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su Institucionalidad para la Paz/ Gobernanza para la Paz*, cuyo propósito era fortalecer la institucionalidad de 400 municipios a través de capacitaciones y asistencia técnica en la gestión pública. El fortalecimiento institucional se concibió como la estrategia para el desarrollo y construcción de capacidades administrativas, sociales y políticas relacionadas con el restablecimiento de la legitimidad estatal y la reconstrucción del tejido social.

Varios analistas han planteado que las premisas sobre las que se construye esta idea totalizante de paz desconoce las instituciones comunitarias para la paz (ICPP)¹¹ que se gestan desde los territorios desde hace décadas. Es decir, esas formas de soberanía comunitaria para la infraestructura local para la paz en Colombia (Jaramillo, Castro y Ortiz, 2018). En Buenaventura,

¹¹ Las instituciones comunitarias para la paz (ICPP) son entendidas como “sistemas de normas, relaciones, prácticas que perduran en el tiempo. Ellas son generadas para satisfacer necesidades colectivas y estrechamente relacionadas con la búsqueda de soberanías comunitarias, ejercicios locales de democracia, regulación de tensiones, prevención de la recaída de los conflictos y reactivación de las violencias. Entre ellas se reconocen las escuelas rurales, las asociaciones de vecinos, los consejos comunitarios, las zonas de reserva campesina, las comunidades de paz, los espacios humanitarios, la justicia comunitaria y la conciliación en equidad, entre otras.

Estas ICPP se caracterizan por su cohesión, legitimidad, resiliencia y autonomía. A su vez, sus lógicas de acción se expresan en movilizaciones de defensa de la existencia, el trabajo en red, perspectiva territorial y cotidiana, apropiación de los conflictos y gestión transformadora de estos” (Jaramillo, Castro y Ortiz, 2018, p. 8).

convergen esas dos visiones de la paz: *la del gobierno y la de los procesos organizativos* basados en experiencias comunitarias, sobre todo como formas de resistencia frente a la violencia (Parrado, 2017) y de administrar el dolor colectivo. Por ello, el enfoque de paz territorial reconoce el origen del conflicto, los actores que se han constituido y, por lo tanto, impulsa acciones teniendo en cuenta las particularidades de la región y las discursividades de sus pobladores. Pero la implementación de estos proyectos se enfrenta a contradicciones y paradojas porque los pobladores se resisten a repositionar el puerto como escenario de desarrollo del gran capital. Discuten la imagen de ser el puerto más importante del país, que solo ha sido funcional para los intereses de la inversión nacional y extranjera, comprendido como economía de enclave. Sobre todo durante el paro de 2017, plantearon la necesidad de considerar otros ordenamientos sociales más acompañados con múltiples formas de imaginación de la vida social y política en los “márgenes”, y desde los cuales sus pobladores construyen su territorio y se posicionan como actores sociales.

La inclusión del enfoque étnico territorial en la intervención estatal, privada y del tercer sector

Después de varios años, las continuas denuncias de las organizaciones sociales y del movimiento de negritudes ante los tribunales nacionales y las instancias internacionales de justicia, incluidos los organismos multilaterales y las agencias de desarrollo, obligan al Estado colombiano a impulsar *proyectos con enfoque étnico-territorial*. Entre estas intervenciones se destacan aquellas que reconocen las identidades étnicas asociadas a la posesión de los territorios ancestrales, que a partir de la Ley 70 de 1993 se denominan consejos comunitarios. De ese modo, se impulsa una nueva teoría del cambio asociada a la defensa de esas identidades y del territorio que habitan, de su cultura y de la biodiversidad que garantiza la pervivencia de sus costumbres productivas, la etnoeducación y la salud, mediante la titulación colectiva de amplios predios. Estas acciones están muy ligadas a la victimización que han sufrido las poblaciones étnicamente diferenciadas. Estas acciones parten del diagnóstico de que la violencia ha afectado las dinámicas socio-comunitarias, debido al despojo de sus territorios, tanto por vías ilegales como legales, fruto del racismo institucionalizado y de la exclusión.

En las intervenciones con este enfoque, se refuerza el sentido de arraigo al territorio y la producción limpia que permitan a las familias campesinas recuperar su capacidad productiva. Se trabaja en lograr la empleabilidad, mejorando las capacidades técnicas y sociales de población vulnerable, y la inserción laboral formal en instituciones del Estado y en los proyectos de

la cooperación internacional y del sector privado. Para estos fines, algunas organizaciones trabajan en la implementación de granjas integrales en comunidades indígenas del distrito de Buenaventura y en el aprovechamiento agrícola para mejorar el abastecimiento comunitario, teniendo en cuenta que estos territorios son colectivos.

- a) Un ejemplo de este tipo es el programa Resa dirigido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es el retorno de las familias campesinas a sus parcelas y mejorar el autoconsumo de los alimentos que producen, desarrollar hábitos y estilos de vida saludables.
- b) Cuando se alude a la empleabilidad, los proyectos hacen énfasis en la población joven y tienen en cuenta la identidad étnica (afrodescendiente e indígena). Aquí es importante la inclusión, la promoción y el respeto de los derechos humanos y la equidad de género. Un ejemplo de este tipo es el programa *Acceso de la Población Étnica a Oportunidades Laborales*, de 2012, llevado a cabo a partir de alianzas entre la Alcaldía, ACDI/Voca y varias empresas que integran la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), además de la participación de las organizaciones sociales.

Como señalaron algunos participantes en los talleres realizados para esta investigación, el principal instrumento legal que utilizan las comunidades para demandar proyectos con este enfoque es la consulta previa. Mediante este mecanismo, han logrado concertar equipamientos sociales para sus territorios, constituir empresas comunitarias y, sobre todo, ser reconocidos como actores sociales ante las autoridades. No obstante, la ejecución de proyectos y recursos para mejorar condiciones sociales no logra incrementar su calidad de vida. En este municipio se mantiene un gran déficit respecto al resto del país dadas las disparidades y asimetrías acumuladas en el desarrollo de estas zonas. Es importante recordar que durante el periodo estudiado hubo múltiples discusiones legales y políticas que buscaban desmontar este mecanismo con el argumento de la corrupción que se ha producido en algunos liderazgos y el “bloqueo” de las comunidades al “desarrollo de los proyectos nacionales”.

El enfoque de género para reducir la violencia contra las mujeres y el enfoque generacional para evitar la vinculación de los jóvenes a la economía ilícita

Casi a la par con las disposiciones para atender a las víctimas, se propone el *enfoque de género y el generacional* que reconocen, principalmente, las desigualdades de atención que reciben las mujeres, las personas con

discapacidad y los jóvenes. Esta teoría del cambio es producto de acciones múltiples y continuadas del movimiento feminista y de mujeres, a nivel global y local. A las que el Estado responde dadas las obligaciones adquiridas en acuerdos, protocolos y pactos internacionales para reducir las brechas socioeconómicas, aumentar la participación de las mujeres en espacios de decisión y disminuir los efectos de las violencias basadas en género sobre sus cuerpos y sus vidas. En este enfoque vale la pena destacar la singular apropiación que han hecho las organizaciones étnicas del mismo y los reconocimientos que han obtenido en el empeño por diferenciar las estrategias que requieren. Respecto al logro de la igualdad de género:

- a) Algunos proyectos se proponen fortalecer el diálogo de las organizaciones de mujeres con los candidatos regionales y locales para la implementación de la agenda de paz en los territorios. Este, en particular, tuvo apoyo del FOS y la Corporación Viva la Ciudadanía. El diagnóstico de los ejecutores parte de la necesidad de ampliar la cultura política teniendo en cuenta los casos de corrupción política y administrativa, tanto en las instituciones públicas como privadas del municipio. Por ello, se orientan al cambio de las prácticas y las costumbres políticas. Aunque parte del estereotipo de que las mujeres son más honestas y, por ende, pueden ser mejores administradoras de lo público, lo importante es que pone en tela de juicio uno de los principales problemas del Buenaventura y, de ese modo, se involucra a las mujeres en la política para transformar las prácticas de corrupción, tan arraigadas en dirigentes que se han lucrado con los recursos públicos. En el capítulo IV se tratan estos casos con mayor profundidad.
- b) Uno de los proyectos comunitarios más interesantes lo adelantó la organización Mariposas de Alas Nuevas Forjando su Futuro que atiende a mujeres en calidad de vecinas, amigas y familiares afectadas por la violencia de pareja, la intrafamiliar, la sexual y otras violencias basadas en género, mediante una práctica cultural llamada *comadreo*. Consiste en escuchar, comprender, solidarizarse con la otra y ayudarla a superar el dolor, acompañarla en la denuncia y en la búsqueda de atención institucional. Por esta labor recibieron el Premio Nansen de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2014.
- c) Otros proyectos institucionales recurren a la cooperación internacional y a ONG globales (UARIV, Gobierno de Canadá y Fundación Plan) para fortalecer las capacidades organizativas en la construcción de una cultura de paz y en la reparación a las víctimas del conflicto armado desde una perspectiva de género y generacional.

Los proyectos dirigidos a los jóvenes tienen un claro sesgo de género; casi todos se orientan a los varones dado que esta población se etiqueta como problemática. De acuerdo con los objetivos de los programas y proyectos, buscan alejarlos de los grupos armados, del consumo de sustancias psicoactivas, de las organizaciones delictivas a las cuales claramente están más vinculados los varones. No es explícito que sean solo para estos, pero se refuerzan prácticas deportivas como el fútbol y las artes marciales como actividades para ocupar el tiempo libre.

- d) También se promueven actividades deportivas y de recreación que invitan a la reconciliación, a fortalecer el tejido social y la cultura ciudadana y, por supuesto, a ocupar productivamente el tiempo libre. Dos de los ejemplos emblemáticos de este tipo son el proyecto *Vení Jugá* (desarrollado por la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, en alianza con la Fundación Bonner y Osman), que consiste en mejorar la formación deportiva técnica en fútbol y el acompañamiento psicosocial. El segundo es el proyecto *Somos Golazo* (de la Fundación Carvajal y el Banco de Desarrollo de América Latina), que se propone evitar la vinculación de los jóvenes a grupos armados irregulares y a bandas criminales y reducir las muertes violentas en sus barrios. Estos proyectos utilizan en sus nombres términos que acercan a los jóvenes al lenguaje con el que se comunican entre pares.
- e) En este sector también se resalta la intervención de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social, Fundescodes, que integra y fortalece a la comunidad mediante el proyecto Territorio Pazcífico, Arte y Cultura (biblioteca comunitaria, semillero de teatro, memoria), por medio de intercambio de saberes, poesía, televisión cultural, cine foro, liderazgo infantil, talleres de fotografía para obtener otras miradas del territorio. A estas actividades se suman los talleres prácticos de *capoeira*.
- f) Aunque se debe indagar más en la implementación de los proyectos que incorporan elementos culturales de otras naciones y grupos étnicos, algunos indicios nos permiten señalar que las embajadas impulsan actividades para extender su cultura. Por ello, las prácticas deportivas de artes marciales y *capoeira* están relacionadas con las intervenciones que hace Japón y Brasil. Con esa misma orientación, otros proyectos se enfocan en canalizar la violencia, la agresión y el resentimiento que produce la exclusión de estos jóvenes. Lo hacen mediante prácticas deportivas, apostando por la formación en disciplinas altamente competitivas, por ejemplo, el desarrollo de habilidades en artes marciales financiado por la Fundación Carvajal, la Policía Nacional y la Embajada de Corea del Sur.

El impulso a las industrias culturales y el turismo ecológico

Por último, *el enfoque de industrias culturales y turismo ecológico* se presenta como alternativa para la generación de ingresos aprovechando los recursos locales geográficos y sociales y culturales. Con respecto a la cultura, los actores hacen énfasis en identificar la creatividad, los intercambios de aprendizaje, el uso de herramientas culturales que incentiven la apropiación de recursos locales y saberes tradicionales. El propósito de estos proyectos es fortalecer el desarrollo humano y la transformación de los imaginarios asociados con la pobreza. Varios buscan mantener la cohesión comunitaria, la innovación social a través de la transformación de entornos (espacios físicos) y realidades (percepciones y representaciones sociales). En este sentido, hay un impulso al desarrollo de habilidades artísticas (música, pintura) y a la construcción y mantenimiento de instrumentos musicales. También se promueven proyectos de producción audiovisual que buscan la recuperación de la memoria de la ciudad, el reconocimiento de problemáticas sociales, el realce de personajes locales y, sobre todo, animar los procesos de resistencia social.

Otros privilegian el fortalecimiento del tejido social comunitario en los barrios y sectores de la ciudad y, por ello, destinan recursos para intervenciones artísticas en el espacio (pintura de fachadas de casas, de organizaciones y edificios emblemáticos). Estos se acompañan con el diseño de una agenda cultural que involucra actividades reivindicativas de las tradiciones afrodescendientes para integrar a la población. Los pobladores participan en la definición de los eventos.

- a) Se destacan aquellos que promocionan y visibilizan la cultura porteña y del Pacífico para elevar la autoestima de los afrocolombianos y fomentar el empoderamiento de la comunidad. Este es el caso de la plataforma virtual *Ola Ventura* y la construcción de un centro cultural que financió el Banco de la República con el propósito de fomentar el conocimiento, la investigación, la apropiación de las prácticas culturales del Pacífico colombiano (música, tradición oral, bailes típicos, sonidos, instrumentos autóctonos y medicina tradicional).
- b) Al reforzar prácticas culturales, estos proyectos también evitan la vinculación de jóvenes a los grupos armados, a las actividades delictivas y al consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, las estrategias planteadas para conseguir este propósito se diferencian de acuerdo con el actor que interviene. Por ejemplo, las comunidades refuerzan las manifestaciones asociadas al folclore, la conformación de grupos musicales, de danzas, etc. El tercer sector promueve las actividades generadoras de ingresos. El Estado, como diría Foucault (2007), trata

de influir sobre cosas, aparentemente alejadas de la población, utilizando el cálculo, el análisis, la reflexión que hacen sus instituciones (por ejemplo, los Ministerios de Cultura y Comercio y Turismo) para actuar en concreto sobre ella. De ese modo, trabaja en la formalización de las organizaciones y en garantizar el acceso a recursos mediante la venta de productos culturales, instrumentos, vestidos, accesorios, bebidas y platos típicos, entre otros. El impulso a las artesanías ocupa un lugar importante en estas intervenciones. Los proyectos están orientados a mejorar las condiciones de vida mediante la promoción de actividades económicamente rentables, con posibilidades de posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Hacen énfasis en la capacitación técnica, la organización y la gestión empresarial, la asesoría en el diseño, la diversificación de los productos y los espacios de comercialización.

- c) Los proyectos del sector productivo desarrollan sus objetivos mediante dotación de herramientas, capacitaciones, talleres, formación técnica, vocacional, sensibilización social, intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades socioempresariales para la actividad pesquera o agropecuaria, con el objetivo de aumentar los niveles de producción, fortalecer habilidades o empoderamiento de agentes. Los proyectos en este sector se proponen garantizar la conservación de los recursos naturales y desarrollar actividades económicas amigables con el ambiente. En ese sentido, ejecutan propuestas de mejores prácticas y la consolidación de una cadena productiva pesquera y acuícola de la región Pacífica colombiana. Otras intervenciones le apuestan al ecoturismo sostenible como fuente de ingresos para las comunidades de San Cipriano, Zacarías, La Barra, promoviendo la conservación de sus recursos naturales. Algunas de ellas se enmarcan en los planes de desarrollo de los consejos comunitarios. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de San Cipriano se formuló el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano.
- d) Desde el sector productivo hay una apuesta por el etnodesarrollo, como es el caso del turismo comunitario promovido por los habitantes de los consejos comunitarios de La Barra¹² y de Málaga. Ellos se han propuesto aprovechar los atractivos de su ubicación (entre la selva y el mar) para fortalecer el turismo como una actividad económica generadora de ingresos. La Barra ha recibido apoyo de Swissaid

¹² Esta localidad fue el escenario de la película *El vuelco del cangrejo*, financiada con recursos públicos y dirigida por profesores de la Universidad del Valle.

(Fundación Suiza de Cooperación y Desarrollo) para mejorar las condiciones locativas de las cabañas que se ofrecen a los turistas. También recibieron aportes del Departamento de la Prosperidad Social y del DNP a través del programa Iraca.

- e) La experiencia de la asociación comunitaria Ecomanglar del Consejo Comunitario Bahía Málaga está mejor desarrollada que la anterior. Cuenta con página web en la que ofrece los servicios ecoturísticos. Desde allí señala que se promueve el bienestar colectivo de la comunidad negra, manteniendo las prácticas tradicionales y el manejo sostenible de los recursos. El ecoetnoturismo que brindan le da la oportunidad a quien llega a su territorio de vivenciar las prácticas tradicionales y disfrutar de los recursos naturales que lo rodean. Ellos han aprovechado su ubicación estratégica dentro de tres áreas protegidas denominadas Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, Parque Natural Regional La Sierpe y Distrito de Manejo Integrado La Plata. Además, Ecomanglar trabaja con el consejo comunitario y las entidades de conservación nacionales, regionales y locales. Ha contado con el apoyo de la Universidad de los Andes, Conservación Internacional PPD-GRF Colombia, WWF Colombia, el Hiperlab de la Universidad del Valle y de otras universidades públicas y privadas que realizan prácticas estudiantiles con sus pobladores.

REFLEXIONES FINALES

Los actores en situaciones como las que se han descrito en este capítulo tienen intereses ostensiblemente incompatibles y sus propuestas para resolver los problemas difieren de las expectativas de sus pobladores. A esto se suma que Buenaventura todavía tiene un vasto territorio fuera de la jurisdicción de los poderes existentes, que sigue siendo “tierra de nadie”. Como se pudo observar, todos los enfoques de intervención social con los que se pretende cambiar al puerto, la ciudad, el distrito o a la población han pasado por procesos de ensayo y error que evidencian los recursos que están en juego.

Para nadie es un secreto que Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico, posee importantes yacimientos de oro y otros minerales, cuenta con abundantes recursos hídricos y de flora y fauna y tiene un alto potencial turístico en la vasta zona de llanura y de costa, pero no ha logrado formar suficientes líderes que se alejen de las prácticas de corrupción que,

históricamente, han dilapidado los recursos públicos y de la cooperación internacional. Durante el periodo analizado, más de 5 alcaldes y otros funcionarios públicos fueron investigados y condenados por corrupción y múltiples obras quedaron inconclusas. Esa acumulación de cuestiones desatendidas provocó uno de los paros más prolongados de los habitantes del puerto, en 2017. Esta acción colectiva logró aglutinar a más de 100 organizaciones sociales, que contaron con el apoyo de la Iglesia católica, de profesionales de las dos universidades públicas con presencia en el municipio (del Valle y del Pacífico) y un buen número organizaciones solidarias del departamento y el país, que contribuyeron a visibilizar la agenda de negociación.

Uno de los puntos de discusión más álgidos estuvo en solicitar al Gobierno Nacional garantía, accesibilidad, integridad, suficiencia y calidad de la atención en salud en los servicios de baja, media y alta complejidad, con énfasis en la red pública de Buenaventura¹³. Los resultados de esa negociación fue un Pacto por Buenaventura, en el cual el Gobierno Nacional se comprometió a crear un fondo patrimonial especial para atender los problemas más graves de esta población, con 1,5 billones de dólares. Sus líderes siguen insistiendo en planificar un desarrollo que integre su cultura, que proteja la biodiversidad y que redistribuya mejor la riqueza que genera la actividad portuaria para disminuir las brechas de desigualdad social y económica que no permiten mejorar sus condiciones de vida.

En síntesis, las teorías del cambio implícitas en la intervención ejecutada en Buenaventura han intentado *integrar el puerto al proyecto de nación*, pero como se señaló atrás, los cambios propuestos están influenciados por las exigencias del contexto y por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Estado colombiano con organismos y alianzas internacionales. Es decir, que las ideas de cambio no son independientes y, por el contrario, están atadas al logro de las metas acordadas por el Estado en pactos internacionales en materia de desarrollo social y económico. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT (1989) para la protección de los pueblos indígenas y tribales; la Ley 70 de 1993 de titulación de tierras para comunidades negras; la Conferencia Mundial contra el Racismo (2001); los Objetivos de Desarrollo del Milenio para superar la pobreza extrema y el hambre (2005);

¹³ Uno de los acuerdos del Paro Cívico contempla la construcción de la ciudadela hospitalaria. Las presiones de los habitantes lograron que el Hospital Distrital de Buenaventura reactivara el servicio de mediana complejidad, para lo cual se invirtieron \$30.000 millones orientados al funcionamiento. Este hospital planea beneficiar a 400.000 mil habitantes de Buenaventura y de los departamentos aledaños como Nariño, Cauca y Chocó, tal como anunció la Gobernadora del Valle del Cauca.

el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global (2005); la Alianza del Pacífico para la integración regional (México, Perú, Chile, Colombia) (2011); y la preparación del país para su inclusión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2012-2017), entre otros.

Por otra parte, los líderes entrevistados y los participantes en los tres talleres realizados para esta investigación recalcan que las intervenciones en Buenaventura han seguido modelos foráneos que desconocen las particularidades culturales de su población, no actúan sobre las causas estructurales de los problemas y adoptan soluciones tipo, sin adaptarlas a las condiciones locales. Por ello, las organizaciones sociales de primer y segundo nivel han jugado un papel muy importante en la denuncia de graves casos de corrupción; en la exigencia de servicios públicos de calidad; en ponerle rostro a las víctimas; en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes; en solicitar la garantía de los derechos humanos y en la protección de sus líderes; en fortalecer su ciudadanía; en exigir que se reconozcan los aportes culturales de los indígenas y afrodescendientes; en que se asegure la propiedad colectiva de la tierra y que en el nuevo contexto del postacuerdo se atiendan las demandas de las víctimas y todo lo pactado con los líderes del paro en 2017.

Todo este contexto se puede observar en la Figura n.º 2.4.



Figura n.º 2.4. Intervención social en Buenaventura en un contexto de conflicto social y armado

Fuente: elaboración propia.

Se destacan las intervenciones sociales después de iniciar las inversiones portuarias; las acciones militares paralelas a la intromisión de los actores armados irregulares y los hechos de violencia extrema en la ciudad y contra los líderes sociales, que generan organización social, protestas y alianzas para denunciar, a la par que se producen las capturas de alcaldes y funcionarios públicos corruptos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acción Social. (2008). *La Cooperación internacional y su régimen jurídico en Colombia*. Bogotá: Acción Social. https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/lacooperacioninternacionalsuregimenjuridicoencolombia.pdf
- Akindele, T., Afolabi, A., Pitan, O. y Gidado, O. (2016). The Threads of Organizational Theory: A Phenomenological Analysis. *Management*, 6(5), 158-184. doi:10.5923/j.mm.20160605.03
- Bauman, Z. (2008). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Barcelona: Gedisa.
- Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo y respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós.
- Cancillería de la República de Colombia. (2015). *Hoja de ruta para la cooperación en Colombia 2015-2018*. Bogotá: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. <http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/hojaderutadelacooperacioninternacional.pdf>
- Castillo, L. (2016). *Organizaciones sociales afrocolombianas. Una aproximación sociológica*. Cali: Universidad del Valle.
- Centro de Pensamiento Estratégico Internacional. (2010). *Evaluación conjunta de la Declaración de París, fase 2*. Bogotá: Cepei. <https://www.oecd.org/countries/colombia/47544228.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). *Buenaventura: un puerto sin comunidad*. Bogotá: CNMH.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2012). *Los países de renta media. Un nuevo enfoque basado en brechas estructurales*. Santiago de Chile: Cepal.
- Corvalán, J. (1996). *Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad*. Santiago: Cide.

- Defensoría del Pueblo. (2016). *Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana*. Bogotá: Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf>
- El País. (05 de diciembre de 2011). Buenaventura está en crisis de recolección de basuras. *El País*, pág. s/p.
- El País. (31 de octubre de 2012). Por resurgimiento de minería ilegal, CVC declara emergencia ambiental en Zaragoza. *El País*, pág. s/p.
- El País. (2014). Corrupción en Buenaventura. *El País*. <https://www.elpais.com.co/especiales/corruccion-en-buenaventura/>
- Escobar, A. (2004). Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano. En E. Restrepo y A. Rojas (Edits.), *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia* (págs. 53-72). Cali: Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: El Perro y la Rana.
- Fedesarrollo y Cerac. (2013). *Hacia un desarrollo integral de la ciudad de Buenaventura y su area de influencia*. Bogotá: Fedesarrollo - Cerac.
- Financiera para el Desarrollo Territorial. (2015). *La Buenaventura que nos merecemos. Plan Maestro 2050*. Colombia: Findeter - Fundación Esteyco.
- Flórez, J. A. y Millán, D. C. (2007). *Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano*. Colombia: Diócesis de Tumaco.
- Foucault, M. (2007). *Seguridad, territorio, población*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Cinep/PPP, Odecofi.
- Guzmán, A. (2018). *Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI*. Cali: Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente.
- Jara, O. (2009). La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento latinoamericano. Una aproximación histórica. *Diálogo de saberes* (3), 118-129. <http://www.planificacionparticipativa.upv.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/La-sistematizacion-de-experiencias-y-las-corrientes-innovadoras-del-pensamiento-latinoamericano-una-aproximacion-historica.pdf>
- Jaramillo, J., Castro, F. y Ortiz, D. (2018). *Instituciones comunitarias para la paz en Colombia. Esbozos teóricos, experiencias locales y desafíos sociales*. Bogotá: Universidad Nacional del Colombia.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitan Swing Libros.
- Montaño, C. (2005). *Tercer sector y cuestión social, crítica al patrón emergente de intervención social*. Sao Paulo: Cortez Editora.

- Otalora, L. y Rouvinski, V. (2013). Cooperación internacional para el desarrollo en el Valle del Cauca: un estudio de percepciones. *Estudios Gerenciales*, 29(126), 17-25. doi:doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70016-0
- Parrado, E. (2017). Buenaventura como escenario para el posacuerdo. *Cien días vistos por Cinep* (90), 33-36.
- Poole, D. y Das, V. (2008). El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. *Cuadernos de Antropología Social* (27), 19-52.
- Retzala, I. (2017). *Teoría del cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social*. Guatemala: PNUD-Hivos. https://xarxanet.org/sites/default/files/pnud-hivos-guia_teoria_de_cambio.pdf
- Rogers, P. (2014). *La teoría del cambio. Síntesis metodológicas: evaluación de impacto n.º 2*. Florencia: Centro de Investigaciones Unicef. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%20%20Theory%20of%20Change_ES.pdf
- Sottoli, S. (2002). La política social en América Latina: diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas. *Papeles de Población*, 8(34), 43-63.
- Swampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Alemania: Universidad de Guadalajara y Calas.
- Sztompka, P. (1995). *Sociología del cambio social*. Madrid: Alianza.
- Tassara, C. (2012). Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo: políticas, actores y paradigmas. En J. Agudelo, *Debates sobre cooperación internacional para el desarrollo* (págs. 15-81). Bogotá: Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo.

**EXPERIENCIAS, APRENDIZAJES,
REDES Y ESTRATEGIAS CULTURALES DE
LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN BUENAVENTURA**

Freddy Alfonso Guerrero Rodríguez¹

María Eugenia Ibarra Melo²

Adriana Espinosa Bonilla³

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta una sistematización de experiencias de organizaciones, instituciones y asociaciones comunitarias en procesos de gestión social, paz y desarrollo, enfatizando en buenas prácticas y experiencias exitosas durante el período 2000-2017. Metodológicamente, se hicieron entrevistas, talleres y búsqueda de información documental para recopilar y analizar algunos casos de intervención tanto de actores comunitarios como institucionales de la región Pacífico y, particularmente, del distrito de Buenaventura.

En diciembre de 2017, se culminó la primera fase de recolección de información. Se realizaron siete entrevistas a nueve líderes de siete

¹ Profesor, Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad (Bitacus), Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia.

² Profesora, Grupo Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso, Universidad del Valle, Cali - Colombia.

³ Mientras trabajó en esta investigación se desempeñaba como profesora de la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia. Hoy es investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

organizaciones y/o proyectos de intervención comunitaria en el distrito de Buenaventura. En las entrevistas se indagó por las características de las organizaciones, su trayectoria, estructura, logros y dificultades, entre otros aspectos. Es decir, por criterios que permitieran definir si las organizaciones tenían buenas prácticas y podían ser consideradas experiencias exitosas de intervención. El material de las entrevistas se procesó con el *software* Atlas ti para organizar por categorías del marco conceptual y por categorías emergentes las experiencias relatadas; se generó una codificación de los aspectos de interés y se graficaron las relaciones identificadas en mapas de red, tanto para cada organización como para su síntesis y comprensión en un mapa de red total; estos mapas de actores se apoyan en la descripción e interpretación inicial de las características de las redes configuradas en Buenaventura.

En la segunda fase de 2018, se realizaron otras entrevistas a actores institucionales en talleres junto con actores comunitarios y se recogió información respecto de sus procesos internos y las acciones de intervención en Buenaventura. En particular, para este capítulo se retoman los resultados del taller de formación sobre sistematización de experiencias con algunas organizaciones locales y las reflexiones en torno a la experiencia del Paro Cívico de 2017, *Buenaventura para vivir con dignidad y en paz con el territorio*. Este taller se realizó durante los días 15 y 16 de junio de 2018 y brindó elementos claves para la comprensión de esta acción colectiva y de la forma como estos actores sociales aprovecharon la estructura de oportunidades políticas para capitalizar sus alianzas, el acceso a los medios de comunicación y a las autoridades de diferentes niveles. A continuación, se presenta un análisis de las experiencias seleccionadas a partir de las entrevistas realizadas a varios de sus líderes. Más adelante, este análisis se complementa con los aportes de los participantes en el taller.

EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Para esta investigación seleccionamos siete experiencias: la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (en adelante Fundescodes), el Espacio Humanitario Puente Nayero, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (en adelante Anmucic), la Pastoral Social, la Fundación Rostros Urbanos, el Consejo Comunitario de La Barra y la Fundación Ecomanglar. Primero se aportan datos generales de estas y más adelante se proporciona un mapa de actores que muestra las relaciones que han ido constituyendo en su trayectoria.

- a) **Fundescodes** desarrolla su actividad desde la parroquia del barrio Lleras, localidad uno del puerto de Buenaventura y dinamiza acciones en la zona de bajamar. Sus principales beneficiarios son los jóvenes y mujeres víctimas de la violencia generada por el conflicto armado o en riesgo de serlo. Su trabajo, de cerca de 15 años, ha estado asociado con las actividades religiosas de la parroquia del barrio Lleras, lo que ha garantizado su permanencia en el sector y la aceptación de la comunidad. En su página web <https://fundescodes.org>, se señala que es una organización de base, que trabaja por el bienestar de la población de Buenaventura y que desarrolla un trabajo de acompañamiento a los procesos de memoria de las víctimas. Por ello, uno de sus principales programas es la *Capilla de la memoria*, además de acompañar solidariamente a víctimas del puerto, como a las madres de los doce jóvenes asesinados en Punta del Este, un deprimido barrio de Buenaventura. Mediante diferentes actos, la organización contribuye a la reparación simbólica de las víctimas y apoya a las madres en la generación de economías solidarias, es entonces un espacio para la integración y ocupación del tiempo libre, el aprendizaje de saberes y el apoyo a sus realidades económicas. Cuenta con un taller de modistería y un mecanismo de producción de alimentos para eventos sociales.

Fundescodes también adelanta procesos de formación en derechos humanos y territorio, tiene un semillero de teatro, una biblioteca y acompaña los procesos de los consejos comunitarios de los ríos Raposo y Mayorquín. Realiza un trabajo de fortalecimiento comunitario para garantizar espacios protectores para los niños, niñas y jóvenes. Cuenta con el grupo de comunicación alternativa por la defensa del territorio de palafitos, que fortalece iniciativas comunitarias a través de la producción audiovisual en su estudio de grabación. Para esta organización es importante la producción continua de cortos audiovisuales que alimentan un repositorio de sus intervenciones; produce el periódico *Transmallo. Donde las noticias te atrapan*; realiza concursos de poesía y actividades lúdicas como el torneo de fútbol *Sácale tarjeta roja al despojo, nos la jugamos por el territorio*, entre otras acciones de sensibilización y visibilidad de las realidades sociales con la perspectiva de los habitantes del sector.

- b) **El Espacio Humanitario Puente Nayero** es un esfuerzo agenciado por un grupo de líderes junto con la parroquia del sector de Puente Nayero. Está ubicado en la localidad uno del distrito de Buenaventura. Esta experiencia surge como una acción organizativa comunitaria que adquiere un sentido de resistencia activa frente a la violencia de

los actores armados y al control territorial que ejercían en ese sector. Frente a esta amenaza, la comunidad recuperó el control de su territorio, impidiéndoles el acceso con una gran movilización el 13 de abril de 2014 a la que se ha ido sumando el apoyo de más habitantes del barrio y de múltiples organizaciones locales y externas al puerto.

Esta movilización se hizo coincidir con la conmemoración de la masacre del Naya, ocurrida en el año 2001, y como respuesta a las condiciones de violencia presentes en el sector de Puente Nayero en Buenaventura. Consistió en cerrar un sector del barrio San Francisco (específicamente el sector conocido como Puente Nayero) por medio de una reja. Contaron con el apoyo de la Fuerza Pública para el control de acceso de personas extrañas a la comunidad. Esto, sumado a la alerta activa de la comunidad y al apoyo de ONG internacionales y nacionales, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ha mantenido a los miembros de la comunidad y sus líderes relativamente seguros frente a la violencia directa de los actores armados. Otro factor importante fueron las medidas cautelares que a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron varios de sus líderes, como Orlando Castillo y William Mina, precisamente a través de las redes que han fortalecido su proceso organizativo y comunitario.

- c) **Anmucic** es una iniciativa organizativa de orden nacional creada en 1986 desde el Ministerio de Agricultura; se podría decir que es un proceso de empoderamiento desde la perspectiva de género de arriba hacia abajo y que con los años ha venido ganando autonomía desde las bases regionales. En Buenaventura, esta organización está conformada, principalmente, por mujeres campesinas del área rural del Consejo Comunitario del Bajo Calima. Sin embargo, en los últimos años se vincularon con otros grupos del área urbana, como la iniciativa Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, para enfrentar la violencia contra las mujeres, tanto en el marco del conflicto armado, como en la vida cotidiana. Su principal estrategia es el *comadreo*, una práctica cultural de relación entre comadres que reconoce el valor de la palabra y se constituye en un pacto para cuidarse y multiplicar lo aprendido. Desde esta plataforma han adelantado varias acciones colectivas para exigir la intervención del Estado y la sociedad para frenar las violencias basadas en género. Esta experiencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, como mostraremos más adelante.

Su presidenta Gloria Arboleda enuncia así los objetivos más amplios de la organización:

[...] preservar, ser conservadores de tradición cultural, semilla, tradición gastronómica, etnobotánica, lo que tenga que ver con nuestros acervos religiosos. Como todo lo cultural. Además de eso la defensa de los derechos de la mujer rural, la participación, la sustentación, hacer uso de los distintos espacios para poner nuestras voces. Pero además de eso es que nuestra organización sirva como el espacio educativo y lúdica para que nuestras vidas se hagan más placenteras (E1: 3).

- d) **La Pastoral Social** es una entidad apoyada por la Diócesis de Buenaventura y orienta su actuar y su trabajo por el evangelio y la doctrina social de la Iglesia católica. Desde 2009, apoya, principalmente, a la población víctima del conflicto armado a través de la ayuda humanitaria, la capacitación y el acompañamiento de sus procesos. Monseñor Héctor Epalza y los sacerdotes Jhon Reina y Manuel González han jugado el rol de aglutinadores en la denuncia de la violencia que se presenta en el Puerto, a la vez que acompañan a los ciudadanos en el reclamo por la protección de los DD. HH. y promueven actos simbólicos y de visibilización de talentos juveniles.
- e) **La Asociación Cultural Rostros Urbanos** es una organización de jóvenes que utiliza el arte como estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de la vinculación a los grupos armados ilegales. Su objetivo, de acuerdo con Leonard Rentería, uno de sus líderes, es “fortalecer y cultivar los valores y enriquecer las actividades comunicativas de artistas que están dentro de la organización [...] hacer ese trabajo de articulación con otros sectores estratégicos en el tema de conflicto y todas estas falencias o debilidades sociales que hay en la ciudad y particularmente en los jóvenes” (E2: 1).
- La organización ha implementado una línea de comunicación para difundir sus acciones e indagar en las dinámicas de la ciudad para contrarrestar sus efectos. Otra línea de acción es formación y desarrollo humano, que fortalece los escenarios de preparación artística y política de los jóvenes. También les proporciona acompañamiento en la elaboración de sus proyectos de vida y orientación vocacional y ocupacional.
- f) **El Consejo Comunitario de La Barra** está ubicado en Bahía Málaga, muy cerca de Juanchaco y Ladrilleros, principales centros turísticos de Buenaventura. La Barra es una localidad de 512 habitantes cuyas actividades centrales son la pesca y el ecoturismo. El Consejo Comunitario se creó en el año 2000 y el título colectivo se otorgó recién en 2015, después de múltiples obstáculos institucionales. Para defender su territorio, la comunidad formuló el Plan de Etnodesarrollo (2014-2017) y está trabajando arduamente en su implementación.

El Plan orienta el desarrollo comunitario y la gestión de la junta del Consejo y recoge los saberes de todas las personas que habitan el territorio: agricultores, personas dedicadas a los servicios turísticos, pescadores, piangüeras, cazadores, madereros, artesanas, ecologistas, docentes y estudiantes. “El plan contiene un diagnóstico de la realidad del territorio y su significado para la comunidad. Esto incluye tres ámbitos de uso del territorio que hace la comunidad para sus medios de vida: las zonas de uso del territorio, que a su vez son las áreas de trabajo diario, como el manglar, la playa y el mar; el hogar, es decir el caserío en el que habita la población, y el ámbito organizativo principalmente representado en el Consejo Comunitario”⁴. Para estos pobladores la oferta etnoecológica-turística implica la adecuación de senderos, jornadas de recolección de basuras, capacitación contable y organizativa a la junta del Consejo Comunitario, así como el traslado de los habitantes que permanecen cerca de la playa hacia una zona más segura en la parte alta de su territorio.

- g) La Fundación Ecomanglar se constituye en el marco del Consejo Comunitario de Bahía Málaga. Según su representante legal, Santiago Valencia, dice:

Ecomanglar es una iniciativa que nace del interés de la comunidad de poder tener una microempresa que se encargara del tema turístico. Hoy ya Ecomanglar es una empresa que propende a la conservación de los recursos naturales, enfocada en el ecosistema manglar y en mantener el patrimonio cultural. Y... ese patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, que tenemos en el territorio. Toda esa belleza paisajística y esas costumbres asociadas al mantenimiento de los recursos naturales, pero también asociadas a esas prácticas tradicionales de subsistencia (E7: 1).

Esta organización, a diferencia de las anteriores, permite la participación de la mayoría de los pobladores en los servicios ecoturísticos de los que deriva sus recursos. Para ello, han tenido que interiorizar el cuidado de su entorno, el conocimiento de las prácticas locales de producción y conservación y la defensa del territorio como principal activo de la comunidad. Todas estas iniciativas fundan sus horizontes y acciones en situaciones específicas que le dan vida a las identidades organizacionales en relación con su misión y su sentido, así como a procesos que les ubican en un contexto local

⁴ La comunidad de La Barra: el largo camino del reconocimiento de la propiedad colectiva y el reto del desplazamiento ambiental en <https://www.swissaid.org.co/node/371>

con problemáticas coyunturales e históricas, de interacciones con diferentes actores y en trayectorias individuales que acumulan experiencias de liderazgo, gestión e incidencia. Situaciones y procesos que convergen para darle forma a las iniciativas indagadas y a las relaciones entre ellas dentro de los propósitos asociados con el desarrollo y la construcción de paz.

Es importante señalar que las experiencias tomadas como muestra son apenas una porción de las múltiples existentes en Buenaventura y fueron seleccionadas porque en ellas hay participación directa de actores locales y, sobre todo, porque han surgido de manera espontánea para contrarrestar la acumulación de problemas que desatiende el Estado. La mayoría de ellas no cuenta con recursos económicos y, sin embargo, mantienen una acción permanente de apoyo a las poblaciones que intervienen. En varias de ellas, se destacan las perspectivas a largo plazo dado su engranaje con políticas públicas, la base económica y productiva de algunas de sus apuestas organizativa, el perfil de sus líderes y otros factores que les permiten planificar con marcos de tiempo amplios y flexibles (Espacio Humanitario, Anmucic⁵, el Consejo Comunitario de La Barra y Ecomanglar). Fundescodes y la Pastoral Social, por tener una trayectoria ligada a la Iglesia católica, cuentan con relaciones más fluidas con financiadores.

En todo caso, todas las organizaciones se vinculan a redes amplias que permiten la incidencia política regional; esa presencia permanente de otras organizaciones, instituciones y personas que contribuyen desde sus experticias y liderazgos a desarrollar dinámicas locales y a resolver problemáticas específicas. Ejemplo de lo anterior son aquellos líderes y lideresas que trabajan en acción humanitaria y en la atención a las víctimas. Se destaca la labor de las recientes generaciones de jóvenes que, a partir de su acceso a la educación superior y con base en sus trayectorias vitales, han generado un interés por comprender y actuar en estos contextos.

En un trabajo reciente del Colegio Colombiano de Psicología (Colpsic) y la Universidad del Valle se presenta, a manera de ilustración, el trabajo de Damaris Guasá, residente del sector del Naya durante la masacre ocurrida

⁵ Esta experiencia se desarrolló en el marco de una orientación institucional, pero más adelante ellas se independizaron, criticando las orientaciones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, que excluía de sus objetivos a las mujeres rurales. Con esa separación, fortalecieron sus acciones ligándose a otras iniciativas, como la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz, al PCN y a las organizaciones de víctimas del conflicto armado. Mantiene las reivindicaciones por el acceso a la tierra y las concernientes al fortalecimiento del campesinado como un actor político y sujeto de derechos, pero cada vez más reclama políticas diferenciadas para las mujeres.

en 2001. Ahora, como psicóloga, ha dedicado parte de sus investigaciones y su intervención a comprender y actuar sobre las problemáticas del conflicto en la región (Colpsic y Universidad del Valle, 2018). De la misma forma, es una veta para seguir las transformaciones entre generaciones con acceso a la educación superior y sus vínculos con la región y sus problemáticas, y concebir en parte los semilleros de liderazgo en que se han constituido las universidades regionales (Universidad del Pacífico, Universidad del Valle) y organizaciones que conectan las expectativas de transformación social con mandatos y misiones institucionales, tanto en organizaciones de orden local, como en aquellas con incidencia en lo local, pero con radio de acción en lo regional, nacional e internacional.

TRAYECTORIAS INDIVIDUALES Y LEGITIMIDAD ORGANIZACIONAL

La sostenibilidad de las iniciativas, tanto en términos de duración como en función de la cohesión interna, se soporta, entre otros factores, sobre las legitimidades construidas durante las trayectorias individuales de los líderes que conforman cada iniciativa: en Fundescodes, en el Espacio Humanitario Puente Nayero, en Anmucic, en la Pastoral Social, en Rostros Urbanos, en el Consejo Comunitario de La Barra y en el Consejo Comunitario de Bahía Málaga (Ecomanglar), los líderes en los momentos fundacionales de las organizaciones acumulaban un amplio recorrido en la defensa de derechos humanos y otros procesos que les permitieron conocer de primera mano las problemáticas locales, como también las rutas y mecanismos asociados con la gestión, los estilos de movilización y las exigencias frente a actores institucionales nacionales o internacionales.

En la Tabla n.º 3.1 se presenta información de los representantes de las iniciativas, los referentes más resaltados en términos de pertenencia a organizaciones, experiencia y liderazgo en procesos de gestión vínculos con redes sociales.

En estas trayectorias los líderes han acumulado una gran experiencia para formular nuevas formas de pensar, actuar y transformar las organizaciones. Todos los entrevistados otorgan un peso muy importante a su formación, ya sea en educación formal o no formal, siendo esa la base de su comprensión de los problemas locales, para la transferencia de conocimientos a otros participantes y, sobre todo, para acumular saber para nuevos procesos con otras organizaciones. En palabras de Leonard Rentería, su formación ha sido empírica y eso le ha permitido seguir acompañando procesos sociales.

Tabla n.º 3.1. Trayectorias de los líderes de las organizaciones tratadas en esta investigación

No	Líder o lideresa	Organización / entidad	Cargo o función	Trayectoria
E1	Gloria Arboleda	Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -Anmucic	Coordinadora zonal - Buenaventura	Uno de sus principales logros es el impulso a la Ley 1257 de 2008 que busca prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. También fue una de las fundadoras de la Red de Mariposas Alas Nuevas Forjando Futuro.
E2	Leonard Rentería	Fundación Rostros Urbanos	Director	Su trayectoria empezó como participante de procesos de la Comisaría Intereclesial de Justicia y Paz, luego hizo parte de la Fundación Rostros y Huellas. Se desempeñó como auxiliar administrativo de CODHES y es uno de los creadores de NotiSarcasmo.
	Yudy Angulo		Integrante del equipo de gestión y formulación de proyectos	Es parte de Rostros Urbanos desde 2013. Inició como participante del proceso y después se convirtió en dinamizadora del proyecto de juventudes y apoya el equipo operativo logístico.
E3	Manuel González	Pastoral Social de Buenaventura	Subdirector	Este administrador de empresas es párroco de la iglesia del Sagrado Corazón en la isla El Firme y subdirector de la Pastoral Social de Buenaventura. Es uno de los creadores de la Comisión de Justicia y Paz. Fue secretario del despacho de la Alcaldía de Buenaventura. Tiene un amplio ejercicio como profesor de la escuela de líderes juveniles.
E4	Orlando Castillo	Espacio Humanitario	Coordinador	Sociólogo de la Universidad del Pacífico, especialista en Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Desplazado en el 2001 del Alto Naya, es uno de los creadores del Espacio Humanitario.
	José Pompilio Castillo		Fundador del barrio	Migró del Naya a la zona rural de Buenaventura por causa del conflicto armado. Trabajó como visitador epidemiológico del Ministerio de salud. Es uno de los creadores del Espacio Humanitario.

Continúa

No	Líder o lideresa	Organización / entidad	Cargo o función	Trayectoria
E5	Gilberto López Vallecilla	Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social - Fundescodes	Asesor de Derechos Humanos	Este contador público es uno de los fundadores de Fundescodes; se desempeña como asesor en Derechos Humanos.
E6	Eliécer Posso	Consejo Comunitario de La Barra	Representante legal	Docente y miembro de la junta directiva del Consejo Comunitario desde su conformación.
E7	Santiago Valencia	Fundación Ecomanglar Consejo Comunitario de Bahía Málaga	Representante legal del Consejo Comunitario de Bahía Málaga	Empezó en el Grupo Ecológico de Jóvenes; ha sido Secretario del Consejo Comunitario de Bahía Málaga y durante varios años coordinador de Ecomanglar.

Fuente: entrevistas a líderes sociales realizadas entre septiembre de 2017 y enero de 2018.

[...] cuando yo estaba en esto casi no pensaba en estudiar formalmente porque yo me la pasaba que Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Barrancabermeja, en talleres de formación a los que lo mandaban a uno para aprender de liderazgo y diferentes temas. Entonces uno ya como que decía “no, yo voy a esto y a esto” y pues yo creo que en gran parte es por eso que no he podido terminar mi carrera, porque la pasé gran parte de mi vida aprendiendo de forma empírica y ahora sí después de todo ese proceso es que yo vine a decir “no, listo, ya es hora de entrar a la universidad” (E2: 5).

Una constante en los entrevistados es que gran parte de sus ideas y prácticas organizativas proviene de su formación y conocimiento en organizaciones que preceden a las que actualmente lideran. Leonard Rentería funda su experiencia empírica en el trabajo con CODHES, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Rostros y Huellas, de la cual se deriva Rostros Urbanos como una organización preocupada por los jóvenes y sus problemáticas. Gloria Arboleda rememora la separación individual y organizacional de la Anuc para constituir Anmucic y después conformar con otras compañeras Las Mariposas de Alas Nuevas.

Los dos líderes de los consejos comunitarios de La Barra y Bahía Málaga se remontan al proceso formativo que adquirieron en la experiencia de divulgación de la Ley 70 y el engranaje con la exigencia de conformación de los consejos comunitarios y la gestión y formación alrededor de los mismos.

Orlando Castillo, del Espacio Humanitario Puente Nayero, refiere su aprendizaje desde su participación en la Corporación Organizando Haciendo y Pensando en el Pacífico (CORHAPEP). Él sugiere una derivación de los procesos de base comunitaria con la figura del Espacio Humanitario. Manuel González de la Pastoral Social se refiere a su paso por escenarios de la administración pública y valora la participación social, al tiempo que crítica la educación formal:

Uno de los grandes desafíos que tenemos [tiene] la población de Buenaventura es que nos vamos formando con un sentido crítico y una visión mucho más altruista de cómo transformar esta realidad porque la educación no nos ha ayudado, la educación no ha sido liberadora, sino repetidora de cosas. Tanto incluso, que ha estado de espaldas al desarrollo mismo del Pacífico y a las potencialidades económicas de Buenaventura (E3).

Estos liderazgos suponen una experiencia validada desde las comunidades, pero con una conexión con organizaciones de orden local o con incidencia en lo local (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz —CIJP—, PCN, Pastoral Social) que se constituyen en escenarios de formación política de algunas de las bases sociales del puerto:

[...] allá hacia el 2010, con un grupo de personas también inquietas, lograron montar una escuela que se llama Escuela de Formación de Líderes del Pacífico. No, 2010 no, la época del 1995 al 2010, más o menos. A esa escuela pasó casi todo el colectivo de Juventud 500 [Asociación para el Desarrollo Juvenil de la Costa Pacífica Juventud 500], Víctor [Vidal] hacía parte de esos jóvenes. Juventud 500 todavía existe y por ahí también pasó la gran mayoría de los que hoy están en el PCN: Danelly Estupiñán, Hamilton, Absalón Suarez... (E3: 5).

Sin duda, la formación de los integrantes y los líderes de las organizaciones es fundamental para ganar legitimidad en la comunidad y contribuir a la construcción y defensa de las identidades, algunas de estas más ligadas al orden urbano o al rural, a lo público o lo privado, a lo tradicional o lo moderno, o bien una hibridación que les permite moverse en diversas lógicas prácticas y en la pluralidad de discursos existentes.

LEGITIMIDAD Y RELACIONAMIENTO (REDES) CON LAS COMUNIDADES

Esas dicotomías urbano/rural, público/privado, tradicional/moderno impiden una adecuada comprensión de los procesos sociales en Buenaventura y dificultan la intervención sobre los mismos al no diferenciar los vínculos

y articulaciones entre estos procesos que, lejos de ser antagónicos, están entrelazados de modos muy diversos (Escobar y Pardo, 1996).

Tanto los elementos más negativos como aquellos que se consideran claves para el bienestar de las comunidades cuentan con la participación y el sostenimiento de diversos grupos sociales del Pacífico; lo que muestra que hay lazos fuertes que hacen posible la proliferación de estas condiciones. Por consiguiente, estos lazos se pueden asumir desde dos perspectivas tipo sobre la manifestación de diversas formas de capital social (López, Alcázar y Romero, 2007); la primera sería la del capital social *perverso* (Rubio, 1997). Así, las redes, contactos, relaciones de poder, desviaciones del sistema legal, reglas informales de comportamiento, actividades políticas que valoran y recompensan las actividades ilegales y la búsqueda de rentas más que el trabajo legal y la innovación en la región han constituido para sectores significativos de la población un *capital* que hace posible que estas prácticas perduren y, de alguna manera, se conviertan en formas de convivencia cotidianas y aceptadas. Estas prácticas coexisten con un segundo tipo de capital social, aquel que fortalece la cultura y la pertinencia comunitaria, la solidaridad y el establecimiento de sinergias y esfuerzos colectivos de construcción conjunta, y que ha permitido sacar adelante proyectos relevantes para las comunidades.

En esta perspectiva, el acento sobre el papel que han jugado los vínculos sociales en la construcción de la sociedad nos ubica en un enfoque que privilegia una mirada relacional de los fenómenos sociales (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1975) que intenta dejar de lado perspectivas esencialistas y dicotómicas, por un punto de vista que favorece las articulaciones y acciones recíprocas como la base sobre la cual se estructura la vida social. Uno de los resultados adversos de esta coexistencia de formas de capital ha sido el incremento de mecanismos de exclusión social y política a las que han estado sometidos los pobladores del Pacífico. Esta exclusión no es solo del centro a la periferia, como usualmente se ha leído el problema, sino entre pobladores del Pacífico mismo.

Por esto, uno de los retos más significativos de la intervención social es fortalecer los vínculos positivos⁶ entre sus pobladores mediante la puesta en marcha de procesos de integración social que, reconociendo las diferencias, permitan la construcción de sociedades incluyentes (Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 2010). Es importante señalar que, en contraste con lo ocurrido en otras latitudes, en América Latina la cohesión social se asentó

⁶ Según Pierre Bouvier (2007), los vínculos sociales positivos “designarían relaciones humanas orientadas hacia la emancipación, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad” (p.35).

fundamentalmente en los vínculos sociales (Sorj y Martuccelli, 2008), y que las posibilidades de fortalecimiento institucional dependen tanto de las normas como de la manera como se constituyan estos vínculos.

La información recabada a través de diferentes fuentes nos permite señalar que en Buenaventura coexisten ambas formas de capital social (positivo y negativo) y que su convivencia es el resultado de procesos históricos muy precisos, pero en modo alguno irreversibles, a pesar de que estas formas de capital social perverso hayan ganado espacio, sobre todo en las últimas décadas. Como veremos a continuación, en los relatos de los líderes aparecen enunciados identitarios de un nosotros, a partir de las experiencias compartidas en las comunidades, que constituyen y asientan formas de capital social positivo.

Por ejemplo, los líderes de Puente Nayero reconocen la decisión de denominarse de esa manera por el origen rural de gran parte de la población que allí habita, la cual procede de la región del Naya ubicada en los límites entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca hacia la zona pacífica. Ellos se remontan a un proceso de asentamiento urbano que se inició desde los años 1960, ligado a la migración rural hacia las ciudades, propia de la época y, posteriormente, al desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes. Una vez asentadas en este sector de bajamar, los recién llegados se integran en una suerte de colonia gracias a la amplitud de las redes familiares y comunitarias que los acogen y les permiten paliar las rupturas socioculturales vinculadas con el territorio de partida. Por ello, el origen de la población de Puente Nayero, en diversas generaciones, se ancla con referencia a la cuenca del río Naya.

Naya es tan importante para nosotros e inclusive para el Espacio Humanitario. Resulta que en los últimos 15 o 20 años la violencia se recrudeció en el Pacífico y una de esas zonas afectadas fue el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya y el Alto Naya, en el cual hubo una masacre en el año 2001. Fueron muchas las familias que tuvieron que salir desplazadas, alrededor de 3.000 familias salieron del territorio, entre esas este servidor que está aquí, que es desplazado del 2001 (E4: 1).

Así, esa relación campo/poblado se establece de forma simbólica y material, sea por la nominación de esta suerte de colonia del Naya o bien por las relaciones establecidas vía el desplazamiento y las redes existentes con base en las relaciones familiares y comunitarias. Además, las redes organizacionales aparecen y convergen para sumarle a esa identidad formas de resistir la violencia como causa y consecuencia de inequidades e injusticias estructurales. En la siguiente cita, se retoman los relatos en que

los líderes de Puente Nayero refieren sobre momentos importantes que marcan la configuración de su identidad territorial urbana, las redes organizacionales a las que acuden y los horizontes que se plantean sobre esa nueva figura o identidad organizacional e iniciativa llamada Espacio Humanitario Puente Nayero.

El primero es el desplazamiento de febrero del 2012. Aquí se desplazan alrededor de 150 y pico familias de esta calle porque ya había un control total del paramilitarismo, y luego eso se repite en el 2013. En ese año ya no son 150, sino que se desplaza toda comunidad, en el barrio eran más de 5.000 personas, 1.500 y pico de familias [...]. Pero hay un hecho que es vital para nosotros acá y es el asesinato de una señora que se llamó Marisol Medina, de ella y su esposo, que era del Naya. Fue torturada y desmembrada. Eso se dio más o menos a las 11 o 9 de la mañana, en medio de los niños, en medio de la comunidad [...] a nosotros, por conocer a la Comisión Intereclesial por el tema del Naya, los comenzamos a llamar, entonces los ubicamos y les contamos sobre la situación que se venía presentando acá en Puente Nayero (E4: 6).

La convocatoria a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) es relevante en tanto se configura en un nodo importante para varias de las organizaciones sociales que se han creado en Buenaventura. Su acompañamiento permanente en la formación de líderes, la gestión de recursos y la incidencia internacional la convierten en catalizador de algunos procesos locales. Para el caso de Puente Nayero, se configuran medidas cautelares y se establece una mimesis con otras experiencias nacionales conocidas como Comunidades de Paz. Así, no solo se establece una identidad local, que ya venía siendo trabajada en Puente Nayero a través de la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico (CORHAPEP), sino que el sentido de la nueva figura establece redes con otras entidades de similares condiciones. Por supuesto, esto no se desarrolla sin tensiones, la creación del Espacio Humanitario, análogo a las Comunidades de Paz, implicaba una toma de posición diferente a la formulación de exigencias relacionadas con las necesidades básicas o los asuntos asociados al desarrollo local, a lo cual estaban acostumbrados sus pobladores⁷.

⁷ Es importante referir esas tensiones pues hacen parte de los procesos organizativos, de las búsquedas de reconocimiento y legitimidad local, de la autonomía de las organizaciones. Jesús Durán, en su tesis “Resignificación de la acción de líderes de la isla Cascajal frente al Proyecto Malecón Bahía de la Cruz de Buenaventura”, del año 2016, refiere otras versiones de la relación entre CIJP y CORHAPEP. De acuerdo con la información, es la CIJP la que contacta al líder de la organización local para presentar la iniciativa de Puente Nayero, reforzando la diferencia de origen de la iniciativa y manifestando, otras organizaciones, unas lógicas y unas formas de

La comunidad de paz planteaba algo que se podría llamar un cerramiento respecto a la entrada de los actores armados, así como un posicionamiento de neutralidad activa y resistencia pacífica frente a los actores del conflicto y a la ilegalidad en la zona, en otro sentido, a la presencia de ese capital social perverso.

Para el caso del Espacio Humanitario Puente Nayero se puede observar una hibridación de identidades que atraviesan aspectos de orden cultural (comunidad afrodescendiente del Pacífico), de orden comunitario-urbano (Puente Nayero con familias y comunidades del mismo origen regional), organizacional (CORHAPEP) y de movilización de resistencias y defensa de los DD. HH. (Espacio Humanitario, análogo a las Comunidades de Paz).

Este desdoblamiento e hibridación de las identidades organizacionales, objetivadas en líderes y lideresas que articulan sus trayectorias individuales con las experiencias organizacionales y en ser parte de las comunidades, promueve la legitimidad desde las bases, el fortalecimiento con redes externas y la sostenibilidad de las acciones y la visión de la organización. Lo anterior no soslaya el hecho de que estas configuraciones organizacionales y de redes son también el resultado de desencuentros y miradas diversas no solo sobre el saber hacer, sino sobre el cómo.

La segunda experiencia aquí tratada, Rostros Urbanos, no se establece o se identifica por la pertenencia a un espacio específico de la ciudad de Buenaventura. La identidad organizacional se establece a partir de la derivación o ruptura con la Fundación Rostros y Huellas, de la cual se mantienen metodologías asociadas a la producción artística y la orientación hacia las problemáticas de juventud del puerto. Sin embargo, la autonomización organizacional, que reconstruye nuevas formas de hacer y de ser en el plano local, también se realiza en relación con una crítica sobre la organización que les precede.

En el 2012, empezamos a pensar que, por lo que hacemos y por diferentes dinámicas y diferencias, lo más sensato era generar un proceso de independencia y autonomía que nos permitiera construir otra forma de hacer las cosas, teniendo en cuenta, sobre todo, que las organizaciones tradicionalmente, aunque conocen de muchos temas, no suelen estar divididas en su contexto, sino que todo el mundo mete la mano en todo. Entonces, nosotros partíamos de venir de varios años trabajando en lo social, y queríamos una organización

representación y de acción diferentes de las que venían desarrollándose con base comunitaria (Durán, 2016 P. 105). Aun así, y a pesar de esas tensiones, de forma particular entre PCN y CIJP, para el caso particular del Espacio Humanitario Puente Nayero, es también de resaltar la articulación sobre propósitos comunes en lo local como la pertenencia a diversos comités interorganizacionales en el puerto.

que fuera liderada por gente joven, pero que tuviera una forma de funcionar totalmente diferente. Es allí, cuando en el 2012, nosotros nos hacemos con un espacio ya autónomo e independiente y decidimos legalizarnos ante la Cámara de Comercio (E2: 1).

Digamos que las experiencias han sido muy similares. Yo también arranqué en esto siendo parte de un proceso y pues estando ahí me dieron la oportunidad de dinamizar ese mismo proceso. Eso me fue abriendo caminos en este ámbito. Luego entré a dinamizar el tema de la plataforma de juventudes y pues ahí hemos venido estando hasta que el compañero Víctor me permitió hacer parte de Rostros Urbanos en el 2013 (E2: 5).

Como se observa, se reconoce que la experiencia de los miembros del grupo está vinculada a acciones sobre la realidad social, lo que les permite replantear sus formas de trabajo. En lo anterior, se presenta, por ejemplo, cómo parte de la formación de los líderes se realiza a través de la CIJP, así como la actividad laboral y social junto a CODHES. En general, los líderes de Rostros Urbanos han jugado un papel importante en la identificación de las problemáticas locales. Desde su perspectiva de jóvenes, el objeto de intervención que promueven es la población joven en riesgo de ser vinculada a los actores armados irregulares o al consumo de estupefacientes. Sin obviar una reflexión constante sobre problemas de orden estructural en el puerto: corrupción, violencia, uso de recursos presupuestales en la administración, entre otras.

Esa relación constituye parte de su identidad organizacional y de sus formas de hacer. Se identifica en Rostros Urbanos la constante invitación a los jóvenes para participar a través de un lenguaje cercano a sus prácticas e interacciones, que involucra el arte, la música, la pintura, el uso de redes sociales virtuales, etc. Esa adscripción y ese origen desde las comunidades les permiten una interacción constante y renovada que les otorga legitimidad.

Yo pensaría que en una ciudad donde la gente desconfía tanto, sobre todo los jóvenes, lograr que muchos crean en lo que hacemos y que se acerquen mostrando el interés de decirnos “nos interesa participar de esto”, “nos interesa que cuenten con nosotros para esto”. Yo pienso que eso es un logro significativo e importante.

Y que nos recomiendan también, porque hay gente que llega, por ejemplo, “nosotros queremos hacer algo y tal persona los recomendó a ustedes porque dice que ustedes son serios y hacen su trabajo bien”, eso para nosotros vale más (E2: 16).

La proyección en las comunidades se realiza en ese juego de identificaciones que recurre a diversas formas de interrelacionamiento y de pertenencia de los miembros de Rostros Urbanos a las mismas comunidades. El acercamiento a las comunidades, sean intencionales o surgidas esporádicamente, se fundamenta en las interacciones cotidianas y en la proyección en Rostros Urbanos como puente de exigencias o resolución de necesidades básicas.

Si bien los lenguajes y acciones establecen nuevas formas de comunicación, también la identidad de las organizaciones recurre en Rostros Urbanos, como en las otras organizaciones, a la reconstrucción de las relaciones que han sido permeadas por la violencia y que se sustentaban en lo que se podría denominar la tradición o la cultura:

Entonces, antes en la esquina usted se paraba a conversar con la vecina a hacer el chisme y ponerme al día con ella, pero con la violencia, cuando cogieron el hijo de la señora a la que uno le decía la tía, ya dejó de ser la tía de uno porque el hijo era un actor armado ilegal. Así se rompen las relaciones. Yo pienso que parte de esto es aprender a recuperar ese relacionamiento, para nosotros eso es reconciliación (E2: 19).

Algo similar sucede con la Asociación de Mujeres Negras e Indígenas (Anmucic), que formula su ruptura con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) a partir de derivar, de la identidad campesina, aquella de género, resaltando que las inequidades sociales, económicas y culturales que sufren las mujeres tienen cierta especificidad y, por lo tanto, sus luchas requieren autonomía para enfrentarlas. En el caso concreto de Buenaventura, la legitimidad también está dada en el acercamiento desde lenguajes y prácticas de relacionamiento que se extraen de las prácticas culturales y delimitan, al igual que en el Espacio Humanitario o en Rostros Urbanos, un nosotros. Algo análogo puede señalarse de Anmucic a través de la estrategia del *comadreo*, entendida en términos culturales más que como acciones calculadas desde proyectos formalizados.

Nosotras hacíamos dos jornadas llamadas mingas o mano cambiada que es lo tradicional. Pero, desde el 2013 en adelante, tuvimos que cambiar la estrategia, nosotras somos las ideólogas de una estrategia que se llama el *comadreo*. El *comadreo* nace desde el reconocimiento cultural porque para nosotros los afros el compadrazgo no se comparte con cualquiera, usted tiene que tener un perfil para ser compadre o comadre. Ese perfil si no lo reúne no lo puede ser. Entonces nosotros y nosotras utilizamos de lo que fue parir un hijo le pusimos ese mismo eslogan a la participación social y comunitaria (E1: 3).

Este ritual de interacción⁸, en términos de Collins (2009), es parte de circunstancias comunes que han permitido no solo su creación, sino la preservación y reanudación de la solidaridad social entre los miembros de una comunidad que, en este caso, ha sufrido la violencia provocada por el enfrentamiento entre diferentes actores armados. Tal como se intuye del relato de Gloria Arboleda, este es un juego de cooperación entre los miembros de una comunidad simbólica y de valores ejercidos en la práctica.

Varios de estos rituales se han convertido en estrategias de comunicación informales que constituyen las redes sociales de base para contrarrestar la victimización. El *comadreo* para las mujeres de Anmucic, como la denominación de *tía* para jóvenes de Rostros Urbanos, denotan relaciones de un orden primario basado sobre codificaciones culturales que se enfrentan a los códigos del conflicto. Es a su vez la construcción de un nosotros, así no todos pertenezcan a las categorías circulantes en las relaciones entre los miembros de la organización y las comunidades.

CONFIGURACIÓN DE REDES A TRAVÉS DE ALIANZAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE ORGANIZACIONES QUE COMPARTEN OBJETIVOS SIMILARES

La configuración de las redes permite darles una caracterización a las organizaciones de Buenaventura asociadas a varias modalidades de relación con otras organizaciones o actores sociales con los cuales establecen relaciones de alianza, cooperación, distanciamiento o cercanía. La alianza puede establecerse de manera coyuntural o sostenida en el tiempo, en algunos casos orientada a la incidencia política entendida como las acciones dirigidas a influenciar en las decisiones o rendición de cuentas de decisores; en otros casos, conducida a la comunicación para visibilizar o generar el respaldo legitimador a partir de denuncias públicas proyectadas en diferentes escenarios y con diversos actores.

Respecto a las relaciones de cooperación, se establecen en principio aquellas que implican unas acciones que involucran procesos de formación política, en derechos humanos, de formación organizativa o técnica; incluyen además aquellas relaciones fundadas en la financiación de

⁸ “Es un encuentro pautado entre personas que mejor o peor, han aprendido de otros y por experiencia propia a percibir, inferir, reproducir, desarrollar, improvisar esas pautas” (Collins, 2009, p. viii).

programas o proyectos organizacionales. Finalmente, encontramos las formas de relacionamiento desde la cercanía y la confianza o bien desde el distanciamiento y la ruptura, condiciones que permiten hacer lecturas diversas de las organizaciones en términos de su legitimidad y las posibilidades de sostenerse en el tiempo.

Cabe señalar que estas relaciones no son de orden discreto, por lo que se pueden establecer varias de ellas entre los actores o los escenarios con las organizaciones o las iniciativas estudiadas. Sin embargo, para el ejercicio que sigue se establecerá la relación predominante o más significativa para darle sentido a las redes establecidas en cada caso. Así, en el Cuadro n.º 3.1 se disponen los íconos creados para graficar las redes y el nivel en que se ubican sus aliados. Luego, se presenta un mapa de redes por cada organización, describiendo las relaciones identificadas. Las fuentes principales de este ejercicio fueron las entrevistas realizadas a líderes de cada organización y dos talleres con participación de varios de ellos.

Cuadro n.º 3.1. Íconos utilizados en los mapas de redes

Relaciones		Actores
Cooperación	— Financiadore de proyectos	 Organizaciones internacionales
	— Formación	 Organizaciones Nacionales y regionales
Alianzas Actores estratégicos para la acción	... Comunicación	 Organizaciones o actores locales
	— Coordinación de acciones	 Instituciones estatales
Forma de relación	--- Ruptura o distanciamiento	 Plataformas interorganizacionales
	— Cercanía y Confianza	 Precedente u origen de la organización
		 Universidad
		 Espacios de actuación y presencia de las organizaciones

Fuente: Construcción de los autores.

ROSTROS URBANOS

La información obtenida sobre Rostros Urbanos nos permite listar los siguientes actores, organizaciones, plataformas, entre otros:

Cuadro n.º 3.2. Actores identificados en la red de Rostros Urbanos

1. Comunidad:	10. Medios de comunicación:
a) Los colegios, los padres de familia de algunos barrios	a) Blue Radio
b) Los jóvenes	b) Semana
c) Las JAC	c) Redes sociales virtuales
2. Rostros y Huellas	11. Corporación Podium
3. Jóvenes por Buenaventura	12. USAID
4. Comité Ser Joven	13. Comité interorganizacional terrenos ganados al mar
5. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz	14. Consejo de Política Social
6. CODHES	15. El Estado (como un todo)
7. Servicio Jesuita a Refugiados	16. Fundescodes
8. Otras experiencias organizacionales	17. Itacho
9. Ministerio del Interior	

Fuente: entrevista realizada a Yudy Angulo Castro y Leonard Rentería el 10 de octubre de 2017.

La ilustración n.º 3.1 presenta la disposición de los actores con las relaciones identificadas en torno a Rostros Urbanos. En las redes constituidas por Rostros Urbanos, se destacan organizaciones que tienen presencia regular en el espacio local/regional como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), organizaciones cuyos contenidos misionales están vinculados a la defensa de los derechos humanos. Ellas desarrollan con las organizaciones locales procesos de formación y fortalecimiento organizacional como estrategias de empoderamiento y generación de liderazgo de las bases sociales. Establecido este tipo de relaciones formativas, se mantienen las articulaciones en términos de financiación de los proyectos propuestos por Rostros Urbanos y vinculación con fuentes externas (Podium, USAID), expandiendo la red por intermediación de las organizaciones “apadrinadoras”, paralela a un ejercicio progresivo de autonomización de la organización que establece su identidad misional desde el acompañamiento a procesos con jóvenes vulnerables a través del arte y de la agenda pública sobre juventud.

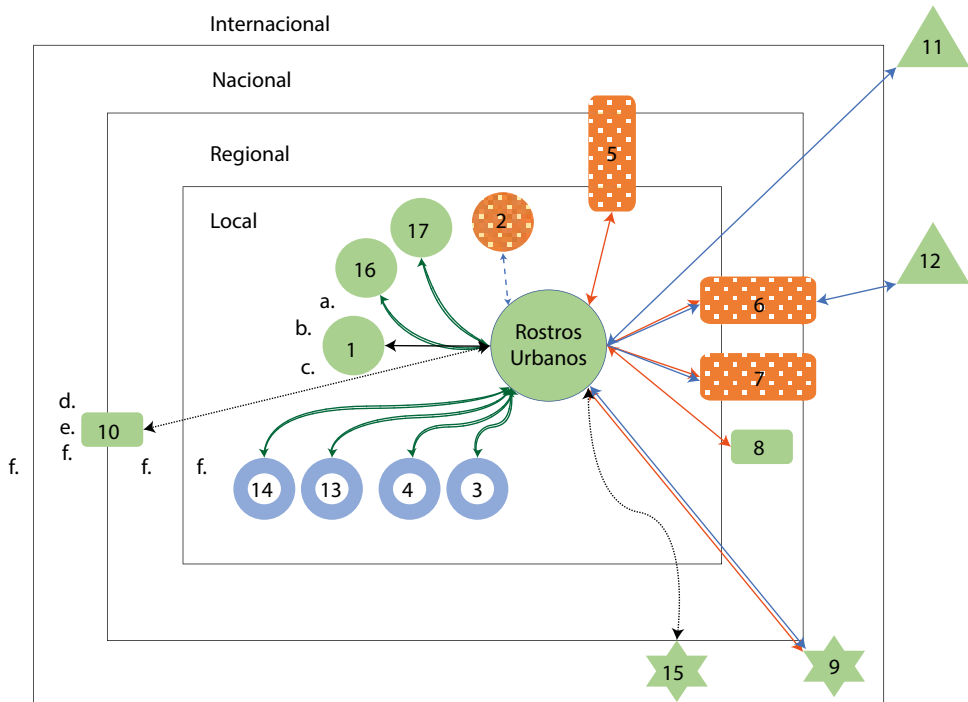


Ilustración n.º 3.1. Mapa de actores de Rostros Urbanos

Fuente: elaboración de los autores con base en las entrevistas y talleres.

Es interesante observar que Rostros Urbanos es el resultado de plataformas u organizaciones de mayor trayectoria y cómo los discursos y prácticas aprendidas son replicados, a la vez que genera miradas críticas y se permite adaptaciones a las condiciones del contexto, como las limitantes financieras, físicas y humanas que se dan en su proceso de consolidación organizativo.

O sea, fallar en cualquier cosa, pero no fallar en eso [se refiere a la organización administrativa y de recursos] porque fallar en eso significa, inclusive poner hasta la reputación de los que hacemos parte del proceso en riesgo y poner la imagen de nosotros que queremos... vamos a ser profesionales y no queremos que nuestra hoja de vida esté manchada por plata. Y menos por plata porque esto es transitorio y porque total uno de aquí se va sin nada (E2: 15).

La consolidación tanto interna como externa de Rostros Urbanos, así como los procesos de gestión, le han llevado a generar reflexiones sobre la sostenibilidad de su legitimidad. Esta legitimidad la reconocen y la amplían a través de los ajustes en su quehacer, y sobre el espejo de experiencias no exitosas en las que han participado, y de otras en las cuales identifican limitaciones: uso o administración inadecuada de recursos, metodologías

de intervención y formas de comunicación distantes de las comunidades y jerarquización de las relaciones al interior de las organizaciones, que derivan en limitaciones en el relacionamiento y en el abordaje adecuado de las problemáticas locales.

Las reflexiones y metodologías de Rostros Urbanos en ese aprendizaje y ajuste pueden denominarse híbridas, en tanto recurren a la comunicación con la comunidad dentro de las relaciones reivindicadas como tradicionales, así como al uso de medios de comunicación y redes sociales virtuales “modernas” para visibilizar problemáticas sociales del puerto y plantear sus posiciones en diversos públicos.

Así, entre esos procesos de interacción que preceden a Rostros Urbanos, de los aprendizajes y adaptaciones de estas experiencias formativas, del apoyo financiero y del respaldo institucional, al igual que de sus metodologías de acción y comunicación sobre las comunidades se configura una organización que es el resultado de una conjunción de redes y experiencias particulares que le da a Rostros Urbanos un carácter diferente a otras, tal vez más tradicionales en sus repertorios. Sus relaciones y percepciones son diferenciales y estratégicas respecto al Estado, que se comprende y materializa en diversos escenarios: inicialmente como un Estado de presencia marginal o excluyente y con una forma de relación, en términos generales, de distanciamiento. “La presencia del Estado está más es desde todo el emporio económico y portuario de la ciudad, pero no desde el bienestar de las comunidades que ancestralmente hemos estado habitando ese territorio” (E2: 16). Esta condición la establecen los integrantes de Rostros Urbanos a partir de reconocerse parte de la ciudad y, por lo tanto, ciudadanos que perciben esa distancia con el Estado. Por otro lado, se presenta un Estado que atiende acciones formativas, vía el Ministerio del Interior en relación con el manejo y uso de las TIC, limitando su presencia a una situación específica. Por último, se presenta un escenario más concreto de encuentro con el Estado y que se realiza en hombros de la política pública sobre juventud. Esta última relación se presenta más en forma de exigibilidad de derechos o de garante de ellos, tanto en una mirada global (la situación de exclusión de las comunidades bonaverenses), o bien sobre situaciones concretas asociadas a las problemáticas locales (el tema de jóvenes inicialmente).

Esta última problemática asumida como interés primario de Rostros Urbanos, y en escenarios de relación con el Estado, se realiza a través de plataformas civiles (de juventud, Comité Ser Joven, Jóvenes por Buenaventura) o de la estructura estatal misma (Consejo de Política Social). Estos espacios de incidencia política se fundamentan en relaciones de alianza con otras organizaciones locales, y movilizan de esta forma

denuncias que se amplían a otros temas locales (infraestructura, corrupción, salud, seguridad, etc.), y que se manifiestan, por ejemplo, a través de un medio digital denominado Notisarcasmo, un canal de Youtube, que facilita la divulgación de estos temas.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS, NEGRAS E INDÍGENAS DE COLOMBIA (ANMUCIC)

El origen de la Asociación de Mujeres Negras e Indígenas (Anmucic) se encuentra en una escisión de la Anuc en los años ochenta que se generó en un momento particular de reivindicación de la identidad de género y de reconocimiento de la diversidad étnica. Fue promovida y cooptada por el Estado a través del Viceministerio de Agricultura que orientó la financiación de proyectos hacia la nueva organización, Anmucic, como se desprende del relato de su representante en Buenaventura, Gloria Arboleda, como el hito de su creación y de la posibilidad de empoderamiento desde la condición femenina. Por supuesto, las relaciones de la filial local de Buenaventura se mantienen con los niveles regionales y nacional creados en la Asamblea (véase Ilustración n.º 3.2).

Cuadro n.º 3.3. Actores identificados en la red de Anmucic

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Anuc 2. Comunidad <ol style="list-style-type: none"> a) Mujeres Urbanas: Triunfo, Bentorrillo, Vista Hermosa y Carmelitas. b) Redes con las veredas de las mujeres señaladas c) Mujeres desplazadas vinculadas a redes familiares y al comadreo 3. Fundación Social para el Bienestar y Desarrollo Integral y Sostenible del Ser Humano - Vida Digna 4. Red Mariposas 5. Red del Buen Trato (Estado) 6. Anmucic regional y nacional 7. Ministerio de Agricultura 8. Paro cívico: a) comité del paro. 9. Save of Children |
|---|

Fuente: entrevista a Gloria Arboleda el 10 de octubre de 2017.

El trabajo con las comunidades se establece, al igual que en Rostros Urbanos o en el Espacio Humanitario Puente Nayero, apelando a formas de relacionamiento tradicional con métodos como el *comadreo*, considerado como parte de las estrategias de solidaridad con y entre mujeres en condición de desplazamiento y sostenido desde las redes familiares que apoyan su acogida e inclusión en los espacios urbanos.

El área de trabajo de Anmucic se mantiene, por lo tanto, en ese vínculo entre lo rural y lo urbano, consolidando su presencia con esos lazos de confianza construidos en los procesos de intervención con perspectiva de género sobre mujeres afrodescendientes. Durante mucho tiempo, esta organización ha sido receptora de recursos estatales para proyectos productivos en los que ellas pueden disponer de recursos y tomar decisiones frente a la producción y la comercialización de los productos agrícolas.

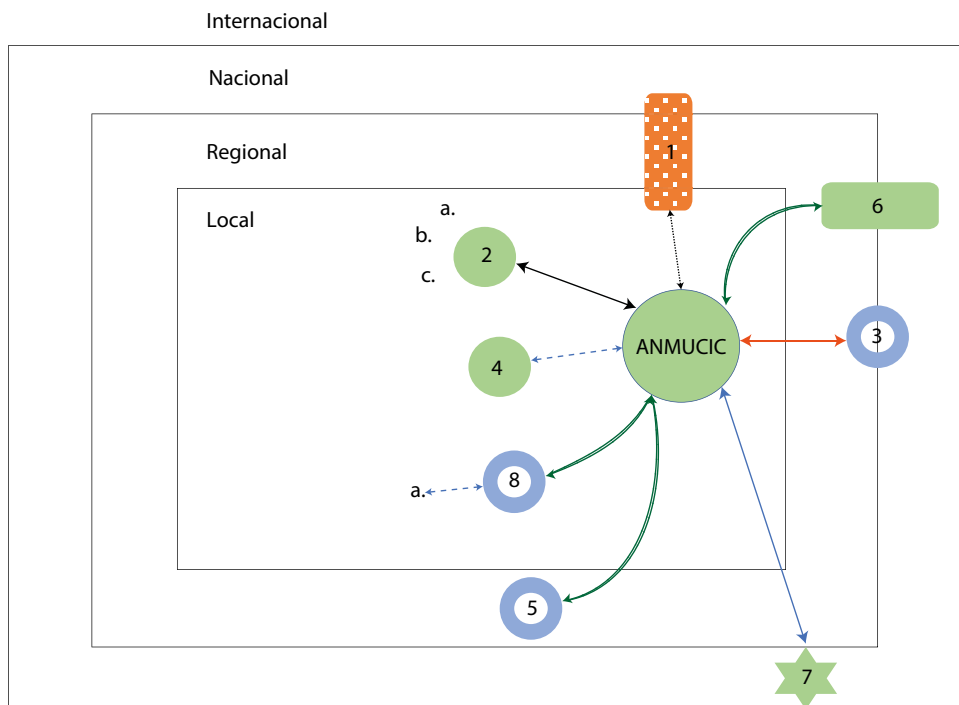


Ilustración n.º 3.2. Mapa de actores de Anmucic

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y talleres.

En esas formas de realizar el trabajo se desarrollan también situaciones de distanciamiento frente a otro tipo de metodologías o a expectativas organizacionales, como la referenciada de la Red Mariposas, una experiencia

de mujeres galardonada con el Premio Nansen de los Refugiados, otorgado por ACNUR en 2014.

Yo tenía otra expectativa después del premio y porque yo discuto que nosotras no necesitamos una casa, Red Mariposas necesita una oficina para su información, pero usted en un contexto como Buenaventura para la problemática de violencia contra las mujeres necesitamos una estrategia no una casa [...]. Y otra cosa es que Red Mariposas tiende esa parte, nosotros la creamos por la 1257⁹ por la violencia contra las mujeres, ese es nuestro espacio para eso. La productividad, lo organizativo, lo político es otra cosa, que se estén mezclando es otra cosa, que también es un error (E1: 13).

A primera vista parecen mobilizarse unas acciones de orden económico, organizativo y de ideas asociadas al desarrollo; por otro lado, se observan como sujeto de atención por la victimización que produce el conflicto armado sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Más adelante, esta organización, tanto en lo local como en lo nacional, se vincula a reivindicaciones más amplias del movimiento de mujeres para denunciar las violencias basadas en género o las violencias contra las mujeres, aquellas más letales pues también impiden la autonomía de las mujeres en distintos campos de actuación. Por estas denuncias se vinculan a procesos estatales como la Red del Buen Trato y reciben recursos internacionales de organizaciones como Save of Children y apoyos puntuales de la Universidad de los Andes en sanidad dental.

De manera más reciente, el Paro Cívico de Buenaventura se convirtió en una plataforma para la incidencia política de demandas estructurales en la que confluyeron esas distintas búsquedas organizacionales sobre sus problemáticas de orden local. Así, Anmucic participó en el Comité del Paro y desarrolló acciones en Cima del Oriente y en Calima. No obstante, pasada la coyuntura, las distancias reaparecen en torno a la representación en los escenarios resultantes del Paro para la interlocución, la exigibilidad y la incidencia política, como lo relata Gloria Arboleda “Sí [estuve] en la mesa de mujer y estuve en la parte antes de ser el paro. Ahora que se está en la negociación, en el *lobby*, eso tiene su dueño” (E1: 8).

Como dejan ver estos relatos y la observación de campo, en las prácticas de las organizaciones se identifican competencias entre rivales, colegas, compañeros, parientes, vecinos, conocidos y desconocidos; no obstante, estas asperezas se liman en situaciones específicas cuando los intereses convergen.

⁹ Se refiere a la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

PASTORAL SOCIAL DE BUENAVENTURA

Los siguientes son los actores identificados en las relaciones constituidas desde la Pastoral Social.

Cuadro n.º 3.4. Actores identificados en la red de Pastoral Social Buenaventura

1. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz	8. Secretaría de Desarrollo Rural
2. Comunidad	9. CVC
a) Organizaciones de base	10. Sena
b) Consejos comunitarios	11. Universidad del Valle
c) Pueblos indígenas	12. Acople
d) Juntas de Acción Comunal, Santa Rosa Guayacán	13. Misereor
3. Aciva	14. Corporación Podium
4. PCN	15. Médicos Sin Fronteras.
5. Escuela de Formación de Líderes del Pacífico	16. Comité del Paro Cívico
6. Juventud 500	a) Comisión de Seguimiento de Derechos Humanos
	b) Comité Central Comité Ejecutivo
7. Palenque el Congal	17. Espacio Humanitario Puente Nayero

La Ilustración n.º 3.3 muestra las redes disponibles de la Pastoral Social. Sobre algunas organizaciones (6, 7 y 8) no se encuentra información detallada que permita establecer el tipo de relación establecida con estos actores más allá de reivindicar su importancia en los procesos de formación local de liderazgos, de política y de derechos humanos.

Desde la Pastoral se identifica un punto de inflexión, en 2009, con la búsqueda de la generación de procesos de incidencia, formación y construcción de visiones locales a partir de la planificación desde las mismas organizaciones y comunidades, trascendiendo incluso las acciones y visiones al interior de la Pastoral sostenidas desde la atención puntual y asistencial.

Así, al igual que varias organizaciones consultadas, la articulación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fortaleció no solo las formas de incidir en lo local, también la intermediación con otras organizaciones para la incidencia internacional y las exigencias en torno a las violaciones de derechos humanos en el nivel regional y local.

Junto con esas articulaciones, las relaciones de confianza consolidadas permiten a la Pastoral comunicarse y generar acciones con comunidades y

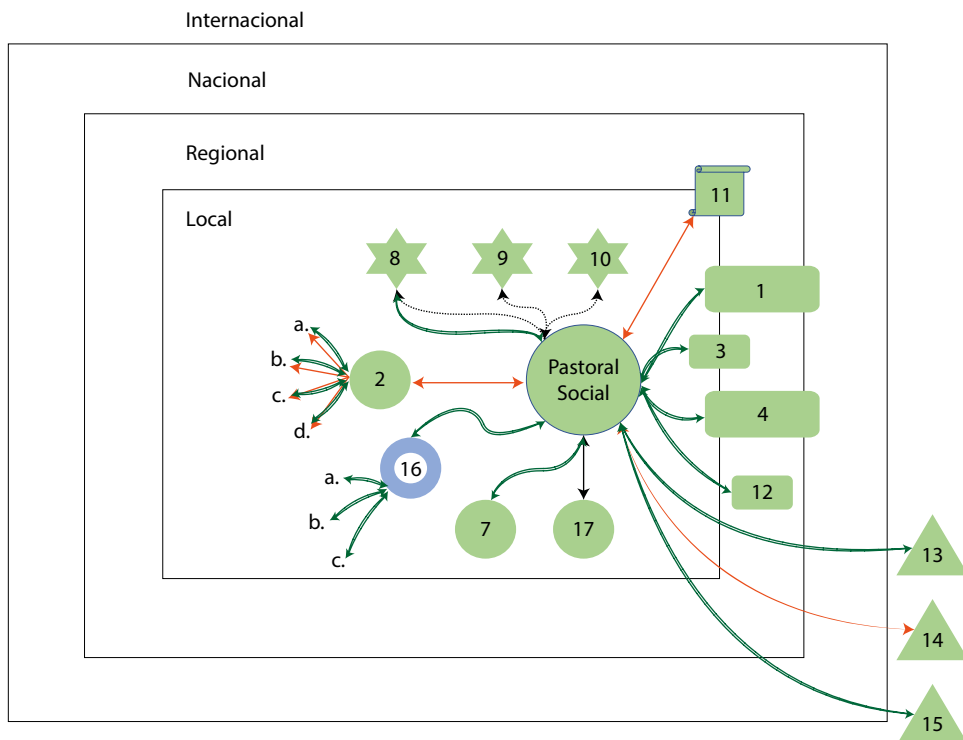


Ilustración n.º 3.3. Mapa de actores de la Pastoral Social

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y talleres.

organizaciones del área rural y urbana, así como con los grupos étnicos locales. Y sustentar en este escenario la construcción de visiones y proyectos acordes con el contexto y las visiones de desarrollo local.

Con otras organizaciones de similar trayectoria (PCN, Aciva, CIJP, Espacio Humanitario Puente Nayero) fundan sus acciones colaborativas en la incidencia política, confluyendo en espacios como los del Paro Cívico, en los cuales la Pastoral asume un liderazgo importante, así como en los comités derivados del mismo (Comisión de Seguimiento, Comité Central y Comité Ejecutivo). De igual forma, consideran la arena política como un espacio estratégico para la formación y por la posibilidad de interlocución con candidatos desde las comunidades para promover liderazgos en instancias como el Concejo Municipal.

El relacionamiento con el Estado se presenta distante, y la relación que se muestra coordinada con una institución de funcionamiento regional, la CVC, es producto de las presiones y exigencias para el cumplimiento de la ley.

ESPACIO HUMANITARIO PUENTE NAYERO

A continuación, el listado de organizaciones con las que el Espacio Humanitario establece relaciones:

Cuadro n.º 3.5. Actores identificados en la red del Espacio Humanitario Puente Nayero

1. CORAPHEP	9. PCN
2. Comunidad Puente Nayero	10. Fundescodes
3. Comunidad del Naya	11. Universidades
4. CIJP	h) Universidad del Pacífico (maqueta para la casa cultural)
5. Comunidades de Paz	i) Universidad del Valle (Working)
a) Curvaradó,	12. Comité del Paro Cívico
b) Jiguamiandó	j) Mesas de trabajo
c) Asiripaz - Meta	13. Marcha del 18 de febrero
6. Medios de comunicación	14. Conpaz (154 organizaciones del país)
7. Embajadas	15. Comunidad internacional
8. Acompañantes solidarios	k) ACNUR
d) Ford	l) Cruz Roja
e) Cristhian Aid	m) Onu – OIM
f) Wola	n) USAID
g) PBI	

Fuente: entrevista realizada a Orlando Castillo y José Pompilio Castillo el 30 de octubre de 2017.

Las redes de Puente Nayero reproducen unas prácticas culturales comunes en las poblaciones bonaverenses consistentes en el relacionamiento por vínculos familiares, de compadrazgo y vecindad entre los entornos urbanos y rurales. Por otro lado, su identidad refleja la consolidación urbana con referencia a un origen rural, El Naya. Es así como la autoidentificación como Puente Nayero se presenta como una forma de identidad basada en las redes establecidas y sostenidas por el vínculo “campo-poblado”. La siguiente cita muestra esa condición:

En este lugar había gente de Naya, entonces en este lugar hubo un flujo de personas desde el Naya a acá. Prácticamente este barrio se conformaba de personas del Naya. Esto fue en los años 1968-69. Ya en los años 1970, estaba toda la parte de La Playita copada la parte que se encontraba más como de ese firme, y estaba este espacio —como le decimos nosotros— barrial, zona libre

pues, que está manglar y todo. Entonces la gente con el ánimo de hacer vivienda, o como decimos nosotros su rancho donde vivir, buscaba el mejor lugar donde acomodarse. Eso se hizo entre los años 1968, 1970, más o menos al año 1975, que fue cuando yo llegué aquí a ubicarme en este lugar. ¿Entonces qué pasaba? ¿Por qué fue Puente Nayero? Porque como había que hacer casas allá y casas acá, o sea a los dos lados, la gente se iba ubicando al lado derecho y al lado izquierdo. A medida en que llegaba gente íbamos avanzando, haciendo puente, y llegó un momento en que dijimos “bueno, ya somos bastantes, pero no sabemos de qué lugar hay mayoría, vamos a hacer un censo”. Se hizo el censo y hecho el censo encontramos que del 87% al 90% eran personas oriundas del río Naya. Dentro de los acuerdos que habíamos hecho dijimos que el que ganara colocaría el nombre del lugar y ganamos nosotros. Como la mayoría era del río Naya pues ¿a quién teníamos que recordar?” (E4: 4).

Así, vemos como se tejen redes en el nuevo entorno por las relaciones que tiene el referente territorial de origen y que desplazados a lo urbano, imaginan nuevas formas de conceptualizar esas relaciones con poblaciones y territorios del “campo” (véase Ilustración n.º 3.4).

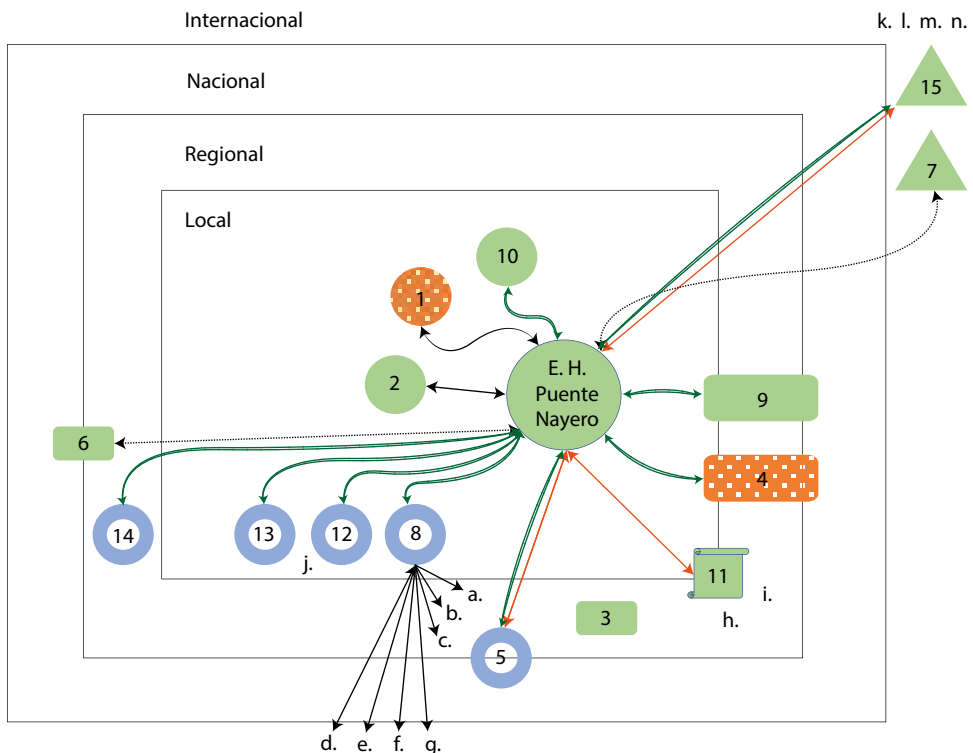


Ilustración n.º 3.4. Mapa de actores del Espacio Humanitario Puente Nayero

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y talleres.

[...] pero nosotros le estamos llamando “territorio extendido” y “cordón umbilical”. Son como nuevos términos que estamos acuñando, teniendo en cuenta que hay una relación directa, no tanto que es relación campo-poblado, pero que está vinculada y que nosotros hoy estamos planteando, donde el territorio del Naya se debe extender a Puente Nayero (E4: 2).

Lo anterior señala, además, alternativas territoriales, culturales y políticas actuales que reinterpretan nuevas formas de ser como comunidad en respuesta al contexto en que habitan. Así, se sumarían procesos de marginalización y pobreza que dieron al traste con las expectativas de los primeros habitantes del hoy Puente Nayero, particularmente con la privatización de Puertos de Colombia. Por otro lado, se suma la violencia ejercida por los actores del conflicto armado, por grupos ilegales y de narcotraficantes. Estos procesos modificaron el entorno del Pacífico y sumaron situaciones de desplazamiento, principalmente, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos en las áreas rurales y urbanas.

Por ello, es comprensible la tensión entre las formas organizativas que inciden en Puente Nayero como comunidad: los procesos de constitución de formas como las JAC para consolidar formalmente el nicho urbano en tensión por su reconocimiento y legalidad; una organización como la Corporación Organizando Haciendo y Pensando en el Pacífico (CORHAPEP), cuyos objetivos y raigambre comunitaria establecen relaciones locales sustentadas en aspectos de orden territorial y asociadas al discurso del desarrollo. Por otro lado, la creación del Espacio Humanitario, que si bien amplía la posibilidad de articulaciones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Red Conpaz, Comunidades de Paz, formas de incidencia internacional y nacional a través de embajadas o medios de comunicación) apalancadas por la CIJP (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz), es interpretada como externa y limitante de la autonomía local. Eso se intuye en la siguiente delimitación y vínculo entre CORHAPEP y el Espacio Humanitario:

El espacio humanitario se crea porque acá ya había un proceso con una organización que se llama Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico —CORHAPEP—. Esta organización, yo soy el presidente, venía haciendo un proceso de incidencia en toda la zona, desde Sanyú hasta Palo Seco. Entonces lo que hacemos es, cuando se agudiza el problema de la violencia, ya no podemos entrar a los barrios a hacer el proceso de fortalecimiento de la paz, entonces nos toca replegarnos como organización y es allí como comenzamos a buscar otras iniciativas. Entonces lo

que hace la organización es mutar, entonces dice “ya no podemos entrar a los barrios, pero vamos a crear otras propuestas” y es así como hacemos el acercamiento con la Comisión Intereclesial para que entrara acá. Inicialmente, que se iban a crear dos zonas humanitarias [...] no sabíamos cómo se hacía una zona humanitaria, es un proceso de aprendizaje y en tres años nos ha tocado aprender mucho. Desde luego CORHAPEP vuelve a retomar su rol como organización protagonista y hemos dicho hay que replantear los ejes misionales que tenía en el marco del espacio humanitario [...] Recuerden y es importante que quede en su investigación nosotros somos CORHAPEP Espacio Humanitario o sea lo que representa hoy a Espacio Humanitario es CORHAPEP, el espacio humanitario fue una estrategia para que la organización pudiera mantenerse, por eso hoy nosotros resaltamos el espacio humanitario, pero creemos que el espacio humanitario no representa el proyecto organizativo y político de la organización. O sea, no sé si me explico, el que realmente recoge todo es la organización y lo que hace es que **el Espacio Humanitario es una estrategia** para nosotros mantener, una estrategia de consolidación (E4: 18).

A pesar de estas tensiones, es posible observar los reajustes de Puesto Nayero en las diferentes identidades organizativas, manteniendo, no obstante, esa relación sociopolítica y cultural establecida en referencia al Naya y, por otro lado, acudiendo a la exigencia de garantía de los derechos humanos en el discurso que movilizan. Más que pérdida de autonomía, es posible observar una capacidad importante de adaptación a los contextos y a las redes establecidas, recogiendo aprendizajes y depurando las limitaciones identificadas en procesos de evaluación organizativa que los conduce a una permanente actualización.

Como reconocen los integrantes del Espacio Humanitario, hasta ahora no han ejecutado ningún proyecto de intervención social con recursos del Estado, de los actores privados o de la cooperación internacional. Aunque esto último podría matizarse pues mantienen una comunicación permanente con organismos y agencias internacionales y nacionales que garantiza la veeduría a las acciones del Gobierno colombiano para proteger a sus líderes y a la población del sector.

Las entidades, organizaciones y actores con los que tienen relación han sido muy importantes para visibilizar las violaciones a los derechos humanos de la población que habita allí, para proteger a los líderes, para fortalecer los liderazgos y la organización para planificar el futuro, etc. En ese sentido, la interacción con otros agentes se mantiene como una promesa para la intervención en distintos ámbitos.

FUNDACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO SOCIAL (FUNDESCODES)

A continuación, el listado de organizaciones con la que establece relaciones:

Cuadro n.º 3.6. Actores identificados en la red de Fundescodes

1. Iglesia.	8. CNMH
a) Párroco local/capilla de la memoria	9. SJR
2. Comunidad	10. PCN
b) Barrio	11. Misereor
c) Madres de Punta del Este;	12. Comité interorganizacional
d) Semillero de la Paz	13. Comunidad internacional (Misereor, Comisión Europea, ACNUR, Swis-said, entre otras para la financiación de proyectos específicos), CICR
4. Rostros y Huellas	
5. Rostros Urbanos	14. Infantería de Marina
6. Acnur	15. Naciones Unidas (señalando la incidencia en el EPU)
7. Plataforma DESC (a través de las cuales asistieron al EPU) Acople	

Fuente: entrevista realizada a Gilberto López el 25 de noviembre de 2017

En la narrativa de Gilberto López, representante de Fundescodes, las condiciones iniciales para la creación de esta iniciativa fueron:

Cuando empezamos éramos un proyecto social, meramente y nace por la necesidad que en esa época y aun ahora existe en el sector, digamos muy baja cobertura educativa, sistema de salud... tres áreas: la educación, la salud y proyectos productivos, con eso empezamos. Hicimos un proyecto a una entidad católica de Alemania llamada Misereor y quedó aprobada (E5: 19).

Este vínculo tiene a su vez la mediación de la iglesia local y, específicamente, de la parroquia del sector del barrio Lleras. De acuerdo con el padre Ricardo Londoño Chica, la parroquia partió de la preocupación sobre la violencia registrada en los jóvenes y niños del sector. De ese modo, se plantearon objetivos de convivencia y de desarrollo del trabajo y de progreso, de valores e identidad, como un horizonte y una respuesta a estas situaciones (Fundescodes, 2017).

Desde 1998, han generado procesos con iniciativas específicas de formación; inicialmente, pequeños proyectos productivos, artísticos y culturales

(véase Ilustración n.º 3.5). Ese impulso comunitario y el apoyo misional de la Iglesia local le ha permitido a Fundescodes múltiples relacionamientos: hacia arriba con organismos de cooperación de la comunidad internacional y desde abajo con las víctimas del conflicto armado (las Madres de Punta del Este, entre otras).

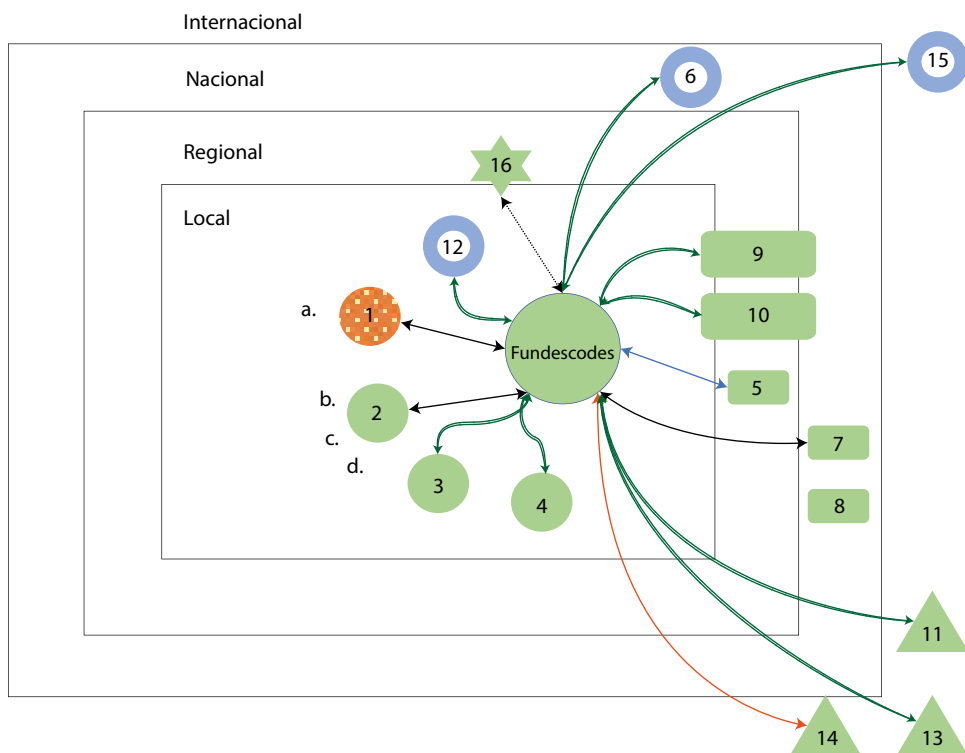


Ilustración n.º 3.5. Mapa de actores de Fundescodes

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y talleres.

Como en las otras experiencias, el discurso de Fundescodes se ancla en la defensa de los derechos humanos para estrechar los lazos con las víctimas (Sánchez y Gonzalo, 2018) y, al tiempo, mantener la financiación de sus proyectos con recursos de cooperación internacional, fundamentales para la sobrevivencia de la organización (véase Fotografía n.º 3.1 de la placa colgada en las paredes de su sede, la cual muestra la importancia de esta cooperación para el apoyo de procesos como el mantenimiento y el fortalecimiento de infraestructura, como la Casa Social y Cultural, que alberga la Capilla de la Memoria como espacio material y simbólico de los procesos desarrollados por Fundescodes).



Fotografía n.º 3.1. Placa en la Casa Social Cultural en la sede de Fundescodes

Fuente: María Eugenia Ibarra, fotografía, 2017.

Ese anclaje permite la interpretación de sus condiciones como demandas al Estado para garantizar los derechos humanos y acerca a la población, como sujeto de su atención, a las instituciones, que en lo local o nacional tienen responsabilidad sobre garantías para sus derechos (por ejemplo, la Infantería de Marina), o bien, que coinciden con estas narrativas por su misión. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en tanto que las víctimas son el centro nuclear de su acción, ha apoyado a esa identidad que se configura como preocupación social, política y jurídica, desde 2005, con los procesos de justicia transicional en el país iniciados con la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz.

Cuando yo llegué a Buenaventura hace más o menos unos 10 años, me doy cuenta que hay unos líderes y lideresas comprometidos desde los principios cristianos de defender la vida de las comunidades, de las personas de los jóvenes, ya que se estaba presentando una violencia excesiva contra las comunidades, ahí también descubrí lo que lo importante era el acompañamiento a las víctimas (Fundescodes, 2017).

En un contexto de conflicto armado y de violencia, el reconocimiento de las víctimas de la comunidad, como consecuencia de las violaciones de

DD. HH. asociadas a ese contexto, acerca a Fundescodes a organizaciones que atienden diversos tipos de victimización y la defensa de los DD. HH. (SJR, PCN, CICR). Este núcleo de organizaciones locales, nacionales e internacionales le permite actuar más allá de su ámbito barrial o sectorial y presentar sus demandas como muestra del universo bonaverense (véase Fotografías n.º 3.2 y n.º 3.3 de la muestra artística producida por los jóvenes de Buenaventura para presentar las problemáticas que viven).



Fotografías n.º 3.2 y n.º 3.3. Muestra de murales que se exhiben en la sede de Fundescodes

Fuente: María Eugenia Ibarra, fotografías, 2017.

De igual forma, hacia abajo, las redes conformadas por la articulación a proyectos o por cercanía a Fundescodes se sostienen a su vez en ese mismo anclaje de los DD. HH. con los miembros de la comunidad. Como señala Gilberto López, “algo fundamental era que todo el que llegue aquí, debe aprender derechos humanos... todo el que llegue, joven, niño o adulto (E5: 3).

O bien, el acompañamiento coordinado a procesos emblemáticos como las Madres de Punta del Este, en el que coinciden con organizaciones

como el SJR, Rostros y Huellas, Rostros Urbanos, entre otros. Estos discursos y procesos tienen efectos en la capacidad de convocatoria que Fundescodes ha logrado irradiar tanto en la zona rural como en parte de la zona urbana, con una alta participación de la población:

“No es tanto la presencia únicamente acá, sino que ya se ha hecho intervención en la comuna cinco, comuna cuatro, comuna siete, en la comuna doce, en la comuna seis. Cuando estábamos con... hacíamos en el sector rural,... y Mallorquín. Pero ya... no está, digamos ahora en la parte formativa, el diplomado lo estamos haciendo con docentes que son de Anchicayá... Sí de la zona rural, la idea es que la réplica o el trabajo de grado que lo van a hacer allá con las diferentes instituciones educativas, tenemos ya una entrada como tal...bel proceso; el trabajo de grado como resulta” (E: 5).

Las tensiones que genera el desarrollo de megaproyectos de infraestructura (Puerto de Agua Dulce, el Malecón...) distancian esta organización del sector privado local al considerar que los propósitos del sector son antagónicos con los intereses comunitarios, por lo cual en la red de relaciones se distancian las iniciativas o encuentros con el sector privado.

Esta experiencia de relacionamiento es un ejemplo de cómo las organizaciones van virando en los objetivos iniciales con los cuales surgieron. Ya sea por motivaciones de los integrantes, de los líderes o por iniciativas de los beneficiarios de sus acciones, esta organización se va inmiscuyendo en otros ámbitos de actuación y, de ese modo, se va conectando con otros actores que favorecen u obstaculizan el logro de sus objetivos. En ese sentido, la red de relaciones se amplía y surgen nuevas formas de cooperación, de alianzas que se suman al entramado organizativo que se va armando en el puerto. Así mismo, van surgiendo nuevos liderazgos, se cuestionan las formas de cooperación de algunos actores y se amplían las formas de exigencias al Estado y a los actores que ejercen violencia contra la población. Esto los va posicionando como un agente clave en la solución de problemas, en la planeación del futuro y como un referente para crear nuevas formas organizativas.

MAPA DE RED TOTAL

Ahora bien, para una suerte de síntesis de la articulación de relaciones e intereses de las organizaciones descritas puede visualizarse un mapa que esboza la estructura de red total que se configura y que resulta de los múltiples relatos recogidos.

El mapa de red total es un esbozo que representa la estructura y las relaciones parciales que deben complementarse con más y mejor información que provean sus actores. Aun así, sirve de referencia para construir una mirada global sintetizada de la revisión de los relatos de cada uno de los actores y organizaciones entrevistadas y convocadas a los talleres sobre sistematización de experiencias realizados en el marco de este proyecto.



Ilustración n.º 3.6. Mapa de actores de la Red total

Fuente: entrevistas a líderes sociales realizadas entre septiembre de 2017 y enero de 2018

Se identificaron inicialmente aquellos actores y escenarios vinculados a la organización analizada y se estimó si la presencia de los actores vinculados tiene un carácter local, nacional o internacional. Dispuestos los actores con presencia en estos escenarios, se graficaron algunas relaciones identificadas durante el proceso de codificación y sistematización de las entrevistas, diferenciando las relaciones de cooperación y alianzas y, por otro lado, la calidad de dicha relación en términos de distancia o cercanía, todo centrado en el actor de referencia (véase listado de entrevistados, Tabla n.º 3.1 al inicio de este capítulo). Para el mapa de red total, la gráfica espacial sigue los lineamientos generales, pero en ella se hace una síntesis de lo identificado en los mapas de red de cada organización; la intención

es identificar los actores generadores de la mayor cantidad y diversidad de interacciones y los tipos de relación con las otras organizaciones. Por otro lado, se identifican los puntos o escenarios de encuentro que darían cuenta de cierta articulación de intereses y acciones en común. La siguiente es la interpretación sobre el mapa de red total:

Las relaciones que se establecen por derivación o por ruptura (Anmucic-Red Mariposas, Rostros y Huellas-Rostros urbanos) representan unas relaciones de distanciamiento, ya sea por los énfasis ideológicos de las organizaciones o en función de las formas de intervención. Si bien son pocas las relaciones encuadradas en términos de ruptura, es importante indicar que se presentan según algunas coyunturas que hacen posible esa derivación o ramificación. Por ejemplo, la relevancia del enfoque de género en las políticas nacionales o el de juventudes en las políticas locales, o bien, la centralidad que se les reconozca a las víctimas en el contexto nacional y local.

Estos enfoques también pueden obedecer a un modo de intervención estatal que crea objetos y sujetos de intervención, que convergen o se adaptan a discursos y prácticas cuyo horizonte se centra en la promesa de nuevos derechos sociales.

A esta condición se le pueden dar interpretaciones diversas. Por ejemplo, como señala Nancy Fraser,

Estos medios son los procedimientos burocráticos y el dinero. Estructuran los derechos, beneficios y servicios sociales del sistema de bienestar. Y al hacerlo le quitan poder a los clientes, haciéndoles depender de burocracias y terapeutocracias y apropiándose de su capacidad para interpretar sus propias necesidades y problemas vitales (Fraser, 1990, p. 75).

Estas formas de intervención señaladas por Fraser desvirtuarían la condición de ciudadanos con derechos y convertirían a los pobladores en clientes institucionales que se benefician de los servicios estatales. De ese modo, los agentes estatales “hinchán” los roles de consumidor y de cliente que les permiten a los usuarios de los servicios acceder a sus derechos: “La reproducción simbólica queda desestabilizada, las identidades se ven amenazadas y se desarrollan tendencias a la crisis” (Fraser, 1990, p. 76).

En el caso colombiano, un ejemplo paradigmático lo constituirían las mujeres. En los últimos años, los programas estatales construyeron un cliente con un rol de género que es, paradigmáticamente, un rol femenino: mujeres pobres, jefes de hogar, adultas mayores, víctimas de la violencia política: viudas, esposas, madres y mujeres agredidas sexualmente, demandan beneficios no como individuos, sino como miembros de hogares “defectuosos”.

Estos clientes de los servicios sociales son estigmatizados; aceptan acceder a la vigilancia, al acoso administrativo y soportan la dependencia de las burocracias estatales para garantizar sus derechos básicos. Es decir, se ajustan a las reglas y rutinas de la política.

Este aspecto permite observar que el rol feminizado del sujeto de intervención perpetuaría la subordinación de las mujeres de una forma “modernizada” y “racionalizada”. Por lo anterior, tal como lo hizo el movimiento feminista anglosajón y europeo a finales del siglo pasado, el movimiento feminista colombiano lucha por la autonomía de las mujeres, es decir, “por la suficiente cantidad de control colectivo de los medios de interpretación y comunicación que les permita a las mujeres participar a la par con los hombres en todo tipo de interacción social, incluida la deliberación política y la toma de decisiones” (Fraser 1990 p. 85). Lo cual implica, entre otras cosas, la reinterpretación de los significados sociales de los cuerpos de las mujeres. Es a este tipo de lucha que se vinculan las mujeres de Anmucic cuando se separan de la Anuc, y después cuando contribuyen a fundar la Red Mariposas de Alas Nuevas.

En una línea similar, Javier Auyero (2013) se refiere a esos sujetos de las políticas y programas sociales designándolos como pacientes del Estado, precisamente, porque su principal cualidad es esperar con paciencia los beneficios que les otorgan las instituciones.

Para este autor, la mayoría de vidas marginales transcurren en un tiempo orientado y manipulado por agentes poderosos, que él denomina *tempografía* de la dominación. Su interés teórico y empírico es el funcionamiento de la dominación política en sectores urbanos pobres y se centra en los fundamentos objetivos y en los efectos subjetivos de la dominación. Él considera, siguiendo a Roseberry (1994, p. 357 citada en Auyero, 2013), que el Estado define y crea ciertos tipos de sujetos e identidades y que lo hace a través de sus oficinas y rutinas, trámites y papeles fiscales de licencia y registro. Por ello, es muy importante reconocer las prácticas estatales, es decir, la forma en que se relacionan e interactúan los pobres con los agentes estatales. Estos aspectos se pueden ver, claramente, en los sujetos que tratamos en esta investigación: víctimas del conflicto armado, jóvenes que buscan oportunidades de empleo y estudio, mujeres rurales y populares, afrodescendientes e indígenas que reivindican sus identidades y la protección de sus territorios, entre otros.

No obstante las interpretaciones enunciadas, esa clientela y esas relaciones determinadas desde una relación de arriba hacia abajo pueden ser interpeladas por las formas de agencia que movilizan estratégicamente esas identidades configuradas desde el discurso de género, etario o victimizante,

movilizando así prácticas en relación con los riesgos o ventajas atribuidas a la pertenencia a entramados institucionales u organizacionales; una forma de empoderamiento no visible en una perspectiva ahistórica y desprovista de contexto. En cierto sentido, existiría una interdependencia necesaria, con desigualdad de recursos entre los actores y con competencia para acceder a los mismos. Los casos de Puente Nayero o de Rostros Urbanos pueden ilustrar esta condición.

Esos enfoques, identidades y condiciones comunes experimentadas por las organizaciones también en sus transformaciones dinamizan formas y procesos de autonomización; esto es, la asimilación de discursos y prácticas en el orden de la intervención, la gestión y la articulación con otros actores, que a su vez hacen posible la ramificación o independencia de organizaciones de las que hicieron parte o de las que promovieron su existencia como organizaciones locales. Estas derivaciones resultan igualmente estratégicas como las generadas en las relaciones de ruptura, pero, a diferencia de estas, se reconoce un proceso de capitalización de las prácticas formativas, de incidencia e intervención, permaneciendo así las relaciones de manera más estable, con articulaciones y alianzas en coyunturas o en procesos más sostenidos. En este tipo de relaciones establecidas por derivación se encuentran, por ejemplo, los Consejos Comunitarios asociados al PCN, el Espacio Humanitario Puente Nayero, Rostros Urbanos y Anmucic, estos dos últimos que, a la vez que se derivan del apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, respectivamente, coexisten con aquellas de ruptura con su organización de referencia, mostrando como efecto la transformación de las relaciones de acuerdo con coyunturas o intereses de orden estratégico, tanto al interior de las organizaciones mismas como respecto de sus acciones en lo local.

Otras relaciones están dadas en una suerte de coexistencia o yuxtaposición de las identidades organizacionales, que son indicadores además de sus énfasis y orientaciones prácticas, como aquellas referidas a las diadas de CORHEPAP/Espacio Humanitario Puente Nayero, Pastoral Social/Fundescodes, PCN/Palenque el Congal, que parecen confundirse por las relaciones dadas entre los términos de la diada, pero, a la vez, estas identidades permiten un uso estratégico de sus formas de reconocimiento, lo que posibilita para ellas la ampliación de las redes más allá de la escala local.

De especial interés es el caso del Espacio Humanitario Puente Nayero, pues esta identidad organizacional podría considerarse, además de un escenario de cohesión, como uno de tensión entre las otras organizaciones de la red. Es así como la identificación como Espacio Humanitario intenta

matizar su asimilación o absorción con la figura de las Comunidades de Paz promovidas por la Comisión Intereclesial. En consecuencia, la noción identidad y reconocimiento como Espacio Humanitario posibilita la articulación interorganizacional sobre el principio de la neutralidad en medio del conflicto y logra convocar como escenario de encuentro a organizaciones nacionales e internacionales en una coyuntura específica en Buenaventura. Por otro lado, se mantiene el estatus de autonomía al subsumir, por parte de sus líderes, el Espacio Humanitario como estrategia de CORHEPAP, esta última en tanto organización local, intentado así darle un sentido menos determinado o dependiente a esta forma organizativa. Este pendular recoge el movimiento entre las condiciones de sujeción y las de independencia, en todo caso, interdependencia de actores y autonomía relativa de las organizaciones.

Algunas de las intervenciones, por ejemplo, han sido posibles gracias a alianzas entre organizaciones que funcionan como redes de apoyo para el logro de los objetivos de la propuesta humanitaria. Los líderes del Espacio Humanitario han hecho un gran esfuerzo para recoger experiencias de otras zonas del país e intercambiar experiencias para implementar su espacio a nivel local.

[...] en vista de lo que la Comisión vio, me contactaron con otras experiencias humanitarias del país, también hicimos un trabajo muy secreto de documentación de los asesinatos y las desapariciones forzadas. Fuimos a conocer Jiguamiandó y Curvaradó, pero cuestionábamos que fuera a servir porque es una experiencia rural; después conocimos la iniciativa de Civipaz, en Meta, y tomamos la decisión de crear nuestro espacio. Todo fue secreto, la comunidad no lo sabía porque los paramilitares estaban adentro y se podían enterar (E4: 6).

La agencia en red posibilitó el sostenimiento del Espacio gracias a los aliados estratégicos de entidades como la Comisión Intereclesial y algunos activistas internacionales que apoyaron la iniciativa en los momentos de amenazas más graves. Otro escenario/actor en el mapa de red total es el Paro Cívico de Buenaventura de 2017, que al igual que el Espacio Humanitario Puente Nayero logra convocar a múltiples organizaciones que, a pesar de sus diferencias, se unen por propósitos comunes en un proceso de cambio e interpelación de las problemáticas locales que los vincula en una coyuntura.

Una conclusión provisional en relación con las experiencias individuales y organizacionales, así como de las interrelaciones descritas, está en la necesidad de comprensión de unas dinámicas complejas, en las que

los individuos, organizaciones y las formas de acceso a los bienes y derechos públicos interactúan, influenciándose unas a otras de forma continua. Es posible, por lo tanto, el seguimiento organizacional como una escala de explicación de la movilización social, pero a su vez la mirada es integral si se reconoce la experiencia de los agentes que circulan, se conectan, fragmentan y se vuelven a reorganizar, configurando entornos de mayor o menor capacidad para vincular las diferentes expectativas y demandas en el puerto con las redes establecidas en niveles locales e internacionales, que funcionan como medios de legitimación y respaldo a sus movilizaciones y exigencias.

A la vez, es fundamental comprender las condiciones históricas del puerto y la forma en que se han configurado diversas ciudadanías, ancladas en la diversidad cultural, en los enfoques diferenciales, etarios y de género, entre otros, que confluyen en coyunturas en las que las demandas y expectativas oscilan entre la espontaneidad de la agregación de intereses en movilizaciones, marchas, espacios de participación, y a su vez que en estos escenarios se hace visible el acumulado histórico en la construcción de subjetividades y constreñimientos materiales ubicados en los márgenes, que encuentran en las redes circulantes en el puerto unas formas de representación legítimas ante las ilegitimidades de otras formas de representación o ante la dependencia y subordinación de las mismas. Hasta aquí, un punto de referencia importante para comenzar la discusión sobre los límites y alcances de la denominada gobernanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Auyero, J. (2013). *Pacientes del Estado*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
- Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (2010). *Hacia una sociedad más incluyente y próspera 2040*. Ciudad de Panamá: CAF.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., y Passeron, J. C. (1975). *El oficio del sociólogo: presupuestos epistemológicos*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Bouvier, P. (2007). *Le lien social*. France: Folio Essais.
- Colegio Colombiano de Psicólogos y Universidad del Valle. (Colegio Colombiano de Psicólogos). (2018, mayo 4). *Talentos en la construcción de paz: experiencias desde la Psicología en Colombia* [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=ojS8gM5WoWM>
- Collins, R. (2009). *Cadenas de rituales de interacción*. Barcelona: Anthropos.

- Escobar, A. y Pardo, M. (1996). Movimientos sociales y biodiversidad en el Pacífico colombiano. En A. Escobar y A. Pedrosa (comps.), *Pacífico: ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano* (pp. 283-322). Bogotá D. C.: Cerec - Ecofondo.
- Fraser, N. (1990). ¿Qué tiene de crítica la teoría crítica? Habermas y la cuestión del género, en S. Benhabib y D. Cornell (eds.), *Teoría feminista y teoría crítica: ensayos sobre la política de género en las sociedades del capitalismo tardío* (pp. 49-88). Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació.
- Fundescodes. (de Fundescodes). (2017, julio 26). *Homenaje a Ricardo* [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=OrP-2Hg7eIM>
- Guerrero, F. (2013). El desplazamiento forzado como contexto de una ciudadanía excepcional. *Revista Ópera* (13), 123-142
- Holston, J. (2009). La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas globales: un estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la justicia social. En G. Delamata (ed.), *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil* (pp. 46-65). Buenos Aires: Biblos
- López, M., Alcázar, F. y Romero, P. (2007). Una revisión del concepto y evolución del capital social. En J. Ayala (ed.), *Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro. Rioja, España: Universidad de la Rioja*.
- Rubio, M. (1997). Perverse Social capital - Some Evidence from Colombia. *Journal of Economic Issues*, 31(3), 805-816.
- Sánchez, G. y Gonzalo, J. (2018). Genealogía y políticas de la memoria. Momentos y convergencias de la enunciación social de la memoria del conflicto armado en Colombia. *Análisis Político*, 31(92), 96-114.
- Schiavo, E.; Gelfuso, A. y Vera, P. (2017). El derecho a la ciudad. Una mirada desde América Latina. *Cad. Metrop.* [São Paulo] 19(38), pp. 299-312.
- Sorj, B., y Martuccelli, D. (2008). *El desafío latinoamericano. Cohesión social y democracia*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI - Instituto Henrique Cardoso.
- Verdadabierta.com. (19 de Febrero de 2014). *Verdadabierta.com*. <https://verdadabierta.com/multitudinaria-marcha-contra-la-violencia-en-buenaventura/>

POTENCIALIDADES DE LA GOBERNANZA LOCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN

Lina Fernanda González Higuera¹
Freddy Alfonso Guerrero Rodríguez²
María Eugenia Ibarra Melo³
José Fernando Sánchez Salcedo⁴
Adriana Espinosa Bonilla⁵

INTRODUCCIÓN

En esta investigación no se establecieron criterios rígidos ni para sistematizar ni para evaluar las intervenciones que decidimos estudiar porque preferimos indagar primero en sus características, en los actores con los que interactúan y en los elementos del contexto político, económico y social

¹ Profesora, Grupo de Investigación Democracia, Estado e Integración Social, Deis, Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

² Profesor, Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad, Bitacus, Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

³ Profesora, Grupo de Investigación Sociedad, Historia y Cultura, Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso, Universidad del Valle.

⁴ Profesor, Grupo de Investigación Sociedad, Historia y Cultura, Acción Colectiva y Cambio Social, Universidad del Valle.

⁵ Mientras trabajó en esta investigación, se desempeñaba como profesora de la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia. Hoy es investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

en el que ellas surgieron y se han desarrollado. Por lo anterior, el ejercicio de sistematización que compartimos en el primero y segundo capítulo nos permite presentar *un balance de los principales elementos que caracterizan las buenas prácticas de intervención*. Como también *las grandes dificultades* que enfrentan las organizaciones sociales y comunitarias para acceder a los recursos que ofrecen las instituciones del Estado, los organismos internacionales y los agentes privados para superar sus problemas, garantizar sus derechos y crear instituciones que contribuyan a impulsar los cambios deseados por sus beneficiarios o por la comunidad.

Para hacer este análisis de las prácticas de intervención, primero revisamos el contexto político institucional en el cual surgieron. Buena parte de las iniciativas sociales y comunitarias emergen como una respuesta ante la precaria acción del Estado, o como formas de resistencia frente a fenómenos como el conflicto armado o frente a condiciones estructurales como la pobreza, pero también como respuesta al llamado que hacen otros actores para movilizarse o para recibir beneficios y acceder a los servicios del Estado.

La forma en que el Estado ha asumido históricamente sus relaciones con la sociedad civil en la región del Pacífico se expresa en su apuesta en el funcionamiento de la institucionalidad y el sistema político. Por eso, dedicamos especial atención a presentar el funcionamiento de esas redes de la política en el distrito de Buenaventura, analizando la relación entre grupos políticos locales y élites regionales y nacionales, así como la incidencia del sistema político sobre la gobernanza local. Al respecto, es importante mencionar el vínculo existente entre buenas prácticas de intervención y gobernanza, pues las primeras reflejan las acciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la calidad de un régimen político e impactan su calidad de vida.

En un segundo momento, el análisis se concentra en las organizaciones con las que tuvimos más contacto, destacando sus buenas prácticas, así como las iniciativas de otros actores que identificamos en la revisión documental; por supuesto, atendiendo siempre a la relación sociedad-Estado-mercado. Después de esta sección le dedicamos un acápite a interpretar el paro cívico que tuvo lugar entre mayo y junio de 2017 en Buenaventura, de acuerdo con las apreciaciones de los participantes y de los líderes entrevistados en los tres talleres realizados para esta investigación.

EL CONTEXTO POLÍTICO: ACTORES Y REDES DE POLÍTICA EN BUENAVENTURA

La incidencia del contexto económico en la reconfiguración del poder en el puerto

La historia de Buenaventura ha estado asociada generalmente a su función de puerto. Desde la década de los sesenta del siglo pasado hasta 1993, funcionó el puerto más importante del país bajo el manejo de Puertos de Colombia o Colpuertos, una empresa estatal. Durante el gobierno del presidente César Gaviria, con marcado sesgo neoliberal, se inició un proceso de privatización que cambió de manera dramática el escenario social, económico y político de Buenaventura.

La empresa llamada a sustituir a Colpuertos y a consolidar su proceso de modernización y privatización ha sido la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. (SPRBun). La compañía fue creada en 1993 y, en 1994, se adjudicó la concesión para administrar el terminal marítimo de Buenaventura por 20 años, es decir, hasta el 2014. SPRBun es una empresa de economía mixta de derecho privado con 82,5% de propiedad privada, 15% perteneciente a la Alcaldía de Buenaventura, y el 2,5% restante es propiedad de los Ministerios de Transporte y Agricultura de Colombia.

Después de muchas transacciones de compra y venta de acciones de la SPRBun durante estos veinte años, tiene un grupo de socios minoritarios como el líder sindical Álvaro Ortiz, Víctor Rebolledo y la viuda de Luis Marmato. Sin embargo, la sociedad está controlada en un 80%, por los siguientes dueños:

- **Grupo Parody:** de la familia Parody Décheona, cuyo representante en la junta es Manuel Isaac Parody Décheona, hermano de la exministra de Educación Gina Parody.
- **Grupo Harinera del Valle:** de la familia Paz Bautista, cuyo representante es Alfonso Ocampo Gaviria, quien es el presidente de la compañía.
- **Grupo Ciamsa:** Comercializadora Internacional de Azúcares y Mielles, conformada por los doce grandes ingenios del Valle del Cauca, cuyo representante legal es Carlos Mira.

Del sector estatal se encuentran los siguientes socios:

- **Alcaldía de Buenaventura:** (15%) cuyo representante en la junta directiva es el actual alcalde.
- **Ministerio del Transporte:** (2%).
- **Ministerio de Agricultura:** (0.5%).

Dichos propietarios son en su mayoría de otras regiones del país y su compromiso hacia Buenaventura es escaso, pues su interés es netamente empresarial. Como lo expresa el artículo de Bonilla (2014):

Los grandes inversionistas, directivos y propietarios no viven allí. Llegan en sus aviones privados a las juntas y toman los vuelos de regreso en la tarde, sin contaminarse, sin involucrarse con la tragedia local, ni con el gobierno de turno, atrapados desde hace décadas en la corrupción y cómplices del otro gran negocio del puerto: el narcotráfico.

La paradoja que vive la ciudad al tener el puerto más moderno del país y, a la vez, una de las poblaciones más pobres de Colombia; ha sido denunciada una y otra vez por las organizaciones de base y por la academia. Mientras que su red portuaria es considerada la más importante del país y aporta a la Nación más de 5 billones de impuestos al año (El País, 2017), el retorno de este dinero no se refleja en la calidad de vida de sus habitantes.

A pesar del alto dinamismo comercial, se estima que la tasa de desempleo es del 62% y el empleo informal alcanza el 90,3% (DNP, 2014). Si bien las obras del puerto requieren de fuerza de trabajo, los habitantes manifiestan que los empleos se ofrecen a personas de otras ciudades y no a los bonaverenses. Esta situación se refleja en otros indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional, que mientras a nivel nacional es del 49%, en Buenaventura es del 66%, como lo afirma esa misma institución.

Por otro lado, mientras esta región del Pacífico colombiano tiene una invaluable riqueza hídrica; el 71% de sus habitantes disponen de agua solo hasta por 8 horas continuas y cada dos días, y la cobertura de alcantarillado apenas llega al 60%. En materia de salud, la situación no es muy diferente. Buenaventura no cuenta con un hospital de segundo o tercer nivel; el más importante es el Hospital Luis Ablanque, que no da abasto para los más de 370.000 habitantes del puerto (en la introducción de este libro se explica ampliamente la situación socioeconómica de la ciudad).

La inexistencia de una verdadera élite en el puerto

Los representantes políticos locales han estado desde hace casi veinte años ligados a las economías criminales del narcotráfico; lo que hace que su permanencia en el poder sea breve. La relación de estos dirigentes con las élites políticas regionales, debido a su transitoriedad, no alcanza a configurar una élite de poder con relativa estabilidad en la ciudad.

Su accidentada trayectoria ha generado una gran pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la alcaldía y una gran movilidad de liderazgos emergentes que, a mediano y largo plazo, producen inestabilidad y debilidad

institucional, permitiendo constantes relevos en el poder. Tal como menciona Gamboa, los constantes escándalos en los que se han visto involucrados varios alcaldes del puerto están asociados a la procedencia del dinero de sus campañas para ocupar el cargo. Para esta autora, en Buenaventura se habla de alianzas entre narcotraficantes y candidatos, los primeros financian y a cambio reciben ventajas, privilegios, puestos e impunidad (Gamboa, 2015, pp. 76-77).

Estas prácticas tienen como consecuencia que no se consolide una clase política propiamente dicha, ni una élite, en el sentido de Pareto (1979), quien la equipara con un grupo con actitudes “superiores” que aseguran su legitimidad. Es decir, que las élites están compuestas por todos aquellos que manifiestan unas cualidades excepcionales o dan prueba de aptitudes “superiores”, asociadas al prestigio social.

Por otra parte, podría plantearse, aplicando la teoría de las élites de Mosca (1939), que, aunque las élites están compuestas por la minoría de personas que detentan el poder en una sociedad, esta minoría puede asimilarse a una clase social y que aquello es lo que constituye su fuerza y les permite ejercer el poder. De acuerdo con este planteamiento, es el carácter de clase, estructurada y organizada, el que hace posible detentar el poder en el largo plazo. En ese sentido, en Buenaventura no se podría hablar de una élite política local, porque los últimos alcaldes elegidos fueron propuestos por diferentes de grupos de poder, fuertemente dependientes de las élites políticas vallecaucanas, es decir de los llamados “caciques” políticos del Valle del Cauca, pero no de grupos locales propiamente dichos. Adicionalmente, estos líderes emergentes logran llegar al poder, pero no logran construir una trayectoria política que les permita volver a ocupar cargos en otras instancias o volver a la alcaldía como mandatarios. En las contiendas electorales, siguen aspirando, pero difícilmente logran cargos de representación importantes.

Con relación a los líderes con gran influencia política, es importante mencionar algunas excepciones como la de Juan Carlos Martínez; líder político natural de Timbiquí condenado judicialmente por sus actividades ilícitas y cuyos nexos con grupos delincuenciales lo llevaron a la cárcel. A pesar de sus actividades ilegales, hay que destacar el gran poder político que acumuló y su influencia mucho más allá de la región del Pacífico colombiano. También, en los últimos años, Edison Delgado, un bonaverense con una destacada hoja de vida, fue senador por el Partido Liberal.

En la política nacional reciente, hay una tendencia a la hiperfragmentación, que consiste en la aparición de múltiples fuerzas y grupos políticos que se configuran sobre todo en las coyunturas electorales. Debido a que

la multiplicación de competidores eleva los costos de búsqueda de votos, la consecuencia es el encarecimiento de la actividad política. Esto puede generar incentivos a la participación de actores ilegales que financian la política electoral.

Los actores ilegales son una fuente de recursos en función de la relación que pueden establecer con grupos significativos de electores. Gustavo Duncan (2014) plantea que

[...] la presencia continuada de actividades ilegales y actores ilegales en territorios caracterizados por la débil presencia estatal y la escasez de alternativas de integración económica puede dar lugar a situaciones en las que aún sin evidencias de constreñimiento directo los ilegales pueden jugar un rol decisivo en la orientación del comportamiento político de los votantes (p. 45).

Los actores ilegales asumen la provisión de algunos bienes públicos como seguridad o infraestructura, y pueden llegar a sustituir la presencia estatal, lo que termina configurando una suerte de dominación legítima (Duncan, 2014).

Por lo anterior, se puede concluir que en Buenaventura asistimos a un escenario en el cual la política es ejercida por líderes emergentes que establecen alianzas con élites políticas regionales y que, a nivel local, tienen gran dependencia de los actores ilegales. Este podría ser un factor que explique la transitoriedad de los actores políticos, y que, a su vez, influye en la ausencia de clases dirigentes o élites locales que se sostengan en el tiempo y garanticen una relativa estabilidad de la política local.

Redes políticas en Buenaventura (1995–2018)

Entender el entramado de contradicciones descrito atrás implica también preguntarse por el liderazgo político de Buenaventura y la gestión de las autoridades locales en representación de los intereses de la población. El balance de los últimos diez alcaldes da cuenta de manejos indebidos que no han permitido el desarrollo de Buenaventura como ciudad-puerto de Colombia: seis han sido capturados o se han visto involucrados en líos judiciales, uno fue asesinado, uno se encuentra exiliado en los Estados Unidos y solo dos terminaron su gestión sin ningún señalamiento: los liberales Bernardino Abad (1990) y Edinson Delgado (1992). A continuación, analizamos los liderazgos políticos que han surgido después de estos dos alcaldes mencionados, es decir, desde el año 1995 (véase Ilustración n.º 4. 1).

En este periodo, puede entreverse la complejidad de las redes políticas en Buenaventura y cómo empiezan a gestarse las relaciones entre los líderes, los partidos y los actores criminales que conviven en el puerto.



Ilustración n.º 4.1. Alcaldes de Buenaventura 1992-2015

Fuente: elaboración propia.

Período 1995-1997

Para este periodo resultó electo alcalde el liberal José Félix Ocoró Minotta, que había sido director de Planeación Municipal (1992) y Secretario de Obras Públicas (1993) durante la administración del también liberal, Edinson Delgado. En las elecciones de 1994, se enfrentaron dos liberales: Freddy Salas avalado por el Movimiento Social del Pacífico (Mispa) y José Félix Ocoró, con el respaldo del movimiento La Fuerza. Héctor Copete, también miembro de La Fuerza, intentó ser candidato con el apoyo de Edinson Delgado, pero no lo logró. Desde entonces, se puede observar una fuerte incidencia del Partido Liberal y una clara fragmentación e individualización de la política en el puerto, representada en “múltiples liberalismos”, aparentemente distintos, y en grupos políticos que se configuran principalmente ante las coyunturas electorales.

Para mediados de 1990, el movimiento La Fuerza “se vinculó con la Fuerza Liberal Socialdemócrata, liderada por Manuel Francisco Becerra, que articulaba un número importante de redes locales del departamento y llegaría a convertirse [...] en la fuerza más importante del Valle” (Sánchez y Valencia, 2011, p. 4). Más adelante, para el año 1997, 14 de los 19 concejales electos estaban adscritos al Partido Liberal, en sus diferentes facciones, como se muestra en la Tabla n.º 4.1.

Durante este periodo de gestión, se intensifica la crisis fiscal identificada en la administración anterior, que moviliza la protesta social, especialmente por parte de los trabajadores de las Empresas Públicas Municipales (El Tiempo, 1998). José Félix Ocoró fue investigado por supuestas irregularidades relacionadas con el pago de nóminas paralelas, peculado por apropiación y falsedad en documento público. En 1997 fue capturado por cuatro meses y luego dejado en libertad, al no encontrarse méritos suficientes para su detención.

Tabla n.º 4.1. Composición del Concejo de Buenaventura (1997)

Nombre	Filiación política
Ledis Torres Copete	Conservadora holguinista
Adiela Marínez	Liberal holmista
Omar Torres	Conservador holguinista
Humberto Gutiérrez	Liberal cordobista
Wilson Candelo	Liberal del Movimiento Cívico Raíces
Hermínsul Valencia	Liberal del Movimiento de Integración Social del Pacífico (Mispa)
Eugenio Ruiz	Liberal holmista
Dionisio Panchano	Liberal independiente
Pablo Jaramillo	Liberal oficialista
Carlos Sitú	Izquierda liberal
Jorge Moreno	Liberal independiente
Bartolo Valencia	Liberal de la Fuerza Social Demócrata que dirige Francisco Becerra
Sonia Ospina	Liberal independiente
Martín Tovar	Conservador holguinista
Calixto Bonilla	Liberal del grupo del exsenador Carlos Abadía
Mariela Hinstrosa	Liberal cordobista
Pedro Arce	Liberal oficialista
Bismar Chunga	Conservador holguinista
Jaime Albornoz	Liberal londoñista

Fuente: elaboración propia con base en información de *El Tiempo*.
Pocos cambios en el concejo. (1997).

El fin de esta administración coincide con el fin del movimiento La Fuerza que lideraba Ocoró, también con la llegada de Juan Carlos Martínez Sinisterra a la política local, y a su vez con el inicio del llamado proceso 8000 (Sánchez y Valencia, 2011), que demostró la influencia del narcotráfico en la política nacional.

Período 1998–2000

En el marco del proceso 8000, Manuel Francisco Becerra, excontralor general de la Nación y líder de la red que articulaba a múltiples liberalismos

vallecaucanos, fue acusado de recibir dineros provenientes de los hermanos Rodríguez Orejuela, que lideraban el denominado Cartel de Cali, y fue condenado a 70 meses de cárcel (El Tiempo, 1997). Este acontecimiento posiblemente influyó en el debilitamiento de La Fuerza y en que el movimiento no lograra conseguir la alcaldía del puerto para el siguiente periodo.

Para ese entonces, se enfrentaron dos liberales: Jaime Mosquera, de La Fuerza (apoyado por el exalcalde José Félix Ocoró) y Freddy Salas, del Mispa (apoyado por Juan Carlos Martínez Sinisterra), allí resultó electo Salas. Según las fuentes entrevistadas por Sánchez y Valencia (2011), para alcanzar la alcaldía, Salas debió asumir importantes compromisos económicos con los narcotraficantes locales.

La administración de Freddy Salas se caracterizó por la crítica vehemente contra la gestión de su predecesor ante la situación del fisco municipal y acentuó las diferencias que marcarían los siguientes tres periodos de gobierno, en una lucha de poder entre los candidatos respaldados por Félix Ocoró y los contendores emergentes.

Este periodo se vio afectado por varios fenómenos, entre ellos un paro cívico, como consecuencia del plan de choque implementado para hacer frente a la crisis y la privatización de Colpuertos (El Tiempo, 1998), que trajo consigo el cierre de 565 empresas y un incremento significativo en las cifras de desempleo (Revista Semana, 2000).

La alianza entre el alcalde Freddy Salas y el diputado Juan Carlos Martínez marcó el inicio del Movimiento Popular Unido en Buenaventura (MPU), que avaló las aspiraciones a la Cámara de Representantes de Hemel Hurtado, en 1998. También aspiraron dos bonaverenses más al Congreso de la República: Edgar Roberto Carabalí y Edinson Delgado, pero ninguno logró su objetivo. Para el año 2000, un nuevo acontecimiento marcó el inicio de una nueva ola de violencia: la primera incursión de los paramilitares en la bahía de Buenaventura.

La ofensiva de los paras en la bahía comenzó el pasado 11 de mayo con la masacre de 12 habitantes en el corregimiento Zabaletas, ubicado a pocos kilómetros del casco urbano de Buenaventura. Al día siguiente varios grafitis aparecieron pintados en las paredes de las casas de los barrios Aduanal y La Independencia, en los que se anunciaba una 'limpieza social' y la llegada de los paras al puerto. Desde entonces, y hasta la semana pasada, los grafitis han proliferado en los muros de otros barrios y las autoridades y la comunidad sindicaron a los paramilitares de ser los responsables del asesinato de 52 personas en cinco masacres y en algunas muertes selectivas en los barrios marginales de la ciudad (Revista Semana, 2000).

A partir de este año, se intensifica la violencia por el control del puerto más importante de Colombia, entre las AUC y el frente 30 de las FARC que operaba con anterioridad en la zona. El abogado liberal Freddy Salas concluyó su mandato y, a pesar de que nunca se le comprobó ninguna irregularidad, resultó asesinado en extrañas circunstancias en el año 2002 en la ciudad de Cali.

Período 2001-2003

En las elecciones del año 2000 compitieron por la alcaldía dos candidaturas fuertes: Saulo Quiñones, funcionario de la administración anterior y candidato de Freddy Salas, y Jaime Mosquera Borja, apoyado por José Félix Ocoró, Juan Carlos Martínez Sinisterra y Hemel Hurtado. El alcalde electo fue el médico liberal Jaime Mosquera Borja, quien durante su gestión mantuvo relaciones conflictivas con el Concejo, aparentemente, por su distanciamiento con los dos grupos políticos más fuertes de Buenaventura. Su mano derecha fue Héctor Copete, que fue designado como Director de Planeación y lideró la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Buenaventura.

Esta administración es recordada por una promesa denominada “Agua las 24 horas”, en el marco de la cual se entregó el servicio público de acueducto y alcantarillado a Hidropacífico y a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB). Ambas entidades debían asumir varias obligaciones. Hidropacífico debía prestar el servicio, hacer el recaudo y diseñar los planes de infraestructura; mientras que la SAAB debía garantizar las obras necesarias para el mejoramiento del servicio. Este contrato se firmó por 20 años, es decir hasta el 2022, pero nunca cumplió el objetivo de mejorar el acceso al agua de la población bona-verense. Según Hidropacífico, “la SAAB nunca cumplió con su parte, por tanto, ellos no tenían la obligación contractual de hacer las plantas de tratamiento y mejorar el sistema de redes [...] Así las cosas, al año 2017, el 71% de los bona-verenses continúa con un suministro de agua de 8 horas cada dos días” (El Espectador, 2017). Jaime Mosquera Borja fue investigado por un contrato, pero esta denuncia no prosperó; en el último año de su mandato salió ileso de un atentado en su contra y, al finalizar su gestión, se exilió en los Estados Unidos por las amenazas de muerte contra él y su familia, presuntamente, de un frente de las Farc (El Tiempo, 2003).

Periodo 2004–2007

Para este periodo de gobierno, la alcaldía del puerto se disputó fuertemente entre los dos titulares del aval de las fuerzas liberales dominantes: el

candidato ya conocido, José Félix Ocoró y el médico liberal Saulo Quiñones. Héctor Copete también se presentó por el Movimiento Comunal y Comunitario, en una apuesta por continuar el proyecto del gobierno anterior. Sin embargo, tres semanas antes de las elecciones decidió declinar su candidatura y adherirse a la de José Félix Ocoró.

El alcalde electo fue el médico Saulo Quiñones, que se convirtió en el séptimo liberal en línea que ganaba la alcaldía de Buenaventura. Al poco tiempo de haber asumido su cargo, empezaron los señalamientos por presuntas irregularidades en su elección y tiempo después la Corte Suprema determinó que había recibido apoyo del Bloque Calima de las autodefensas. Para ese entonces, Juan Carlos Martínez había renunciado a su cargo en la Asamblea Departamental y fue elegido senador en el 2002, con 58.723 votos. Sánchez y Valencia (2011) afirman que tenía una importante influencia en el Concejo y que la mayoría de los concejales electos eran cercanos a él y a Ocoró. Solo 2 concejales respaldaban a Saulo: Stalin Ortiz y Edinson Mosquera Sánchez; por lo que le fue difícil gobernar (véase Tabla n.º 4.2).

Tabla n.º 4. 2. Composición del Concejo de Buenaventura para el periodo 2003-2007

Partido Liberal Colombiano	Votos	Partido Conservador Colombiano	Votos
Harrison Arboleda Sinisterra	1.378	Timoteo Ruiz Manyoma	1.177
Edinson Mosquera Sánchez	1.329	Jorge Eliécer Riascos Riascos	1.450
Stalin Ortiz Gutiérrez	1.375	Yaneth Ibáñez Angulo	1.177
Neley María Lara Hinestrosa	1.220	Polo Democrático Alternativo	Votos
Sonia Ospina Angulo	1.100	Rolando Caicedo Arrollo	1.497
Efrén Hernández Noviteño	1.091	Movimiento Equipo Colombia	Votos
Wilson Candelo Pardes	1.026	Leonardo Vidal Obregón	799
Movimiento Popular Unido MPU	Votos	Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia	Votos
Pablo Emérito Jaramillo	1.693	Eliécer Arboleda Torres	1.742
Jairo Hinestroza Sinisterra	1.472	Ricardo Bonilla Castro	878
Jorge Alonso Moreno	1.229		
Javier Rodríguez Viera	1.042		
Francisco Hurtado	1.027		

Fuente: Sánchez y Valencia. *Monografía Municipal Municipio de Buenaventura*. 2011.

La gestión de Quiñones se vio afectada, además, por un periodo de altos índices de violencia, con más de 2.000 muertos y 300 desaparecidos, como

resultado de la disputa territorial entre los paramilitares y las Farc (El País, 2011). En el año 2005, fue asesinado el dirigente liberal Julio César Viáfara y, casi un año después, el médico Eduardo Hernández Sitú, excandidato a la alcaldía y concejal del puerto en el periodo 2001–2003. Incluso, “cuatro funcionarios de la administración municipal fueron amenazados de muerte, mientras que otros cuatro y dos escoltas fueron asesinados” (Sánchez y Valencia, 2011, p. 15).

Saulo Quiñones fue sindicado por los presuntos delitos de contratación indebida y prevaricato por hechos asociados a construcciones escolares no realizadas y a la cobertura educativa. Para el año 2004, cuando llevaba menos de un año en el cargo, había firmado 190 contratos para la construcción y adecuación de colegios en la zona rural y, según las autoridades, en ese proceso se perdieron 700 millones de pesos (El Espectador, 2018). Por esta razón, en 2011, Quiñones resultó condenado y pagó su pena bajo la modalidad de casa por cárcel.

Periodo 2008-2011

En las elecciones del año 2007, se enfrentaron en las urnas dos candidaturas relevantes. La de José Félix Ocoró, por Convergencia Ciudadana, que contó con el apoyo de Juan Carlos Martínez; y la de Bartolo Valencia, que junto con Quiñones y Salas, venían enfrentando a Ocoró por varios periodos. En los resultados, Ocoró obtuvo 31.120 votos y por poco dobla la votación obtenida por Valencia (16.231 votos). El tercer lugar fue para Héctor Copeite, quien aspiraba por el recién llegado al puerto, Partido Social de Unidad Nacional y quien había sido un antiguo funcionario de Ocoró.

Tras las elecciones de 2007, Ocoró y Martínez dominan la política local, al lograr que cinco de sus aliados de Convergencia Ciudadana llegaran al Concejo: Robert Nel Asprilla, Noris del Carmen Cano, Wistong Valencia, Julio César Zambrano y María Yovana Rodríguez. A ellos se sumaron, Teresa de Jesús Guanga (Opción Centro), Eliécer Payán (liberal) y Álvaro Ortiz Rentería (liberal). Además de estos resultados, Martínez apoyó a Juan Carlos Abadía, que logró la Gobernación del Valle para el mismo periodo.

Para el año 2010, se aprobó el acuerdo que autorizó al alcalde a comprometer las vigencias futuras con el respaldo de 18 concejales, mientras la Contraloría Distrital empezó a hacer señalamientos por presuntas irregularidades del alcalde, que comprometía con destinación indebida más de 100.000 millones de pesos del presupuesto municipal (Sánchez y Valencia, 2011).

Finalmente, en octubre de 2011, José Félix Ocoró fue capturado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de

contratos. En el 2015, fue condenado a más de 18 años de cárcel luego de demostrarse la venta de un lote que generó un detrimento patrimonial de casi 400 millones y por presuntas irregularidades en la prestación de cobertura educativa (El Espectador, 2018). La procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años y la Contraloría Municipal también lo responsabiliza del detrimento patrimonial. Por su parte, Juan Carlos Martínez fue procesado y condenado por parapolítica, por la que pagó casi ocho años de cárcel y en abril del año 2018 fue condenado por 6 años más por enriquecimiento ilícito. Además, deberá pagar una multa de 600 millones de pesos y quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el periodo de su pena (Noticias Caracol, 2018).

Periodo 2012–2015

Para las elecciones del año 2011, se presentaron cinco candidatos: Héctor Copete, quien fue avalado en último momento por Cambio Radical; Bartolo Valencia, por el Partido Liberal; Luis Arbey Arias, por firmas; Eliécer Arboleda, por el Partido de la U; y Arlington Agudelo, por la ASI. Después de los comicios, resultó electo el liberal Bartolo Valencia.

Durante su gestión, tuvieron lugar múltiples escándalos en materia educativa, percibidos como una “sofisticación” del fraude de los denominados “alumnos fantasma”, descubierto en la administración de Félix Ocoró. En esta administración, se acuñan términos como “trasteo virtual de estudiantes”, la “vacuna por alumno” y el “reciclaje de fundaciones” (El País, 2014). Según un especial realizado por el diario *El País* sobre la corrupción en Buenaventura, entre el año 2012 y 2013 se adjudicaron millonarios contratos de educación a fundaciones inactivas según la Cámara de Comercio, y cuyo objeto social dice ser: dedicarse a actividades como “suministro de insumos químicos”, “vacunación de caninos y felinos”, “ecoturismo”, “crianza de peces en cautiverio” e incluso “construcción de centros bacanales”. En la misma investigación se establece que muchas de estas fundaciones ni siquiera cuentan con una sede propia o sus nomenclaturas no coinciden con las del municipio, y que “el tema de la cobertura es un negocio tan lucrativo en Buenaventura que cualquier casa de dos pisos, con tres cuartos, una sala y un baño, es un potencial colegio para educación básica primaria, educación media o de bachillerato” (El País, 2014).

La vacuna por alumno se entiende como una especie de impuesto que debían pagar colegios privados por cada alumno que les asignaran en cobertura y que el alcalde Valencia dijo desconocer. El trasteo virtual de estudiantes se descubrió tras la aparición de alumnos de la Curia registrados en cobertura, en zonas rurales apartadas, en las que no vivían. La misma

investigación de *El País* afirma que la corrupción educativa se gestó cuatro meses antes de que Valencia fuera elegido como alcalde.

Mientras Bartolo denunciaba, como candidato, actos de corrupción de José Félix Ocoró con el dinero de la educación, junto a él nació el hasta hoy desconocido ‘Grupo de los 100’, conformado por rectores de varios colegios, algunos de ellos ‘de garaje’, quienes aportaron económicamente a su campaña, a cambio de un trato preferencial en la distribución de cupos escolares (El País, 2015).

Después de numerosos hallazgos, Bartolo Valencia terminó preso por la adjudicación de contratos a los financiadores de su campaña, además de irregularidades en la cobertura educativa y los llamados “niños fantasma”, proceso en el que se desviaron 919 millones de pesos.

Periodo 2016-2019

Para este periodo, se presentaron las siguientes candidaturas: Bernardino Quiñones (Cambio Radical), Bernabé Mosquera (Partido Liberal), Edinson Mosquera (ASI), Eliécer Arboleda (Partido de la Unidad Nacional), Elvia Lucy Abonce (Partido Centro Democrático), Jaime Oswaldo Marínz (Partido Alianza Verde), Héctor Copete (AICO) y Gustavo Ruiz (MAIS). El ganador fue Eliécer Arboleda, que fue concejal durante dos periodos, edil de la Junta Administradora Local y presidente del Partido de la U en el puerto. Luego de prometer transparencia durante su campaña y afirmar que durante su mandato demostraría su honestidad, fue capturado por la Fiscalía en abril del 2018 luego de que, en menos de cuatro meses, se cayera en dos oportunidades gran parte de la fachada del hospital de Buenaventura a causa de fuertes lluvias, a pesar de que se habían invertido miles de millones para su arreglo. Junto con Arboleda, fueron capturados tres secretarios de despacho, un asesor jurídico, un asesor de planeación y cuatro contratistas que habrían permitido que se perdieran alrededor de 5.000 de los 10.000 millones de pesos destinados a obras para el arreglo y transformación del hospital de Buenaventura. Según la Fiscalía, se trata del único centro asistencial público en el puerto y por estos actos de corrupción está en riesgo de derrumbarse en cualquier momento y poner en riesgo el bienestar de toda la población bonaverense (El Espectador, 2018).

Los alcaldes electos en los periodos analizados entre 1995 y 2015, su filiación partidista y el estado de conclusión de su mandato se presentan a modo de síntesis en la Tabla n.º 4.3.

Además de analizar la transición entre los mandatarios locales, conviene revisar los cambios que ha experimentado el Concejo, como organismo

Tabla n.º 4.3. Alcaldes electos en Buenaventura entre 1995 y 2019

Periodo	Nombre	Partido político	Conclusión de mandatos
1995-1997	José Félix Ocoró Minotta	Partido Liberal Movimiento La Fuerza	Investigado por supuestas irregularidades respecto del pago de nóminas paralelas, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Estuvo encarcelado por cuatro meses durante su gestión.
1998-2000	Freddy Salas Guaitotó	Partido Liberal Movimiento Mispá	Fue asesinado en extrañas circunstancias en la ciudad de Cali, dos años después de finalizar su mandato.
2001-2003	Jaime Mosquera Borja	Partido Liberal	Se exilió con su familia en Estados Unidos, por amenazas de muerte, al finalizar su mandato.
2004-2007	Saulo Quiñonez García	Partido Liberal	Fue condenado y se le dio casa por cárcel, a menos de un año de iniciar su mandato.
2008-2011	José Félix Ocoró Minotta	Convergencia Ciudadana	Fue condenado por delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, irregularidades en la prestación de cobertura educativa y detrimento patrimonial de casi 400 millones de pesos. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años.
2012-2015	Bartolo Valencia	Partido Liberal	Fue arrestado por la adjudicación de contratos a los financiadores de su campaña, irregularidades en la prestación de cobertura educativa y los llamados “niños fantasma”; proceso en el que se desviaron 919 millones de pesos.
2015-2019	Eliécer Arboleda	Partido de la Unidad Nacional	Fue capturado por la Fiscalía en abril del 2018 por un nuevo escándalo relacionado con la infraestructura de salud.

Fuente: elaboración propia.

encargado de ejercer control y dar vía libre a la ejecución del presupuesto municipal. El Concejo de Buenaventura para el periodo 2016–2019 está integrado por 18 concejales de los siguientes partidos: 5 del Partido Liberal, 2 del Partido de la U, 2 del Partido Conservador, 2 del Polo Democrático Alternativo, 1 de MAIS, 1 de Opción Ciudadana, 1 de Cambio Radical, 1 de la Alianza Verde, 1 de la AICO, 1 de la ASI y 1 del Centro Democrático; con una participación de 7 mujeres y 11 hombres (Ver Ilustración n.º 4.2).

Al analizar los cambios en la distribución del Concejo en 2019 con el conformado en el año 1997 (ver Tabla n.º 4.1), hay diferencias notables. En aquel entonces, sus miembros se identificaban como liberales y conservadores de distintos matices, en una dinámica política altamente dividida y personalizada. En este periodo, conviene resaltar que el Partido Liberal mantuvo el liderazgo en el puerto, pero otros partidos como el Centro Democrático, el Partido Verde, el Polo Democrático han logrado nuevos espacios.



Ilustración n.º 4.2. Conformación del Concejo de Buenaventura (2016-2019)

Fuente: elaboración propia con información de la página del Concejo de Buenaventura.

Aunque nunca aspiró a la alcaldía del puerto ni a la gobernación del departamento del Valle, el papel de Juan Carlos Martínez Sinisterra resulta fundamental para entender las redes políticas que se tejen en cada administración. Su poder es ampliamente conocido a nivel nacional y se cree que continúa vigente, aunque esté condenado. En su momento, participó de importantes decisiones políticas y apoyó la definición de candidaturas gracias a sus valiosos contactos y los abundantes recursos que manejaba. No podría considerarse un jefe de un bando claro, sino más bien un aliado estratégico y poderoso que, como afirman Sánchez y Valencia (2011), “apoya y combate a quienes se han hecho con el poder, dependiendo si sus agendas coinciden o no”.

Una mirada a los candidatos a la alcaldía de cada período permite observar que no hay una rotación real del poder en el puerto, porque hay un listado de candidatos que aspiran constantemente en periodos consecutivos.

Este fenómeno explica una frase común entre los habitantes que dice que “para ser alcalde en Buenaventura tienes que haber sido candidato 2 o 3 veces”. En últimas, aunque se da un desprestigio mutuo entre los líderes políticos, las administraciones no se diferencian radicalmente de las anteriores; como se mostró en el recuento, en los últimos 8 períodos, todos los alcaldes se han visto involucrados en líos judiciales que han obstaculizado el desarrollo social de Buenaventura. Esto contrasta con la alta votación que obtuvo el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales de 2017, lo que podría interpretarse como un deseo de cambio en la política nacional y local que aspiran a construir las y los bonaverenses después del paro.

Finalmente, se puede señalar que las particularidades de la política y del ejercicio del poder en Buenaventura, ya señaladas, no permiten una toma de decisiones autónoma que responda a los intereses y necesidades de bienestar de las comunidades locales. Además, la inexistencia de una clase política o élite empoderada con un nivel de gestión y capacidad de desarrollo local explica el atraso y las condiciones desiguales del distrito.

Elecciones 2019

El Concejo Distrital de Buenaventura elegido para el periodo 2020–2023 tiene cambios sustanciales con 16 nuevos nombres elegidos en los comicios de octubre de 2019, la disminución de curules en algunos partidos tradicionales los cuales perdieron fuerza. Ingresaron nuevos concejales miembros de los partidos ADA, MAIS, y Colombia Renaciente. Así como pasaron de ocho mujeres que había en el periodo 2016-2019, a solo dos quienes serán las que llegarán para el periodo 2020-2023, teniendo así una disminución muy significativa. Al conocerse que Jaime Martínez aceptará la curul que le otorga el Estatuto de la Oposición, el líder del Partido Alianza Verde con avales del Asi y Colombia Renaciente, dejará con una curul menos al Partido ASI, la cual tenía el señor Anselmo Caicedo.

Por otra parte, después de una campaña acompañada por las amenazas a los candidatos, Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, candidato por la coalición “Buenaventura digna”, conformada por los partidos Colombia Humana y Polo Democrático, se impuso en las elecciones a la Alcaldía de Buenaventura 2020–2023 con 28.000 votos correspondientes al 24% del total de electores. Fue uno de los voceros más visibles del paro cívico que paralizó el puerto por 21 días en 2017. Se presentó por firmas y es considerado el candidato del Paro. Es administrador de empresas y además integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN, una de las organizaciones afro más relevantes del país) y en 2012 fue concejal por el Polo Democrático.

Cuenta con el apoyo del senador del Polo, Alexander López —quien obtuvo la mayor votación en el puerto en las elecciones regionales gracias a su respaldo al Paro Cívico— así como el de más de 100 voluntarios de diversas organizaciones sociales quienes le recogieron las firmas (La silla vacía, 2019).

Tabla n.º 4.4. Concejales electos 2019

Concejal	Partido
Jaime Oswaldo Marínez	Partido Alianza Verde
Timoteo Ruiz Manyoma	Partido Consevador
José Luis Ocoró Caicedo	Cambio Radical
Francisco Paredes	Así
Wilson Rodallega	Liberal
Johan Fernando Valencia	Liberal
Julio Ramírez Garcera	Cambio Radical
Ricardo Bonilla	Partido de La U
Humberto Hurtado	Polo Democrático
Raúl González Valencia	Centro Democrático
Jairo Ibáñez	Partido de La U
Alexánder Delgado	Partido de La U
Ruben Darío Jiménez	Centro Democrático
Thomson Cárdenas	Partido Conservador
Luis Henry Montaña	Partido Aico
Robinson Rentería	Colombia Renaciente
Nilson García Valencia	Partido Ada
Magdeleine Celorio	Partido Verde
Lucila Martínez / Mais	Mais

Fuente: Buenaventura en línea (2019).

Efectos de las redes políticas en la gobernanza local

La constatación de las limitaciones de los estados para resolver problemas al interior de una sociedad, junto con los nuevos roles atribuidos al Estado y a la sociedad civil en las sociedades occidentales contemporáneas, dieron

cabida a nuevos conceptos y formas de pensar el gobierno y el manejo de las sociedades, como el de gobernanza.

Al volver la mirada al mundo social se descubrió de gana o por fuerza que en su ámbito existen agentes privados o sociales productivos, capaces de autorregularse y de resolver sus problemas, dotados además de recursos relevantes para resolver (o ayudar a resolver) muchos de los onerosos problemas sociales que en el pasado se habían querido atender mediante programas gubernamentales, con el efecto de que los gobiernos habían remplazado con sus burocracias a estos actores o habían limitado su actividad económica y civil independiente (Aguilar, 2008, pp. 72-73).

Así las cosas, la dirección de la sociedad trasciende la acción gubernamental e integra nuevos actores como el mercado y la sociedad civil que se manifiestan en formas de asociación y cooperación del sector público “con el sector privado y social para atacar problemas sociales endémicos y producir los futuros deseados” (Aguilar, 2008, p. 84).

En el caso particular del ejercicio del poder en Buenaventura, estamos frente a un modelo de Estado local fallido, cuya incapacidad para resolver los problemas colectivos se ha traducido en escenarios de ingobernabilidad y descontrol territorial, tal y como fue expuesto más arriba. Sin embargo, esta situación también ha generado la emergencia de nuevas iniciativas organizativas como las que encontramos en este trabajo, cuyo papel ha sido fundamental para denunciar las falencias de las instituciones estatales y en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que aquejan al puerto.

Ante este panorama, en mayo de 2017, la población bonaverense decidió organizarse en torno a un Paro Cívico con el que solicitaba la declaración de emergencia económica para atender las necesidades básicas insatisfechas. Esta petición fue negada por parte del Gobierno, aduciendo que en Buenaventura sí se invierte capital por medio de las regalías y la construcción de grandes obras de infraestructura. Estas obras, en su mayoría, resultan permeadas por la corrupción, quedan inconclusas y no son bien recibidas por parte de la comunidad, como por ejemplo, el Acuaparque y el Malecón Bahía de la Cruz.

Como resultado de las presiones del Paro, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley que crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura (Fonbuenaventura), cumpliendo así lo acordado con la comunidad del puerto. De acuerdo con la nueva normativa, el Fondo de Buenaventura funcionará durante diez años, plazo que puede ser prorrogable. La idea es que cuente con recursos por \$1,6 billones que se invertirán en diferentes sectores (El País, 2017).

Uno de los resultados inesperados del Paro ha sido el surgimiento de nuevos liderazgos que tienen el respaldo de la población. Algunos de estos líderes, que discutieron cara a cara con el Gobierno durante el paro, han sido motivados por sus seguidores a presentarse como candidatos a la alcaldía y al concejo municipal, como sucedió con el alcalde electo en octubre de 2019, Víctor Hugo Vidal.

En este marco, el Paro Cívico del 2017 y el Fondo que se constituyó para generar procesos de desarrollo en el próximo decenio en Buenaventura son una muestra clara de ejercicio de gobernanza en la que actores de la sociedad civil, el mercado y el Estado se unieron para “decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público” (Whittingham, 2010, p. 222).

De esta manera, es posible que, frente a las debilidades de la administración municipal en Buenaventura, sean los actores sociales (en este caso la sociedad civil organizada) quienes a través de la acción colectiva y de presión al gobierno logren un equilibrio en el juego de poderes locales. El respaldo de los grupos políticos tradicionales y de la actual alcaldía en lo que concierne al Comité del Paro no ha sido claro. De tal manera que en el puerto habría dos fuerzas en disputa: la que acompaña a los políticos tradicionales y la de quienes respaldan el Comité del Paro Cívico. Hay un amplio sector de la sociedad que espera que los logros del paro posibiliten cambios profundos en la política local.

A pesar de las dificultades y contradicciones que hoy dominan el Comité del Paro Cívico, este constituye sin duda una oportunidad para consolidar un modelo de gobernanza local que permita que, de modo conjunto, actores y Gobierno resuelvan o por lo menos allanen el camino para resolver los problemas endémicos que agobian a la sociedad bonaverense.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN

A continuación, resaltamos algunas características de las prácticas de intervención estudiadas.

a) Las iniciativas facilitan estrategias de vinculación entre agencias, gobierno y organizaciones (gobernanza) para trabajar de manera coordinada en la solución de problemas comunitarios y en la garantía de los derechos colectivos

La mayoría de los líderes consultados señalan que sus experiencias no han estado vinculadas con instituciones del gobierno local ni nacional. Estos gestores argumentan que el apoyo recibido del Estado es escaso y que, de

no ser por la ayuda de las agencias de cooperación internacional, sus proyectos no se podrían realizar. La precariedad de la presencia estatal o su presencia diferenciada, como la denomina Fernán González (2014), es una queja recurrente.

La relación con la alcaldía es nula, no se tiene... Ahorita han querido empezar a llegar, para algunas cosas, pero en este caso, hablamos directamente (de La) Barra, es nulo. Con otros Consejos, pues tienen sus programas, sus desarrollos de algunas perspectivas de proyecto de comunidades (E6: 17)⁶.

Yudy Angulo, de la Fundación Rostros Urbanos, menciona que cuando hay apoyo de las entidades del Estado, es muy coyuntural o marginal:

[...] De las instituciones del Estado nada. Pues, así como que instituciones del Estado... había como una pequeña dependencia, una oficina que se llama la CIASE, creo que trabajan con el Ministerio del Interior. Ellos nos patrocinaron todo el tema de la página web, para su diseño y puesta en marcha. Además de las capacitaciones para quienes iban a manejar la página (E2: 12).

No obstante lo anterior, que no reciban recursos institucionales para sus iniciativas no implica que no haya relación con el Estado. Por el contrario, la precariedad con la que son atendidas sus necesidades ha hecho que ellos creen organizaciones y se ligen a plataformas más amplias para visibilizar sus demandas y defender sus reivindicaciones, sean territoriales, étnicas, de género o asociadas a su ciclo de vida, por ejemplo, jóvenes, adultos mayores, entre otras.

Entre estas iniciativas se destacan las que están ligadas a la defensa del territorio y a la identidad étnica, por ejemplo, las que lideran los consejos comunitarios. Ellas han sido definitivas en la constitución del movimiento social de comunidades negras que lidera diferentes acciones colectivas contra instituciones del Estado que no cumplen con sus obligaciones o desconocen los derechos de las poblaciones autóctonas. De igual manera, sus protestas se dirigen a las empresas privadas que se apropian de sus territorios, a los actores armados irregulares, a las bandas delincuenciales y a los grupos de narcotraficantes que han afectado la convivencia pacífica y han modificado prácticas ancestrales de relacionamiento. A estas protestas se han unido las

⁶ No obstante, en las visitas de campo se puede observar la presencia de funcionarios (profesores, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la autoridad portuaria, entre otros) en el territorio colectivo, así como infraestructura y bienes públicos.

organizaciones de jóvenes, de mujeres, de víctimas del conflicto armado, que tienen objetivos más puntuales y que van adquiriendo gran relevancia frente a la institucionalidad y los organismos de cooperación. En la medida en que sugieren nuevas formas de actuar, asumen otro tipo de compromiso y llegan a poblaciones que no habían participado o no querían hacerlo, ya sea por desconfianza en los líderes, en las instituciones o por el desaliento y la desesperanza que han acumulado desde tiempo atrás.

Vale la pena resaltar la articulación de los discursos locales en clave de DD. HH., allí se establecen conexiones que logran ampliar las redes con organizaciones nacionales e internacionales. Esto ratifica la aseveración de Gonzalo Sánchez respecto a cómo las organizaciones afectadas por el conflicto armado apelan, en efecto, a los DD. HH. y su vocabulario para poder generar visibilización y ser escuchados (Sánchez, 2018).

Así las cosas, es posible afirmar que el déficit de apoyo estatal se ha constituido en una oportunidad para fortalecer el capital social en el puerto, evidenciado en la emergencia de organizaciones sociales que han venido ejerciendo su derecho a la ciudadanía a través de mecanismos como la denuncia, la veeduría o la participación activa en la definición y búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudad y de la región.

b) Alto grado de participación de la comunidad, sentido de pertenencia con el proyecto

Para el caso de Anmucic, la participación se ha ido ampliando a través del tiempo con la conformación de comités veredales:

Esto ha hecho que cuando se crean los consejos, visibilizan un proceso que traemos las mujeres, entonces para el caso de Buenaventura nos creamos 27 comités que son veredales en la cuenca del río Anchicayá, Dagua y en la cuenca del río Calima, ahí pudimos llegar (E1: 3).

Por su parte, la Fundación Rostros Urbanos ha logrado una participación amplia de jóvenes de varios sectores del distrito:

Podemos decir que de lo que hemos trabajado, hemos llegado aproximadamente a 500 jóvenes de forma casi que directa, con los talleres y los espacios de formación e incidencia. Ya cuando tenemos los talleres acá, en el marco de los proyectos, las participaciones son más reducidas en la medida en que proyectos como Recuperando la Esquina son proyectos para treinta jóvenes de diferentes territorios. En las actividades de conmemoración casi siempre se logra mayor participación porque eso es dentro de un territorio, pero participa gente de otros sectores también y de otros procesos de los que tenemos (E2: 3-4).

También se destaca la amplia participación de los pobladores en la constitución del Espacio Humanitario. A pesar de no tener recursos y de no adelantar un proyecto específico, sus líderes han logrado que la comunidad se vincule a los diferentes comités y participen en la formulación del plan de desarrollo como herramienta de planeación de futuro. Con el cual pretenden conseguir financiación de programas y proyectos y asegurar la continuidad de su iniciativa. Por ejemplo, la Fotografía n.º 4.1 muestra la sede del Espacio Humanitario Punta Icaico, una experiencia que replica la del Espacio Humanitario Puente Nayero, de la que ha obtenido asesoría para su constitución.



Fotografía n.º 4.1. Sede del Espacio Humanitario de Punta Icaico, una experiencia asesorada por los líderes del Espacio Humanitario Puente Nayero

Fuente: María Eugenia Ibarra, Fotografía, 2017.

c) Capitalización de los recursos existentes en la comunidad (voluntarios, organizaciones ya creadas). El conocimiento local como pieza central de las soluciones

En el caso de las mujeres rurales, Anmucic ha hecho un gran esfuerzo por recuperar tradiciones propias como el *comadreo* para compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas. Dicha estrategia es una costumbre popular en la que se visita a las vecinas y se comparte la información importante. Para este caso, lo que se trasmite de vecina a vecina contribuye a la solución de un problema concreto. Cuando se trata de problemas relacionados con las asociadas, también se comparten recursos, no solo económicos, sino de

gestión, de conocimiento, etc. Aquí se hace uso de los vínculos y del trabajo en red para lograr soluciones efectivas. Así mismo, la promoción y la circulación de los productos agrícolas y sus derivados incrementan el interés de las mujeres en mantener los cultivos de huertas caseras, necesarios para la soberanía alimentaria:

Estamos proyectando que además del quehacer que hemos venido haciendo con nuestros artículos, con nuestras producciones, la chancaquera, la papachina, que todo eso se vuelva artículos de venta y que haya un espacio en Buenaventura... estábamos alegando por un espacio en la plancha de cemento (bulevar), pero no ve que eso lo tienen *full*.... Para vender los productos de la zona, pero no es tan fácil... en esas estamos. Además de eso estamos molestando a CVC que necesitamos hacer lo de las azoteas, cebolla, tomate, de todo se da aquí y por lo menos para seguridad [alimentaria] y que se pueda hacer en todas partes (E1: 10-11).

También es importante mencionar cómo las intervenciones deben salir del ámbito de lo formal para lograr mayor incidencia. En este caso, el uso de los vínculos cercanos con la gente de la comunidad es una estrategia exitosa.

Yo pienso que parte de esto es aprender a recuperar ese relacionamiento, para nosotros eso es reconciliación. Reconciliación para nosotros no va a ser llevarles un taller “mire la reconciliación es esto”. No, la reconciliación es empezar a generar los espacios de encuentro para que la gente tenga la oportunidad de contarse sus cosas, de solidarizarse el uno con el otro, de que si se murió alguien puedan decir “vamos juntos a preparar la tumba”, “se cayó el puente, vamos a construirlo juntos”. Eso es lo que nosotros creemos que es reconciliación: permitir o generar el espacio para que la gente se encuentre y desde ahí se empiece a tejer un diálogo entre ellos. No es otra cosa, no es solo ir y dar diez talleres porque al fin y al cabo si la gente después de recibir los talleres sigue cada uno por su lado, ahí nadie se está reconciliando con nadie. Entonces el ejercicio de reconciliación debe cuestionarse sobre cómo hacer para generar espacios de encuentro (E2: 19).

d) Diversidad de fuentes de financiamiento

Es importante conocer de dónde proceden los recursos que permiten el funcionamiento de los proyectos y quiénes son los financiadores de los mismos. En la mayoría de las experiencias estudiadas, los recursos provienen de la cooperación internacional. La excepción la constituye Anmucic, que ha trabajado con recursos propios que se logran a partir de la solidaridad y autogestión de las asociadas. También hay que anotar que el Espacio Humanitario ha tenido mucha resonancia nacional e internacional, lo que le ha

permitido un acompañamiento permanente de voluntarios, pero no recibe recursos económicos. Quizás esto se asocie a que su finalidad inicial no era la implementación de proyectos, sino la salvaguarda de los derechos y la seguridad de la comunidad.

Fundación Rostros Urbanos, Fundescodes, Pastoral Social, Ecomanglar y el Consejo Comunitario de La Barra se sostienen a través de proyectos financiados por la cooperación internacional. Así por ejemplo, el Consejo Noruego, Acnur, Misereor (cooperación alemana), War Child Holanda han financiado gran parte de los programas de Fundescodes. Igual ha ocurrido con el apoyo financiero dado a Pastoral Social por parte de la Acnur, ACDI/VOCA y Misereor.

Hay que señalar que si estas entidades no apoyan, algunas organizaciones pequeñas corren el riesgo de dejar de funcionar, como es el caso de Rostros Urbanos que depende exclusivamente de las convocatorias en las que participa para lograr recursos de financiamiento. Sin embargo, el alto grado de organización y planeación de los jóvenes de esta fundación ha hecho posible que sobrevivan en los períodos que no están ejecutando proyectos.

[...] Pues digamos que, en la medida en que haya proyectos, se pueden hacer muchas cosas. Actualmente estamos sin un proyecto que pueda mantener este espacio, ya ahorita es con aportes propios “cuánto tiene, cuánto pone, ya llegó el recibo”. Entonces en la medida que hay proyectos tratamos en lo posible de sostener administrativamente el lugar y sostener los otros procesos que tengamos, porque no nos hemos centrado en un proyecto específico, sino que tenemos otros “ah bueno, se va a acabar *Recuperando la Esquina*, pero ahí quedan los chicos entonces cómo hacemos para que sigan viniendo y para que sigan grabando sus canciones... (E2: 11).

Hay que decir que las experiencias de intervención si bien son de origen local y benefician a un número significativo de pobladores, tanto rurales como urbanos en el distrito de Buenaventura, un número importante de ellas han sido apoyadas por la cooperación internacional. Entre las entidades que respaldan a Rostros Urbanos están Misereor (cooperación alemana), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), War Child Holanda, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ACDI/VOCA, CODHES, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CIJP, entre otras. En consecuencia, las acciones locales en términos de financiación, además del respaldo político o escucha y legitimación de las demandas locales, como lo plantea Boltanski (2000) es también una contribución importante para mantener los objetivos. Otros actores regionales o globales como EPU, CIDH, Wola, HRW, entre otros, proporcionan

sostenibilidad y legitimidad a las organizaciones y a las redes establecidas para la intervención local o la incidencia política.

d) Nivel de incidencia política

Este aspecto es muy importante para el éxito de las intervenciones, para que ganen legitimidad y eficacia. Esto ha sido posible, por ejemplo, en el trabajo adelantado por la Fundación Rostros Urbanos, que ha logrado gran resonancia a nivel local y nacional gracias al uso de los medios de comunicación. Esto, a su vez, ha tenido influencia en los espacios de toma de decisiones.

Por ejemplo, hace poco yo estaba en Bogotá y me llamaron dos o tres medios para preguntarme sobre qué pensaba de la reapertura del hospital, que cuál era mi opinión, que querían tenerla para sacarla en el noticiero. Un día vino un fiscal sobre el tema de corrupción y un periodista era el enlace entonces él me llamó “Leo, necesito que tú te sientes con este fiscal para que puedas contar un poco sobre algunos temas”. También los mismos periodistas, de alguna manera, casi la mayoría se convierten en cercanos, entonces uno necesita decir algo y siempre están allí o le están escribiendo a uno a preguntar qué hay de nuevo, acerca de los temas nuevos que se están moviendo en Buenaventura, estos constantemente son los de Blu Radio Bogotá, o los de Semana Rural, o revistasemana.com (E2: 8).

Esta visibilidad de las organizaciones y de sus líderes también es fructífera en la constitución de alianzas para participar en las elecciones locales y posicionar candidatos. Tal es el caso de la alianza hecha entre Pastoral Social, PCN y Aciva, que logró llevar al concejo municipal a Víctor Vidal, quien hoy es el alcalde del Buenaventura, tras ser uno de los principales líderes del Paro Cívico del año 2017. La otra experiencia la cuenta Gloria Arboleda de Anmucic al señalar que varias de las líderes locales y nacionales han surgido de las bases sociales.

[...] O sea yo tengo testimonios de vida de lo que las mujeres han hecho por haber participado y por haber orientado esos espacios, y haber cambiado modelos de vida. Yo me enorgullezco por ejemplo ver a Beatriz Mosquera Rodríguez hoy concejal. Yo me enorgullezco de mirar a Zulma hoy en Bogotá haciendo otra... O sea, mucha gente (E1: 5).

En otras ocasiones, la acción de las organizaciones tiene logros y premios a nivel nacional y gana influencia local gracias a ellos. Una de ellas es Fundescodes, que ha estado nominada para el Premio Nacional de Derechos Humanos. También es importante mencionar los reconocimientos a nivel internacional obtenidos por las mujeres de Anmucic. Ellas obtuvieron el

premio Nansen otorgado a las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia contra las mujeres. Este “se entrega en Suiza y nosotras estuvimos allá. Usted entra a YouTube allí estamos, hicimos... ese me parece un logro gracias al proceso de vida” (E1: 6).

Las ventajas de la incidencia política refuerzan las posibilidades de éxito de las intervenciones y pueden generar aliados influyentes a nivel nacional e internacional, como se expresa en el siguiente relato:

A nivel nacional pues hemos traído muchas personas, han venido fiscales acá, le hemos echado el cuento y han caminado con nosotros, los sitios, más o menos se conocen como los cementerios clandestinos, digámoslo así, que conozcan la realidad también. Los hemos traído con víctimas, para que las escuchen, a estas señoras, lo que les ha sucedido, como si fuera por lo menos como funcionario uno hace, toca ver que la gente está sufriendo y necesitan alguna solución. Y las entidades internacionales que nos apoyan, pues también van por esa línea y vienen acá también. Digamos, hemos traído también embajadores parlamentarios europeos que vienen acá. Un caso puntual fue, digamos, la otra vez trajimos unos parlamentarios europeos [...]. Ahora en estos momentos es el presidente de allá, de eso podemos decir hoy ya tenemos un aliado allá (E5: 24).

En el caso de la Pastoral Social, la alianza con organizaciones locales ha posibilitado el éxito de las iniciativas.

Había ya algo bien interesante, una visión distinta. Lo segundo era pensar que se pudiera también empezar a sacar concejales de esta zona que pudieran en ellos en un momento dado defender las propuestas y que pudieran avanzar. Entre los aliados están la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca (Aciva) y el PCN. Estos han sido dos aliados muy importantes en todo lo que se ha venido haciendo de esa fecha para acá (E3: 5).

f) Estrategias novedosas de intervención social

La creatividad y la innovación en las formas de hacer intervención con las comunidades ha sido uno de los hallazgos más importantes en las experiencias analizadas. La pertinencia y eficacia de sus métodos generan buenas prácticas que garantizan el éxito de las intervenciones. Fundescodes ha implementado varias estrategias para responder a las necesidades de la gente, por ejemplo, la Capilla de la Memoria, que consiste en la exhibición y documentación de objetos de las personas desaparecidas como parte de la estrategia para sanar y restituir los derechos de las víctimas. Este proyecto fue financiado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Otra estrategia es el programa semilleros de teatro, en el que los jóvenes del barrio pueden aprender artes escénicas. También se hacen

exhibiciones permanentes de pintura que recuerdan el patrimonio natural y cultural de la región.

La Fundación Rostros Urbanos innova, constantemente, con estrategias para lograr la resonancia de sus ideas. Una de ellas es el uso de los medios de comunicación como las redes sociales virtuales y la radio para hacer denuncias del mal uso de los recursos públicos por parte de la administración distrital.

Nosotros lo transmitimos en vivo por Facebook, luego lo descargamos y lo subimos a nuestra página de YouTube que se llama NotiSarcasmo. De ahí yo te puedo compartir todas las que tenemos. Entonces Revista Semana saca un especial donde dice “a modo de burla jóvenes inauguran obra en Buenaventura”, postean el video y hacen una nota sobre los hallazgos que hizo la Contraloría, luego CMI (el Noticiero) viene y nos dicen “vea, necesitamos que ustedes nos digan qué es lo que está pasando aquí?”. Después los diferentes medios se vuelcan sobre esa noticia y vuelven y reactivan la investigación del acuparque porque estaba quedada. Entonces ellos reactivaron la investigación y a pocos días reactivaron el trabajo en la obra. Cuando nosotros volvimos por segunda vez a hacer la noticia, ya el ingeniero nos dice “¿van a seguir jodiendo con el mismo tema? Ahorita les doy una entrevista” (E2: 9).

Iniciativas como el Espacio Humanitario son un buen ejemplo de cómo se pueden prevenir potenciales conflictos. Esta fue creada para frenar y resistir a la acción de los grupos armados en el sector; con el tiempo ha garantizado la tranquilidad y seguridad de sus habitantes.

La gente lo ha querido asumir por varias cosas: primero porque la gente lo más importante que ha entendido es que ha encontrado la tranquilidad. Hoy la gente no exige tanto si le dan o no le dan, la gente lo que quiere es vivir tranquila y lo primero que dicen es el Espacio Humanitario nos devolvió algo que habíamos perdido hace más menos 10 años: la tranquilidad de no tener presencia de actores armados acá, al menos ilegales (E4: 11).

Tal como reconoce su principal líder, Orlando Castillo, la gente valora la tranquilidad como su principal bien y, por ello, siguen trabajando para mantenerla, creando comités, la coordinación del Espacio, etc. Para él, como todo proceso, en este se aprende haciendo y comprometiendo a los pobladores en el sostenimiento de sus posiciones frente a los actores armados.

g) Formación de capital social

Este criterio da cuenta de cómo las organizaciones y las experiencias que se sistematizan contribuyen a formar capital social. Identificadas las relaciones establecidas por las organizaciones de Buenaventura a partir de aquellas

descritas como de alianza, cooperación, o bien desde las formas de relación como de distanciamiento o cercanía, pueden establecerse dos perspectivas tipo dentro del conjunto de las redes organizacionales en Buenaventura; son estas las dinámicas de dispersión y cohesión. Es necesario señalar que la noción de dinámica implica considerar que existe movilidad, transformación, cambios y reconfiguración en las redes. Lo que permite pensar que las instantáneas, es decir, las imágenes que se visualizan en el mapa de redes en un momento determinado son parte de una historia particular y articuladas con unas dinámicas institucionales y contextuales del orden local, regional, nacional y global, igualmente móviles. Por lo tanto, la idea de dispersión como fragmentación de acciones, debilidad de articulaciones y cooperación, pendula con condiciones que hacen posibles mayores niveles de cohesión interna en las organizaciones y con las pares en lo local a partir, fundamentalmente, de la emergencia de propósitos comunes. Así mismo, hacen posible la identificación de contrapartes o contradictores, lo cual permite la construcción de frentes comunes y coincidencias en el posicionamiento de una agenda pública local.

Considerado lo anterior, puede establecerse por las rupturas y derivaciones de las organizaciones, así como por sus diferencias metodológicas, de intereses ideológicos o misionales, una dispersión de las acciones y de las relaciones entre los actores de la red. Esta aseveración es aplicable parcialmente tanto en el fenómeno del *boom* de las organizaciones no gubernamentales externas o creadas localmente en Buenaventura desde los noventa, como en la permanencia de algunas de ellas y en las nacidas de las capacidades locales organizativas derivadas de estos procesos de creación, conocidas en algunas organizaciones como “capacidad local instalada”.

Esta dispersión coincide con perspectivas que plantean la emergencia de dichas organizaciones como un proceso de des-responsabilización del Estado, marcado por las políticas neoliberales que convierten a las instituciones estatales en reguladoras del mercado más que en promotoras de acceso a los bienes públicos y sociales. En este contexto, dichos bienes se fragmentan dentro de la responsabilidad parcelaria de las ONG cuyas focalizaciones poblacionales y temáticas tienden a condiciones asistencialistas; en consecuencia, se pervierte la construcción de ciudadanías activas y reducen el Estado social de derecho.

Destacado lo anterior, es factible considerar también las condiciones de estas organizaciones como producto de esfuerzos dispersos que marchan sobre la deriva de sus intereses particulares, sin una perspectiva global, reproduciendo de esta manera la fragmentación que reemplaza las formas de representación más amplias de los ya anquilosados partidos políticos,

la Iglesia o el sindicalismo. El contexto de Buenaventura, particularmente desde la privatización de Colpuertos, además de pauperizar las condiciones laborales de la población bonaverense y replegar la subsistencia hacia la informalidad y algunas formas ilegales de obtención de ingresos, también debilitó las acciones democráticas y de exigencia ante los sectores privados, de forma particular en el espacio urbano del municipio.

A pesar de ello, nuevas formas organizativas como el PCN y los consejos comunitarios se recrean a partir de los reconocimientos de identidades culturales explicitadas en la Constitución de 1991, en particular el artículo transitorio 55 sobre comunidades negras y la Ley 70 de 1993. Estos procesos reivindicativos y de alta incidencia emergieron en un contexto de violencia estructural y de pobreza histórica en Buenaventura y, desde finales de 1990, junto a las consecuencias del conflicto armado y de la expansión del narcotráfico; estos últimos como efecto de las operaciones del componente militar del Plan Colombia en Caquetá y Putumayo, que los replegaron al Pacífico y a sus zonas urbanas por las acciones estratégicas de la confrontación y por los circuitos de la economía ilegal.

En los últimos 20 años, un efecto inesperado de la intervención estatal ha sido la proliferación de organizaciones sociales de diversa naturaleza. Esto ha sido un efecto positivo, en buena parte propiciado por las acciones del Estado, pues ha contribuido al fortalecimiento del capital social, entendido en los términos que lo define Putnam (2000) como “los aspectos de las organizaciones sociales tales como las redes, las normas y la confianza que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo (desarrollo y democracia)”. Para el Banco Mundial (1988), este concepto hace referencia a la cantidad y calidad de interacciones sociales que posibilitan las instituciones y normas que una sociedad provee.

Las características básicas del capital social son: la pertenencia a grupos (organizaciones, asociaciones, emprendimientos); normas de reciprocidad en aquellos que pertenecen a la red en que el capital social se construye y la valoración positiva de las asociaciones que se logran a través de la red. Elementos como la confianza, solidaridad y altruismo se potencializan con la consolidación del capital social (Putnam, 2000).

La formación de capital social ha sido uno de los resultados más relevantes identificados en las iniciativas de las organizaciones a las que se indagó para esta investigación. Inicialmente, por las trayectorias ya señaladas de los miembros de las organizaciones (ver Tabla n.º 1 del Capítulo 2), pero además por la manera en que logran legitimar sus acciones hacia poblaciones focalizadas, por medio de denuncias sobre temas estructurales y por su expansión a otros sectores relacionados con el discurso unificador

de los derechos humanos y con los fenómenos locales como la pobreza, la violencia y el conflicto armado.

Como hipótesis de indagación, a propósito de las redes sociales y los procesos de intervención, es importante determinar la eficacia y la eficiencia en relación con la materialización de los objetivos o productos establecidos en los proyectos de intervención; como también la revisión de los logros no esperados y no tangibles, como aquellos relacionados con el capital social en términos de la cohesión social emergente. Por otro lado, establecer que no necesariamente una mirada funcionalista, que plantea un equilibrio en las relaciones, expectativas y prácticas, da cuenta de los aspectos asociados al capital social. Este podría incorporar también el conflicto, la competencia y la cooperación como una suerte de movimiento dialéctico que reconfigura las relaciones, estableciendo formas de acción más contextuales y de articulación efectiva con las bases comunitarias (Rostros Urbanos respecto a sus antecesores Rostros y Huellas, o bien Anmucic respecto a Anuc y a las Mariposas de Alas Nuevas o bien las nuevas formas de relacionamiento del Espacio Humanitario con la Comisión Intereclesial, entre otras).

El Paro Cívico, como los mapas de red organizacional o de red total, presenta unos nodos importantes en organizaciones afiliadas a la Iglesia católica o en aquellas organizaciones que se han venido fortaleciendo desde el marco de la Constitución de 1991 con sus gestiones y exigencias respecto al territorio y la cultura, como los cabildos y los consejos comunitarios. A pesar de estas posibilidades de fortalecimiento de la red a partir de estos nodos organizativos y movilizadores, también es necesario establecer cómo estas circunstancias podrían limitar, fortalecer y distribuir otras formas de liderazgo local en el largo plazo y en un contexto de transformaciones sutiles, pero permanentes, derivadas del posacuerdo y con efectos sobre las condiciones de derechos humanos y de conflicto en el puerto.

PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

a) Las amenazas del entorno: pobreza y conflicto armado

Como hemos venido insistiendo en esta investigación, los niveles de pobreza del distrito de Buenaventura siguen siendo alarmantes. El paro cívico del 2017 visibilizó de manera dramática el abandono estatal reflejado en la carencia y deficiencia de servicios básicos como la salud, el agua y la educación, entre los más importantes. Este entorno de pobreza es un caldo de cultivo para otros problemas como la vinculación de la población a las

economías criminales del puerto, lideradas por bandas emergentes, guerrillas y narcotraficantes.

En los últimos quince años, el esfuerzo de las organizaciones sociales se ha centrado en generar alternativas para esta población víctima del conflicto armado y para aquellos que se vinculan a las redes criminales imperantes en el puerto.

Una de las mayores amenazas para las organizaciones y los actores vinculados a ellas es la vulneración de los derechos humanos generada por los diversos grupos armados. Líderes como Orlando Castillo, del Espacio Humanitario, Leonard Rentería de Rostros Urbanos, entre los más destacados, cuentan con medidas cautelares otorgadas por el Gobierno debido a las múltiples amenazas recibidas. Este hecho hace muy vulnerables las experiencias de intervención, puesto que limitan la movilidad y la autonomía de los líderes y generan temor en las bases. La ola de asesinatos de lideresas y líderes se ha incrementado en los últimos años, paradójicamente, después de la firma de los acuerdos de La Habana.

Otra debilidad identificada es la alta dependencia que tienen los actores comunitarios de la cooperación internacional. Muchos proyectos e iniciativas funcionan solamente mientras existen recursos de los donantes, lo que arriesga la sostenibilidad de los cambios generados. Esta dependencia también impide, en varios casos, el desarrollo de procesos de autogestión y de propuestas que tengan autonomía, así como el empoderamiento de los actores.

Otro factor tiene que ver con los condicionamientos que establecen las ONG y las agencias de cooperación hacia sus contrapartes en términos de plazos y metodologías para la ejecución de los proyectos. Aunque la mayoría de las veces las agencias internacionales aceptan las iniciativas locales, los ritmos y condiciones de los donantes pueden constituirse en inconvenientes para resolver los verdaderos problemas de los pobladores y las comunidades que los demandan. El traslape de intereses entre ONG, instituciones estatales y agentes de cambio hace poco fluidos los procesos y crea ambientes de baja gobernabilidad. Lo cual genera cansancio y apatía entre las comunidades beneficiarias, ya saturadas de intervenciones desconectadas, descoordinadas, temporales, etc. Frente a la proliferación de entidades que quieren poner en marcha sus iniciativas o apoyar las locales, son necesarios procesos de alianzas, comunicación y acuerdos, destinados a potenciar los recursos y hacer más eficientes las intervenciones.

Luego de este análisis de las experiencias, señalamos algunos aprendizajes, fortalezas y debilidades de las mismas. Valga anotar que un análisis más exhaustivo debe considerar la percepción y la opinión de las comunidades

beneficiarias de los proyectos e iniciativas. Dicho propósito debe cumplirse en una segunda fase del proyecto.

En general, se encontró que el nivel de convocatoria y participación de las comunidades es bastante alto. Esto se debe, principalmente, al uso de estrategias acertadas y creativas. En el caso de Fundescodes y Pastoral Social, se hace uso de los vínculos religiosos de los feligreses católicos para lograr la aceptación de sus propuestas. La legitimidad de los líderes vinculados a la Iglesia y la religiosidad de sus seguidores influyen de manera positiva en la participación en las intervenciones.

En casos como los de Anmucic y el Espacio Humanitario, el rescate de prácticas tradicionales genera amplias redes locales a través del uso de vínculos comunitarios o de parentesco. Rostros Urbanos hace uso de la música como el *hip hop*, el teatro y las redes sociales para atraer a un gran número de jóvenes de los barrios de Buenaventura. Ecomanglar genera empleo entre los jóvenes del Consejo Comunitario de Bahía Málaga con sus programas de ecoturismo, como incentivo a su participación en los proyectos.

En general, la utilización de estrategias culturales tiene un gran peso en el éxito de las intervenciones, pues estas evocan la tradición y las formas de solidaridad características de las comunidades. Estos vínculos propician el sentido de pertenencia, el compromiso y asumen el conflicto como parte de la vida misma; así lo plantea Denise Najmanovich:

En el universo en red, la certeza es menos importante que la creatividad y la predicción menos que la comprensión. El punto de partida no es nuestra extrañeza en el mundo, sino un sentimiento de mutua pertenencia, de legitimidad del otro, de su racionalidad, de su accionar y de la apertura a un diálogo emocionado en una interacción que no niegue el conflicto, sino que reconozca la diferencia como la única vía hacia la evolución (1995, p. 33).

Otra de las fortalezas es la capacidad de resiliencia de las comunidades, que transforman toda amenaza en una oportunidad para generar respuestas que posibiliten la defensa de los derechos colectivos. La persistencia de sus líderes, que en muchos casos arriesgan la vida por salvaguardar a sus comunidades, es una muestra de la fuerza de “quienes no tienen mucho que perder” en medio de condiciones adversas.

b) Debilidad de procesos de sistematización, captura, documentación o evaluación de las experiencias

La documentación o sistematización de las experiencias, en muchos casos, depende de las entidades que las apoyan, las cuales en sus protocolos exigen monitoreo o evaluación de los proyectos de intervención. Para el

caso de Fundescodes y de la Pastoral Social, la organización Misereor, que ha financiado algunos de sus proyectos, exige evaluaciones cada dos años. Por lo tanto, la continuidad de los proyectos generalmente depende de los resultados de las evaluaciones. Sin embargo, como se pudo constatar, la cultura organizativa de estos actores comunitarios es precaria; no se evidencia la existencia de registros, archivos o procesos de monitoreo y evaluación, ni internos ni externos.

**OTRAS ARTICULACIONES INTERORGANIZACIONES:
EL PARO CÍVICO COMO UN EJEMPLO EMBLEMÁTICO
DE POTENCIAL GOBERNANZA**

En este apartado nos referimos al Paro Cívico Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio que interrumpió la dinámica cotidiana del distrito de Buenaventura desde el 16 de mayo al 6 junio de 2017. Esta fue una de las principales acciones colectivas del período analizado y muestra la capacidad de las organizaciones para lograr una articulación interorganizacional, al margen de las diferencias metodológicas, de formas o estilos de intervención o de posicionamiento político.

Los organizadores promovieron la confrontación de los discursos estatales sobre la forma en que se han tratado de resolver los problemas de la población y la visión del desarrollo que han impuesto diferentes actores con sus intervenciones; también evidenciaron un balance de inversiones realizadas, mostrando la ineficiencia y la ineficacia con la que han actuado las diferentes autoridades y niveles de gobierno; hicieron un largo listado de promesas incumplidas, de derechos no garantizados y esbozaron los grandes problemas que se han acumulado y que amplían las brechas de desigualdad de la población afrodescendiente e indígena que habita en el Pacífico, comparada con la calidad de la vida que han logrado los habitantes de las grandes ciudades. También reclamaron mejor redistribución de las ganancias que genera la administración del puerto marítimo y los demás megaproyectos que se están desarrollando en el distrito, así como el reconocimiento cultural de los aportes de los afrodescendientes al Estado-Nación colombiano.

Durante 21 días, los pobladores mantuvieron el paro cívico más prolongado en la historia de Buenaventura. Según los participantes del segundo taller realizado para esta investigación, esta acción colectiva fue un esfuerzo solidario de 110 organizaciones sociales y populares, docentes universitarios, trabajadores informales, comunidades negras, indígenas, juntas de

acción comunal y la Iglesia católica (Defensoría del Pueblo, 2017) que se sentían representados en las demandas que se fueron estructurando en puntos de negociación con el Gobierno Nacional.



Fotografías n.º 4.2. Actos de movilización durante el paro

Fuente: <https://www.soydeBuenaventura.com> (se reproducen con autorización de la página web).

Sus demandas se sintetizan en ocho peticiones específicas: a) cobertura en prevención y atención en salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional, b) recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados, c) cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media técnica y universitaria, d) fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas, e) saneamiento básico e infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios, f) acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y colectivas, g) ordenamiento del territorio como hábitat para la vida y el bienestar colectivo con reparación y nuevas viviendas para las familias, h) fortalecimiento de la producción local, regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos y los ingresos requeridos por las familias. Todo esto en el marco de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica.

Desde estas demandas como horizonte se generó una amplia movilización que mostró altos niveles de coordinación y de capitalización de las redes establecidas en el orden comunitario, y consolidó un discurso sólido que tradujo las problemáticas y demandas al lenguaje de los derechos humanos, lo que permitió la articulación de discursos atravesados por las particularidades culturales y étnico-raciales presentes en el puerto; además hizo visibles las condiciones en que los nuevos relacionamientos entre la sociedad civil y el Estado se desenvolverían en un marco de implementación de acuerdos de paz, como consecuencia del crecimiento de la protesta social asociada a deudas históricas en las regiones.

En esas tres semanas, buena parte de la población se movilizó en torno a acciones de incidencia que incluían la participación en comités temáticos y en actividades logísticas que mantuvieran la presión sobre el Gobierno Nacional para lograr una mejor negociación de su agenda.

Es necesario señalar cómo los nodos de interacción y de relaciones con mayores convergencias e incidencia en el puerto están concentrados en el PCN y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Si bien no son los actores más visibles mediáticamente, sí son los que se consolidan como núcleos centrales de organizaciones derivadas de su promoción y apoyo; a su vez, constituyen centros de referencia para la solidez de alianzas que facilitan la exigencia y la incidencia en términos de derechos humanos o, bien, la intervención social a través de asesorías y formación de las bases sociales y organizativas. No es menor la capacidad que tienen estas organizaciones de establecer puentes y transferir contactos con organizaciones de orden nacional y regional, incluyendo las de la cooperación internacional (Misereor, Children AID, SwissAid, etc.) y escenarios de incidencia global (EPU, WOLA, CIDH, etc.).

En todo caso, la legitimidad de las organizaciones es parte de un proceso que, como se ha señalado en las experiencias organizacionales y sus iniciativas, se corresponde con un complejo juego de desarrollos formativos, de cambios intergeneracionales, de ramificaciones organizacionales, de circulación de líderes entre organizaciones, con su consecuente articulación de redes locales, nacionales e internacionales. Así, los posibles centros o nodos deben su razón de ser a las interacciones construidas.

De igual forma, las posibilidades de acción colectiva son más un acumulado histórico organizativo que converge en coyunturas y permite la emergencia de la acción. En uno de los talleres con las organizaciones, los participantes establecieron que el Paro tiene su antecedente más cercano en la marcha del 19 de febrero de 2014 denominada “Marcha para Enterrar la Violencia y Vivir en Paz en el Territorio” (para ampliar esta información, véase <https://verdadabierta.com>, 2014). Algunos participantes activos del Paro Cívico refieren que, si el proceso de diálogo entre las Farc y el Estado colombiano fue posible, también debería lograrse un acuerdo entre la población de Buenaventura y el Estado, estableciendo un paralelo discursivo entre las dos negociaciones.

Ahora bien, es importante describir cómo los repertorios de movilización del Paro reflejan precisamente ese acumulado histórico organizativo. Para lo anterior, la descripción de algunos de los repertorios, el uso del territorio urbano y las acciones específicas en el Paro señalan precisamente la explicitación de la solidez organizativa en términos de coordinación y alianzas, y respaldo de las comunidades a la movilización.

Los participantes en esa movilización comunitaria señalan que el paro viene siendo el resultado de un proceso, así que los repertorios planteados no pueden verse necesariamente como el resultado de acciones espontáneas, sino como la emergencia de prácticas incorporadas en los procesos organizativos y comunitarios que en diversos niveles implican un acumulado social y un fortalecimiento de las redes, en lo que en apariencia se presenta como una coyuntura.

La participación en el Paro se incrementó y cualificó a partir de las palabras descalificadoras del alcalde de ese entonces, Eliécer Arboleda, quien se refería a los participantes como “rebuscadores” que no podrían mantener la acción colectiva. Este hecho se puede interpretar de distintas formas, entre otras, cómo la figura del Estado en términos locales es concentrada o encarnada en el administrador local, quien, además, sintetiza de forma simbólica y material la ineficiencia del Estado para garantizar en el puerto las condiciones mínimas para una existencia digna. Así, la figura del alcalde permite concentrar el esfuerzo movilizador contra el discurso y el personaje que lo representa.

Sin duda, aparece aquí la problemática de la representación política y sus límites, así como la de los alcances de las representaciones y prácticas sociales ancladas a los desajustes estructurales que afectan la diversidad de intereses y expectativas, tanto de los agentes sociales como de las organizaciones en lo local. Tensión visible en las manifestaciones callejeras en las que se ratifica y extiende un proceso de configuración de una “ciudadanía insurgente” que, como se ha referido en las trayectorias de líderes y redes sociales de las organizaciones e iniciativas en Buenaventura, en primer lugar, genera crítica sobre las condiciones de inequidad y desigualdad, agregando en torno suyo intereses de orden colectivo; en segundo lugar, constituye lo que Lefebvre teorizaría para los movimientos sociales contemporáneos como una creación y demanda de derechos de una clase obrera, que más allá de las categorías clásicas asociadas al modelo industrial de fábrica/trabajador, amplía el margen de esas ciudadanías considerando sus diversidades “[...] una formación de clase muy diferente: fragmentados y divididos, múltiples en sus deseos y necesidades, muy a menudo itinerantes, desorganizados y fluidos” (Schiavo, Gelfuso y Vera, 2017, p. 308).

La lección del Paro de Buenaventura permite poner en discusión la noción funcionalista de la gobernabilidad, que en efecto apela a la participación en el manejo y distribución del bien común, deshistorizando en todo caso las condiciones que hacen posible esa suerte de consensos sobre lo público, cuyo énfasis en el conflicto se muestra como tensiones reguladas en forma de participación y representación moderadas. Buenaventura, como la ciudad

européa del análisis de Lefebvre, emerge precisamente en el estado de emergencia, en la crisis, en los desajustes estructurales y en el conflicto, en ciudadanías marcadas por el estado de excepción (Guerrero, 2013) y respondida paradójicamente sobre esa lógica de la represión, el estado de excepción local, precisamente, cuando la gobernabilidad no es expresable.

Esto último es comprensible desde la descripción de los participantes en los talleres cuando se refieren a los excesos del Esmad, acciones que, en representación y respuesta del estado, indignaron a la mayoría de los habitantes de Buenaventura. Es posible imaginarse y comparar un entorno nacional de negociaciones con una de las guerrillas de Colombia, generadora por la vía de las armas de un proceso que culminaría en unos acuerdos de paz, frente a un entorno local como el de Buenaventura, desprovisto de garantías de seguridad en tanto los territorios son disputados en diferentes ciclos por guerrillas, paramilitares, bandas y demás actores ilegales. Así, la respuesta al paro cívico, desde un ejercicio represivo inicialmente, deja entender la indignación general por la desigualdad en el trato, frente a demandas en todo caso justas y legítimas. Quizás aquí lo que más notan los pobladores es la presencia diferenciada del Estado: mientras no se garantizan los derechos fundamentales, prestándolos a través de servicios básicos, o se atienden de manera deficiente; no se protege a los líderes sociales, no se incorporan los enfoques de derechos, ni el de género ni el territorial que demandarían las nuevas políticas públicas, en una respuesta inequitativa, el mismo Estado protege las inversiones de las grandes empresas portuarias y coarta el derecho a la protesta.

La experiencia del Paro y la respuesta a la represión estatal fue valiosa porque permitió ampliar el conocimiento que tenían líderes y organizaciones, tanto de los problemas como de la existencia de otras prácticas, personas y formas de actuar. Así mismo, por la modularidad de los repertorios de acción que emplearon y por la construcción de nuevas modalidades para hacer visibles sus demandas. Entre los unos y los otros, los participantes listaron los siguientes: Cadenas humanas, constitución concertada de puntos de encuentro simbólicos y estratégicamente relevantes, concentraciones con tinte cultural para cantar música del Pacífico, bailar, jugar y hacer tertulias, cacerolazos, marchas, mitines, plantones y vigiliadas, que incluían los rituales propios de la cultura afrocolombiana.

También es importante mencionar la gran creatividad de las comunicaciones que difundían los integrantes de los diferentes comités. Adquirieron centralidad en las redes sociales, el sarcasmo y la burla mediante memes, estribillos, consignas y otras piezas comunicativas. Los comerciantes apoyaron el paro con el cierre de negocios, como parte de su posicionamiento

político y no como una reacción al miedo que habían generado los saqueos a las grandes superficies. En ese sentido fueron muy importantes los actos de reconciliación entre la comunidad y los comerciantes y un acto simbólico para rechazar las acciones vandálicas, después del saqueo a una sede de una cadena de supermercados y el establecimiento de tiempos y corredores humanitarios para posibilitar el traslado de enfermos en la ciudad. Por último, uno de los más importantes fue la presentación de un pliego de soluciones y no de peticiones, dándole a esta forma de enunciar sus exigencias un carácter propositivo, asertivo y creativo en medio de un clima de crisis con el Estado.

Puntos de encuentro

La convergencia en la indignación por el menosprecio del funcionario local a los participantes del Paro, así como por la respuesta represiva policial, se vio fortalecida con el aumento de la participación en lo que se denominaron los Puntos de Encuentro. Son estos los lugares que se definieron como estratégicos para los mítines y otra serie de actividades que regulaban o impedían la circulación por las principales vías de la ciudad. Por supuesto, esto genera un gran impacto en la circulación de las mercancías que entran y salen por el puerto, siendo una acción bastante efectiva para generar presiones por razones de desabastecimiento y merma en las ganancias de los comerciantes y empresarios.

Emerge así la relación del puerto como territorio habitado por ciudadanos marginados en sus derechos, concededores de ese territorio que es apropiado temporalmente en una acción colectiva, enfrentando el flujo del capital y demandando del Estado su presencia efectiva desde la justicia social y no militar.

Los puntos de encuentro más importantes fueron 12: (Bulevar del Centro, Casa de la Cultura, Puente El Piñal, Barrio Santa Cruz, Sena (km 5), Carretera Alternativa Interna, Barrio Los Pinos (lugar Sabrosuras), vía al aeropuerto (Ciudadela San Antonio), Retén (El Triunfo), Gallinero (entrada al Bajo Calima), La Delfina en la vía Cali-Buenaventura. Estos espacios constituyeron para los participantes del Paro, asistentes al taller sobre la sistematización de la experiencia, los escenarios de otros repertorios de movilización social, y el lugar donde se evidenció la solidaridad y la fortaleza organizativa.

Así, las particularidades del Paro se fundamentaron en reflexionar sobre los acontecimientos en esos puntos. Puntos acontecimientos y puntos territorios de encuentro podría ser una acertada denominación. En tanto para la Fuerza Pública y sus comandantes los puntos eran percibidos como bloqueos. Estas diferencias de nominación expresan la distancia existente entre la sociedad civil y el Estado.

Así, algunos de estos Puntos territorios y Puntos acontecimientos dejaron marcados en la memoria estos espacios en medio de la suspensión de la normalidad cotidiana del puerto. Referencias a puntos como Juan XXIII, Sabrosuras y El Gallinero se constituyen en memorias sociales y espaciales que marcan acciones particulares y que manifiestan la capacidad organizativa y las formas de abordar las demandas frente a la indiferencia inicial del Estado en su representación local o nacional.

La constitución de los puntos de encuentro son un repertorio y [también] lo que se hacía en los mismos: se cantaba, se bailaba, se hacía el cacerolazo, piezas comunicativas a través del internet... marchas, mítines, cadenas humanas en la Olímpica... (Taller de Sistematización de Experiencias, 16 de junio de 2018).

Así, es importante destacar entonces que el Paro es el resultado de un proceso de más largo aliento, tanto que aun después de los acuerdos con el Estado, se manifiesta que el Paro no terminó, sino que permanece en suspenso. Por otro lado, los Puntos de Encuentro, más que bloqueos espontáneos o desordenados, tienen un alto nivel organizativo constituido por comités y por la participación de actores que en principio no parecían tener que coincidir en sus intereses y demandas.

Comerciantes y empresarios locales, Iglesia, profesores, estudiantes, miembros de las comunidades sin estar vinculados a organizaciones, niños y jóvenes, entre otros. Encuentros y coordinación entre la guardia indígena y la guardia zonal. En total, 122 organizaciones impulsando el Paro, con comité de paro y diversos comités como el logístico y los que se derivaron posteriormente en medio de los acuerdos para mostrar el capital construido en ejercicios permanentes con las comunidades y en la construcción de redes, algunas de ellas referenciadas en este documento (véase la Ilustración n.º 4.3. Cronología de actividades realizadas durante el paro).

Resistencia, persistencia, participación, repertorios de acción, puntos de encuentro fueron los aspectos más destacados en relación con la manera en que se interpretan las prácticas del Paro; sin duda un lenguaje que yuxtapone aquellos términos de uso para las víctimas de la violencia (resistencia), con los de orden político y movilizador (persistencia, participación). Junto a esta comprensión metacognitiva, podrían señalarse la de la movilización (la reflexión desde la teoría y la práctica de los repertorios de acción) y el proceso de apropiación del territorio (Puntos de Encuentro). Sin duda, un lenguaje que, unido a la demanda de los derechos humanos y a las prácticas que apelan a los sistemas simbólicos de la cultura afro, indígena, o a intereses diversos de jóvenes, mujeres, comerciantes, empresarios, hace del

Paro un microespacio de análisis de lo social en tanto proceso organizativo de mediana duración, como la generación espontánea, pero ambientada por un contexto, de solidaridades entre comunidades y organizaciones locales, nacionales e internacionales.



Ilustración n.º 4.3. Cronología de actividades realizadas durante el paro

Fuente: Tomado de Posso, L. (2018). *Influencia de líderes religiosos de la Iglesia católica en acciones colectivas en el distrito de Buenaventura durante los años (2007-2017)* [tesis de pregrado, Universidad del Pacífico]. Buenaventura, Colombia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, L. (2008). *Gobernanza y gestión pública*. Fondo de Cultura Económica: México.
- Boltanski, L. (2000) *El Amor y la justicia como compromiso*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Duncan, G. (2014). *Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México*. Bogotá, D. C.: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Gamboa, L. (2015). *Poder político y descentralización administrativa en Buenaventura Desde 1988 Hasta 1992* [trabajo de grado en Sociología, Universidad del Pacífico]. Buenaventura, Colombia.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi, Cinep y Colciencias.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Najmanovich, D. (1995) *El lenguaje de los vínculos: de la independencia absoluta a la autonomía relativa*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Pareto, V. (1979). *Forma y equilibrio sociales*. Madrid: Alianza Editorial.
- Posso, L. (2018). *Influencia de líderes religiosos de la Iglesia católica en acciones colectivas en el distrito de Buenaventura durante los años (2007-2017)* [tesis de pregrado, Universidad del Pacífico]. Buenaventura, Colombia.
- Putman, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sánchez, G., y Gonzalo, J. (2018). Genealogía y políticas de la memoria. Momentos y convergencias de la enunciación social de la memoria del conflicto armado en Colombia. *Análisis Político*, 31(92), 96-114.
- Schiavo, E., Gelfuso, A., y Vera, P. (2017). El derecho a la ciudad. Una mirada desde América Latina. En *Cad. Metrop.* (São Paulo), 19(38), pp. 299-312.
- Wittingham, M. (2010). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? *Revista Análisis Internacional* (2), 219-235.

Fuentes documentales

- Alcalde de Buenaventura se salva de atentado. (19 de agosto de 2003). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1008080>
- Así arranca la puja por la Alcaldía de Buenaventura (09 de mayo de 2019). La Silla Vacía. <https://lasillavacia.com/silla-pacifico/asi-arranca-puja-alcaldia-buenaventura-71483>

- Bonilla, M. (12 de abril de 2014). *Los verdaderos dueños de Buenaventura. Las 2 Orillas*. <https://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/>
- Buenaventura, acorralado por embargos. (11 de diciembre de 1997). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-711862>
- Como parte del plan de choque, fueron despedidos 350 de los 800 empleados de la administración municipal. (7 de enero de 1998). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-788162>
- Condenado a 70 meses Manuel Francisco “Kiko” Becerra. (27 de agosto de 1997). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605075>
- Conozca los escándalos que han rodeado la alcaldía de Buenaventura. (20 de octubre de 2011). *El País*. <https://www.elpais.com.co/valle/conozca-los-escandalos-que-han-rodeado-la-alcaldia-de-buenaventura.html>
- Corrupción en Buenaventura (2014). *El País*. <https://www.elpais.com.co/especiales/corruccion-en-buenaventura/>
- Defensoría del Pueblo. (2017). Informe de derechos humanos paro cívico – Buenaventura. <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6555/INFORME-DE-DERECHOS-HUMANOS-PARO-CIVICO---BUENAVENTURA-2017.htm>
- Departamento Nacional de Planeación. (2014). *Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental*. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
- Este será el nuevo concejo de Buenaventura 2020 – 2023. (5 de noviembre de 2019). Buenaventura en línea. <https://buenaventuraenlinea.com/este-sera-el-nuevo-concejo-distrital-de-buenaventura-2020-2023/>
- El fantasma de la corrupción persigue a la Alcaldía de Buenaventura. (16 de abril de 2018). *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/el-fantasma-de-la-corrupcion-persigue-la-alcaldia-de-buenaventura-articulo-750311>
- El ‘Grupo de los 100’, la banda que desmanteló la educación en Buenaventura. (6 de septiembre de 2015). *El País*. https://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/descubra-grupo-100-aduenaron-educacion-buenaventura?utm_source=rss&utm_medium=rss-pais&utm_campaign=
- Las cifras de la crisis en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico. (2017). *El País*. <https://www.elpais.com.co/valle/las-cifras-de-la-crisis-en-buenaventura-el-principal-puerto-sobre-el-pacifico.html>

Mala ventura. (10 de septiembre de 2000). *Revista Semana*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/mala-ventura/43589-3>

Misión de Observación Electoral (MOE). *Monografía del municipio de Buenaventura*, por: Alejandro Sánchez y Daniel Valencia, con Carolina Gómez, Diana Salazar y Reinaldo Areiza, 2011.

Nueva condena contra Juan Carlos Martínez Sinisterra, esta vez por enriquecimiento ilícito. (24 de abril de 2018). *Noticias Caracol*. <https://noticias.caracoltv.com/cali/nueva-condena-contra-juan-carlos-martinez-sinisterra-esta-vez-por-enriquecimiento-ilicito-ie214>

Pocos cambios en el concejo. (11 de noviembre de 1997). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-669400>

¿Volverán a robarse el agua de Buenaventura? (26 de marzo de 2017). *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/opinion/volveran-robarse-el-agua-de-buenaventura-columna-686449>

AUTORES

MARÍA EUGENIA IBARRA MELO

Socióloga, Universidad del Valle; Magister en Investigación, gestión y desarrollo local y Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid. Profesora Departamento de Ciencias Sociales-Universidad del Valle; investigadora Grupo Acción Colectiva y Cambio Social (Acaso).

FREDDY ALFONSO GUERRERO RODRÍGUEZ

Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia; Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Departamento de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Investigador grupo Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad (Bitacus).

JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ SALCEDO

Licenciado en Literatura y Magister en Sociología, Universidad del Valle; Comunicador social, Universidad Autónoma de Occidente y Doctor en Sociología, Universidad de Lovaina. Profesor Departamento de Ciencias Sociales-Universidad del Valle; investigador Grupo Sociedad, Historia y Cultura.

LINA FERNANDA GONZÁLEZ HIGUERA

Politóloga y Magister en Ciencia Política, Universidad de Los Andes. Profesora Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Investigadora grupo Democracia, Estado e Integración Social (Deis).

ADRIANA ESPINOSA BONILLA

Socióloga y Magister en Sociología, Universidad del Valle. Doctora en Ciencias Sociales con especialización en políticas. Analista territorial de la Comisión de la Verdad creada por el Estado colombiano, después del Acuerdo final para la terminación del conflicto.






Programa ditorial

Ciudad Universitaria, Meléndez
Cali, Colombia

Teléfonos: (+57 602) 3212227
3212100 ext. 7687

<http://programaeditorial.univalle.edu.co>
programa.editorial@correounivalle.edu.co

¡ S i g u e n o s !

   [programaeditorialunivalle](https://www.facebook.com/programaeditorialunivalle)

Este libro es resultado del proyecto de investigación Sistematización de experiencias de intervención social en el municipio de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Una línea de base para orientar la intervención estatal, privada y de cooperación internacional, en una sociedad después de los acuerdos de La Habana.

La investigación se propuso conocer ¿cómo participan las organizaciones sociales en las políticas, los planes, los programas y los proyectos que planifican otros agentes?, ¿cuáles son las dinámicas que les han sido impuestas y en cuáles conservan su autonomía para actuar en su presente y futuro? ¿existen o están ausentes las redes sociales en las formas de gobernanza local para la gestión de lo público? y comprender la teoría del cambio que está detrás de las intervenciones desarrolladas en larga relación entre los agentes interventores y los sujetos intervenidos, haciendo énfasis en siete casos emblemáticos.

El libro muestra resultados con base en el tratamiento de la información documental, de la procedente del diálogo con líderes, funcionarios y profesionales vinculados al tercer sector, ONG, fundaciones, agencias de cooperación, organismos internacionales y organizaciones con los que se validó la información recogida a través de fuentes secundarias y se estableció un diálogo directo con los actores implicados como sujetos de producción de conocimiento. Ese acercamiento permitió identificar factores de éxito y fracaso en las intervenciones sociales, sean estas políticas públicas, planes, estrategias, programas y proyectos.

La principal conclusión es que ningún enfoque de los ensayados en la intervención social implementados en Buenaventura ha logrado planificar un desarrollo que integre la identidad cultural, la protección de la biodiversidad y la redistribución de la riqueza que genera la actividad portuaria y la disminución de las brechas de desigualdad social y económica que enfrentan sus habitantes.

